

PABLO GONZALEZ CASANOVA

LOS MILITARES Y LA POLITICA EN AMERICA LATINA



océano

LOS MILITARES Y LA POLITICA EN AMERICA LATINA

Los militares y la política en América Latina, es un brillante ensayo de la relación política-poder, que en Latino América se expresa frecuentemente con el signo política-militarismo.

El origen de este estudio está centrado en un análisis de la especificidad política de cada uno de los países latinoamericanos realizado a partir de cifras, fechas, datos y reflexiones actuales: la relación política militarismo adquiere un giro distinto en cada país.

El autor estudia la influencia de los Estados Unidos en la formación técnica e ideología de los ejércitos de cada país de América Latina —con excepción de Cuba y Nicaragua— y en la estructuración de un ejército interamericano entrenado para la “guerra interna” y “la guerra de baja intensidad”.

Tajante y agudo, este libro hará reflexionar al lector sobre la situación actual y las posibilidades de cambio en América Latina, sobre el nuevo tipo de dictaduras trasnacionales, sobre la penetración del imperio en los ejércitos dependientes y asociados, sobre la relación ejército-pueblo y ejército-clases dominantes y sobre el carácter vulnerable de la transición a sistemas democráticos frecuentemente dominados por los mismos ejércitos que encabezaron las dictaduras.

\$12,000-

LOS MILITARES Y LA POLITICA EN AMERICA LATINA

PABLO GONZALEZ CASANOVA

LOS MILITARES Y LA POLITICA EN AMERICA LATINA

PABLO GONZALEZ CASANOVA

océano

LOS MILITARES Y LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

© MCMLXXXVIII-Pablo González Casanova
© MCMLXXXVIII-Ediciones Océano, S. A.
Eugenio Sue 55, Col. Chapultepec Polanco
Delegación Miguel Hidalgo
11560 México, D. F.
TELEX: 1760039 eosame-1763559 dpsame

ISBN 968-493-166-2

PRIMERA EDICIÓN

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistemas de reproducción, ni transmitirse en forma alguna, ni por ningún procedimiento mecánico, electrónico, o de fotocopia, grabación u otro cualquiera, sin el permiso previo de los editores por escrito.

IMPRESO EN MÉXICO

*Portada: Alejandra Campos
Tipografía: Arte Tipográfico
Terminó de imprimirse en
marzo de 1988
en Editorial Andrómeda, S. A.,
la encuadernación estuvo a cargo
de Encuadernadora Raf, S. A.,
la edición consta de 3 000 ejemplares.*

Indice

Los golpes militares y sus tendencias.....	9
Variaciones históricas de caudillos y dictadores.....	15
El tirano transnacional	23
Los militares y la política: Argentina, Uruguay y Brasil	29
Los militares y la política: Paraguay, Chile y Bolivia.....	39
Los militares y la política: Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia	49
Los militares y la política: Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala	59
Los militares y la política: México	69
Los militares y la política: República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Granada	73
Los militares y la política: Cuba y Nicaragua	81
Los militares y la construcción de un estado democrático...	85
Los militares y la guerra	91
Referencias bibliográficas	115



Digitized by the Internet Archive
in 2024

*A la memoria del general
Lázaro Cárdenas del Río*

"... No hay ejército apolítico en el mundo... El Ejército Popular Sandinista no es un ejército apolítico. Como no lo es el ejército de México, ni el de Estados Unidos, ni el de Cuba ni el de ningún país del mundo."

Comandante Tomás Borge "El poder lo tienen las clases tradicionalmente explotadas" (Entrevista a. . .) Cuadernos de Marcha, No. 5, enero-febrero 1986, México.

Reconocimiento

Entre las fuentes principales de este estudio se encuentran los trabajos del seminario internacional coordinado por Augusto Varas sobre "Autonomización Castrense y Democracia: Dinámica del Armamentismo y del Militarismo en América Latina", Santiago de Chile, 23-25 de marzo, 1985; igualmente los trabajos del seminario sobre "Movimientos Sociales en América del Sur" que coordinó Fernando Calderón; y el que coordinamos nosotros sobre "Teoría y práctica del Estado en América Latina". En la síntesis y acotaciones a los mismos se insertan observaciones que son exclusiva responsabilidad del autor. Nuestro reconocimiento por las consultas que nos permitieron hacer de su obra, y por las observaciones y comentarios de Gregorio Selzer, Raúl Benítez Manaut, Ricardo Córdova y muchos colegas más.

Los golpes militares y sus tendencias

En la mayor parte de las generalizaciones sobre el Estado en América Latina se ha descuidado el vínculo entre las luchas políticas y las luchas militares y entre los diferentes tipos de dictaduras y de sistemas políticos. El vínculo perdido constituye un serio obstáculo para la comprensión del Estado en América Latina.

El estudio del Estado como fenómeno histórico no puede, de otro lado, basarse sólo en la historia de los hechos singulares. Debe buscar algunas generalizaciones de las luchas por el poder, y distinguir las meramente personales de aquéllas que tienen como objetivo fortalecer ciertas estructuras del sistema social.

Las tendencias de los golpes militares que conducen a diversas estructuras de regímenes autoritarios o políticos ayudan a comprender la construcción de un Estado neocolonial. En ese Estado, el poder se usa generalmente para dominar y explotar al pueblo colonizado y para distribuir el excedente territorial y los gastos e inversiones públicas según las fuerzas y metas políticas y económicas de los nuevos colonizadores y sus intermediarios. Las tendencias de los golpes de Estado más recientes —de la crisis de los treinta para acá— ayudan a comprender la construcción del Estado transnacional.

Los golpes militares implican la conquista del poder por los grupos de las clases dominantes. Lo que éstos se disputan es el poder para explotar a las clases trabajadoras y para distribuir el negocio o el tributo, las rentas y el pago de intereses, las riquezas privadas y las públicas. Las pautas de los golpes militares están así relacionadas con las luchas internas por el control del poder militar, económico y político para el control de toda la población por el grupo hegemónico. Ese grupo hegemónico corresponde hoy a las empresas transnacionales, en especial a las norteamericanas, y a las grandes empresas monopólicas nacionales.

A través de toda la historia de América Latina, los golpes militares y las guerras internas han contribuido a reforzar la estructura de acumulación neocolonial, y han construido una red de cadenas internacionales e internas de estados, empresas, naciones, clases y “razas” desigualmente poderosos. En la década de los treinta se acentuaron los movimientos y las revueltas para crear un nuevo

tipo de Estado-Nación capaz de proteger el mercado interno, de sustituir las importaciones de artículos de consumo popular y de promover una política propia de desarrollo económico y social. En la década de los cuarenta, por vías pacíficas primero y después por golpes militares, se empezó a enfrentar a la nacionalización con la transnacionalización. Y en los cincuenta el imperio inició la ayuda al sistema transnacional ya establecido para hacerlo aún más vigoroso e inapelable.

La evolución de las empresas económicas, el peso cada vez mayor de los trabajadores asalariados en la agricultura, la industria y los servicios, la importancia creciente de la población urbana y de las clases medias cambiaron sin embargo el significado nacional y transnacional de la lucha por el poder. El cambio se hizo notorio desde que en los años sesenta las clases dominantes y el imperio empezaron a padecer una crisis hegemónica y económica y tuvieron que hacer frente al peligro de un nuevo tipo de revolución popular que amenaza al propio sistema social.

Las generalizaciones sobre los golpes de Estado y las “guerras internas” tienen un carácter muy distinto cuando no se toman en cuenta esas variaciones estructurales, y cuando sí se les toma en cuenta. En el primer caso las tendencias cuantitativas de los “pronunciamientos”, de los “golpes militares”, y de los “cuartelazos”, aparecen como simples “variables” dentro de una reproducción constante del Estado. En el segundo, se ven como parte de una reproducción diferenciada del Estado. En el primero ayudan a hacer un mero recuento de las tendencias de las luchas; en el segundo, sirven para describir las diferencias estructurales de las luchas, ya sea porque éstas sólo pongan en juego la hegemonía de un tirano o de una facción, el predominio de ciertas estructuras, o al sistema social mismo de dominación y explotación. En cualquier caso las generalizaciones cuantitativas e históricas ayudan a comprender que los golpes de estado no obedecen a ambiciones meramente personales, y no se puedan evitar sólo con conductas “más institucionales” o con políticas “más hábiles”, cuando se les especifica también ayudan a comprender las reacciones de un sistema transnacional en sus momentos de auge y crisis, y en sus distintos “subconjuntos”.

Algunos análisis estadísticos de los golpes militares son básicos para precisar un proceso en el que las empresas transnacionales y el estado transnacional tienden a integrar un todo variable y funcional. Así, sabemos con certeza estadística que los golpes militares, como las intervenciones extranjeras, presentan un patrón de con-

ducta de carácter cíclico. Aumentan durante los periodos de crisis económica y de depresión, y en los prolegómenos de las guerras internacionales. En ambos casos los golpes de estado proliferan en toda la región, o para aprovechar la crisis y concentrar más el capital, o para preparar la guerra y la contra-revolución armada. En una investigación sobre el tema que va de 1907 a 1966, Egil Fossum descubrió varios periodos excepcionalmente altos en golpes de estado: uno de 1910 a 1915, poco antes de la Primera Guerra Mundial; otro de 1928 a 1933, durante la Gran Depresión, un tercero de 1943 a 1948, en especial cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la crisis económica de la postguerra, y un cuarto de 1961 a 1963, periodo de crisis económica (y hegemónica), cuando la administración Kennedy diseñó la nueva estrategia de "guerra interna" contra lo que llamara "la amenaza Castrocomunista"¹. Los análisis y conclusiones de Fossum se ven fácilmente confirmados por las tendencias más recientes, de crisis y contrarrevolución, ambas reactivadoras cíclicas de los golpes de Estado.

Los análisis estadísticos aclaran también que los golpes militares no tienden a desaparecer. En un estudio acerca de "Los golpes latinoamericanos y las fluctuaciones económicas" Dean Warren confirma que los patrones cíclicos de los golpes militares están claramente determinados. Al mismo tiempo descarta cualquier tendencia a la disminución de los golpes de Estado. Desde 1840 hasta 1879, la tasa de golpes subió a casi 4 por año (3.75). Es cierto que más tarde, de 1880 a 1920, bajó a 2 por año (1.80); pero desde 1930 hasta 1966 otra vez ascendió hasta que se dieron casi tres golpes militares por año (2.73)². El ideal de un progreso cívico y de un desarrollo político lineal no ha sido confirmado por los hechos. Lo que los panegiristas del sistema proclamaron en un tiempo como "desarrollo político" concluyó en su calidad de esperanza más o menos seria después de los golpes de estado de Chile y Uruguay, países donde existían los sistemas políticos más avanzados de América Latina, y que durante tantos años han sufrido dos de los regímenes más represivos que se hayan conocido en la región. Si hoy Chile sigue bajo el yugo militar, Uruguay sale de él en un mundo cuyas tendencias no puede ignorar, menos aún cuando altos funcionarios del Departamento de Estado agradecen a Pinochet "la defensa del mundo occidental" que inició desde 1973, año del magnicidio.

¹ Cf. Fossum, E. p. 228.

² Vid. Warren Dean, pp. 70-80.

En un estudio de Gustavo Emerich que va de la independencia de cada país latinoamericano hasta el 31 de diciembre de 1984, y que comprende 1763 gobiernos, el autor llegó a varias conclusiones que confirman y precisan las investigaciones anteriores. Durante ese largo periodo registró más gobernantes militares (44.8%) que civiles (38.4%) y los militares gobernaron más tiempo (47.6% del total) que los civiles (42.5%)*. Considerando por periodos la proporción de gobiernos militares y cívico-militares, Emerich encontró que ésta es como sigue: 1801-30 (57.0%); 1831-80 (55.7%) 1881-1944 (42.0%); 1945-1963 (34.3%); 1964-77 (50.5%), 1978-1984 (48.1%). En el total del periodo el 48.8 por ciento de los gobiernos estuvo a cargo de los militares, y de las juntas cívico-militares, que se dieron sobre todo en los primeros años de la independencia.

Los gobiernos militares de "entrada y salida", esto es, aquéllos que en plazos relativamente breves entregan el poder a los civiles, predominan en la 2a. postguerra, aunque desde 1964 parecen prolongar el momento de su salida: sólo hasta 1978 empiezan a entregar el poder a los civiles. Cuando la democracia es "gobernable", se diría que el sistema prefiere a los políticos desarmados, civiles; cuando deja de ser gobernable convoca a los políticos armados, militares³.

Hay también una relación significativa entre los golpes militares, las políticas de "desestabilización" y las invasiones extranjeras. Las políticas de "desestabilización" corresponden a la aplicación sistemática y programada de "acciones encubiertas" y "abiertas", económicas, sociales, ideológicas, militares, contra los gobiernos populistas, socialdemócratas y más o menos democráticos, destinadas a controlar la crisis de éstos con soluciones de fuerza que preserven la hegemonía del imperio y aumenten los procesos de transnacionalización de la economía y el Estado. A diferencia de las intervenciones imperialistas tradicionales las políticas de desestabilización más novedosas no sólo esperan sino crean las condiciones de los golpes militares. La vieja desestabilización, la clásica, usaba las contradicciones internas para la conquista, para la reconquista; la nueva no sólo usa las contradicciones, sino las agrava, las acelera,

* Las categorías residuales y sus porcentajes son: gobiernos de juntas cívico-militares (4.0%); eclesiásticos (0.5%); desconocidos, mixtos o confusos (12.4%) para el carácter del gobierno; son cívico-militares (1.6%); eclesiásticos (0.3%); desconocidos, mixtos o confusos (7.8%) para el tiempo del gobierno.

³ Gustavo Ernesto Emerich "Ejercicio del poder y carácter del régimen de gobierno en América Latina". México, 1987. Mimeo.

y no sólo las usa para la conquista o para la reconquista, para la conquista de mercados y la transnacionalización de la economía, sino para una contrarrevolución preventiva, o para la que a falta de éxito en ésta busque derrotar a un gobierno revolucionario ya establecido.

El imperialismo aprovecha su dominio sobre el mercado, un dominio mucho más fuerte de lo que ningún politólogo imaginó, y que llega incluso a penetrar en el mundo socialista, para generar las condiciones económicas de la desestabilización. Usa el poder de las empresas para hacer más poderosas a las empresas. En plena crisis, el imperialismo sigue dominando el mercado financiero mundial y hasta el de los alimentos. Y con ese poder sobre el mercado, que es su último reducto y que fue su matriz, logra un contrapeso a la debilidad ideológica que tiene y a la debilidad militar que empieza a tener. Con el mercado, los "mass media" y los agentes de la CIA arma la desestabilización contrarrevolucionaria defensiva y ofensiva. Al efecto utiliza las propias ideologías y debilidades de sus enemigos para desestabilizarlos; en particular aprovecha las ideologías radicales desesperadas o ilusorias y las consumistas exacerbadas. Manipula a los ultraizquierdistas y aprovecha el atraso de los obreros —p.e. en el Chile de la Unidad Popular—, y de las minorías étnicas —p.e. contra el gobierno revolucionario de Nicaragua—. Enfrenta a los obreros contra los gobiernos que luchan por sus intereses en condiciones difíciles. Enfrenta a las minorías étnicas contra los gobiernos que luchan por la liberación nacional. Y así sucesivamente. Esa es la desestabilización de nuestro tiempo: combina la manipulación del mercado, el consumismo de los obreros, y las clases medias, el tribalismo o el indianismo, las sectas religiosas, la televisión, el rumor, los agentes especiales ultra-revolucionarios, ingenuos o fingidos, y con todos logra una espléndida mezcla que constituye una de las armas más sagaces y complejas contra los gobiernos que no siguen, una a una, todas sus órdenes, desde las monetaristas hasta las terroristas.

Durante el siglo XIX, los gobiernos inestables fueron el pretexto para las intervenciones neocoloniales. Como ejemplo tenemos los casos de Haití (1844-1847), México (1846-1848), Guatemala (1840-1844), Colombia (1830-1831) y Argentina (1827-1830). Durante el siglo XX, la inestabilidad política y social frecuentemente precedió a las intervenciones norteamericanas de larga duración. Así ocurrió en Haití, en República Dominicana y en Nicaragua. Tras las intervenciones militares, los Estados Unidos empezaron a controlar los territorios y naciones latinoamericanas

a través de los gobiernos y ejércitos nativos a cuyos funcionarios y cuadros entrenaron previamente para establecer un nuevo tipo de colonialismo. De hecho la “desestabilización”, como política deliberada que apunta hacia la intervención extranjera, tiene sus antecedentes en la inestabilidad “natural” de los gobiernos; uno de los pioneros de la política de desestabilización para la intervención fue el presidente William H. Taft. Desde 1909 comenzó a hostigar y desestabilizar a Nicaragua, hasta que la ocupación (1912-1925 y 1926-1932) vino como “consecuencia”. El colonialismo mediatisado, esto es, el gobierno colonial que se ejerce por medio de dictadores locales y “guardias nacionales”, entrenados y patrocinados por la metrópoli, también tiene sus antecedentes en los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando se daba apoyo a los dictadores bien dispuestos, incluso a aquéllos que entrenaban a sus jefes militares y a sus ejércitos en las escuelas de Saint Cyr o con expertos importados del Imperio Alemán. Y en fin, algo semejante pasa con los gobiernos militares de larga duración, asociados y hegemonizados por el imperio. A fines del siglo XIX, una serie de golpes militares iniciaron un nuevo tipo de dictaduras casi inamovibles, asociadas al capital monopólico y a las políticas imperialistas. Los nuevos gobiernos —a diferencia de sus predecesores— se mantuvieron ilesos durante años y, a veces, durante décadas. Desde 1871 hasta 1885, el nuevo tipo de dictadores surgió en países tales como México, la República Dominicana y Venezuela. Fueron los heraldos y pioneros de una burguesía local que mejoró en gran medida sus vínculos con el mercado internacional y con la acumulación internacional de capital. Son los precursores de las dictaduras militares estables, que busca imponer más tarde el sistema transnacional aprovechando sus largos conocimientos en materia de “desestabilización”, “intervención” y estabilización asociada y dependiente.

Variaciones históricas de caudillos y dictadores

Cuando se mira en forma retrospectiva la historia de América Latina, parece haber un proceso acumulativo de lo que podría llamarse “el arte de los golpes de estado”, y el arte de gobernar con dictaduras militares. A partir de la independencia de Francia, España y Portugal, las clases gobernantes, las corporaciones armadas y las superpotencias mejoraron su eficacia y destreza en el arte de diseñar y realizar golpes militares, y aprendieron a gobernar a las sociedades dependientes y desiguales para la acumulación neocolonial de capital. Los militares-políticos registraron por su parte experiencias locales concretas, que también transmitieron de unas generaciones a otras, sobre todo con su lenguaje verbal y gesticular, en diálogos abiertos y ocultos. Muchos hubo que se dieron a la lectura criolla de los clásicos del poder —latinos, italianos y franceses— y al estudio de las teorías y técnicas modernas acerca de los regímenes represivos y autoritarios. A un periodo de aprendizaje que pareció ser más o menos aborigen y desarticulado se añadió otro de cambiantes estructuras transnacionales cada vez más articuladas. El proceso ocurrió en cuatro etapas.

La primera va de 1800 a 1880. Durante esos años hubo dos tipos principales de caudillos: los que conducían a las masas contra las clases coloniales dueñas de las grandes propiedades, y los que defendían los intereses oligárquicos.

El primer tipo de caudillos se comportaba de dos modos significativos: algunos movilizaban a las masas sin la menor concesión a los intereses de las clases dominantes, otros llegaban a acuerdos con ellas. Los caudillos populares que no hacían concesiones generalmente fracasaban. Ni mantenían el poder, ni lograban sus propósitos. Los otros también fracasaban pero a veces lograban el establecimiento de regímenes más o menos hegemónicos y hasta llegaban a tener éxito en algunos cambios sociales.

Durante esta larga etapa varios líderes de las masas descubrieron que la toma del poder político era insuficiente para implantar regímenes hegemónicos y estables si no se comprometían con las oligarquías rurales y urbanas, con la burguesía mercantil emergente y con las grandes potencias. Aún los líderes más populares y radicales que lograron el control del aparato gubernamental —como

Benito Juárez en México— aprendieron, tan pronto como asumieron la presidencia, que tenían que negociar con aquellas mismas fuerzas contra las cuales habían luchado y a las que incluso habían destruido militarmente. El triunfo militar, por importante y necesario que fuera, resultaba pobre para lograr la estabilidad.

De hecho, durante todo ese periodo, ninguna política llevó a un gobierno realmente estable. Ni las clases gobernantes locales, ni las grandes potencias pudieron construir Estados hegemónicos. Unas y otras aprendieron sin embargo unas cuantas lecciones. Descubrieron la necesidad de contar con un ejército profesional, y con caminos y ferrocarriles que aseguraran los mercados y movilizaran las tropas, y redescubrieron a la gran empresa colonial como la más adecuada para la estabilidad económica y militar de los centros de trabajo.

Durante la segunda etapa de las dictaduras, que se extiende desde 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial, se pusieron en práctica estas lecciones. Los dictadores se transformaron en instrumentos de una política agresiva que tenía por objeto el establecimiento del neocolonialismo militar. El neocolonialismo se vinculó al desarrollo del capital monopólico bajo el apoyo de los nuevos líderes militares y de las superpotencias. Emergió así un nuevo sistema de dependencia en el cual ciertas facciones de la burguesía y las oligarquías locales lograron la hegemonía a través de regímenes militares nativos encargados del aparato estatal. El capital monopólico usó a oligarquías y burguesías para los nuevos objetivos de la acumulación, para la organización del trabajo obrero asalariado y obligatorio, y para la combinación de diversos modos de producción. El régimen militar desempeñó el papel mediatizador de un estado que no estuvo gobernado por un ejército o burocracia abiertamente coloniales; representó un cierto acuerdo entre las burguesías locales y extranjeras. Las fuerzas de unas y otras cooperaron para la acumulación de capital y la dominación del trabajo con variantes en el peso del trabajo asalariado y el obligatorio y del desarrollo tecnológico, siempre bajo el patrón general de las estructuras de estilo colonial, del comercio desigual y de la explotación también desigual de la mayoría de los trabajadores y habitantes.

En algunos países, los dictadores militares fueron los herederos de la intervención e invasión extranjera directas. En otros, traicionaron a los movimientos nacionales populares y establecieron vínculos con las grandes potencias y con las oligarquías antiguas. Su principal preocupación política consistió en luchar por la hegemonía del gran capital y de las oligarquías y burguesías a través

de la profesionalización de las fuerzas armadas y del control de los ejércitos regionales o privados, hasta imponer su propio monopolio al que llamaron ejército nacional. En el campo económico, lograron su posición hegemónica mediante una política de concesiones y apoyo a la expansión de las plantaciones y las empresas de enclave, y a través del desarrollo, la articulación y la fusión del capital local y el monopolístico en el transporte, la minería y la incipiente industria. Durante este periodo, se dio un cambio considerable en las "técnicas del golpe de estado" y en el contexto en que eran aplicadas. Las principales novedades consistieron en un entrenamiento más profesional del ejército, y sobre todo en el papel significativo que la política de masas empezó a desempeñar, en especial durante la crisis de los primeros regímenes socialdemócratas y populistas. Cuando éstos fracasaban en la satisfacción mínima de las demandas económicas y políticas del pueblo, cuando estaban a punto de ser destrozados por las protestas masivas o por los desórdenes políticos, los nuevos dictadores asaltaban el poder utilizando las contradicciones del gobierno y las masas. Así impedían una revolución popular con una contrarrevolución militar.

Durante este periodo, la mayoría de los dictadores sustentaron generalmente la ideología de la Civilización, del Progreso y de la Modernización como base de la legitimidad de su poder. Algunos hasta pretendieron ser los heraldos de la democracia. En sus rasgos esenciales forjaron el perfil del dictador militar que llega hasta nuestros días.

En la tercera etapa, ya en la segunda postguerra de 1948 a 1958 aparece un nuevo tipo de hombres fuertes y de dictadores militares. Durante este periodo, la mayor parte de los líderes en América Latina contribuyó a articular el sistema transnacional. Lo que se llama "Panamericanismo" representa la estructuración de un sistema de dependencia continental que fusiona los ejércitos y empresas nacionales y transnacionales bajo el liderazgo de los Estados Unidos y de las corporaciones económicas y financieras. Las diferentes partes o subconjuntos del "sistema" tienen una cierta autonomía respecto de la matriz central. Esta autonomía es mayor en los países donde las burguesías locales son lo suficientemente fuertes como para defender su planta productiva y sus mercados comerciales y financieros. En la totalidad de América Latina, sin embargo, el sistema panamericano o interamericano se transforma en un conjunto de estructuras neocoloniales y transnacionales que se combinan con las internas para una variada acumulación de capital, en que la transferencia del valor excedente es perfeccionada

e institucionalizada en los sectores público y privado. Las empresas transnacionales y nacionales, patrocinadas por gobiernos que operan bajo la lógica de los costos-beneficios, y de la corrupción, consolidan las estructuras dependientes de la economía y del poder con sus múltiples articulaciones privadas y públicas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la “defensa de la democracia” contra el fascismo había contribuido a incrementar los lazos entre los ejércitos de los Estados Unidos y los de América Latina. Cuando empezó la Guerra Fría en 1947, el “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (TIAR) legitimó la intervención militar asociada. La doctrina de la “solidaridad continental” combinada con los argumentos de la “Guerra Fría”, estipuló que “un ataque armado por cualquier estado, en contra de cualquier Estado Americano será considerado como un ataque a todos los Estados Americanos”. La idea de un continente unido luchando por la libertad y contra el comunismo fue el pensamiento inherente al “Acta de Seguridad Mutua de los Estados Americanos” (1951); definió los términos de la “ayuda militar” a los países del Continente. Desde entonces, la “ayuda militar” contra el comunismo se transformó en el principal argumento para la cooperación transnacional de los ejércitos “nacionales”. Los acuerdos bilaterales entre la mayoría de los gobiernos Latinoamericanos y el de los Estados Unidos ayudaron a ocultar la dependencia militar mientras la perfeccionaban. Miles de oficiales y personal técnico fueron entrenados en las escuelas militares de Estados Unidos o por las misiones militares que enviaba ese país. Unas y otras proporcionaron las bases técnicas e ideológicas para un nuevo tipo de ejército. Fundamental en esta empresa fue la USARSA (United States Army School of the Americas) más conocida como Escuela de las Américas, con sede en Fort Gulick, zona del Canal de Panamá. Entre 1951 y 1984, en que fue clausurada a resultas del tratado Carter-Torrijos, recibieron allí instrucción más de 46,000 militares latinoamericanos. Hoy, sigue funcionando en Fort Benning, Georgia, con el mismo nombre.

Los movimientos nacionalistas, guiados por líderes civiles o militares, no cambiaron la tendencia principal, es decir, la tendencia a la hegemonía del capital monopólico en la economía, en la cultura, en la tecnología y la defensa, bajo la égida de Estados Unidos. A la penetración e integración pacífica de la periferia latinoamericana por parte de la metrópoli norteamericana, se sumó una violenta lucha contra cualquier fuerza que tratara de desafiar el proyecto imperial, ahora apoyado por una burguesía latinoamericana que se fue integrando y fusionando con la metropolitana como socio minoritario más o menos respetable.

Todo el proceso estuvo relacionado con una política renovada de concesiones y represiones que ayudó a organizar a los obreros asalariados, a los campesinos y a los indios bajo el estandarte de la “modernización” en contra del “tradicionalismo”. Las ideas del “Progreso” como “Desarrollo económico” y de “la Libertad” como “gobierno de orientación democrática”, tomaron como modelo a Estados Unidos, y fueron defendidas incluso por los regímenes más ineficientes y autoritarios del “sistema panamericano”. De hecho, se usó el argumento de la “modernización” contra los gobiernos nacionalistas, y el de la “democracia” contra los movimientos del pueblo trabajador. Como los golpes militares y las intervenciones extranjeras violentas fueron menos frecuentes que en periodos anteriores, y como cayeron varios hombres “fuertes” (entre otros Juan D. Perón en Argentina, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela), la mitología histórica interamericana fue aceptada de manera general y a veces hasta apoyada de manera entusiasta, vulgar y académica. Contrariarla parecía necedad aldeana o complicidad “comunista”.

El cuarto periodo abarca de 1959 a nuestros días. El trágico fin de la revolución guatemalteca en 1954 fue sólo el precedente de la nueva etapa de golpes y dictadores. De hecho, la nueva etapa comenzó como una reacción frente a la revolución cubana, seguida por una reestructuración de la acumulación y de la concentración de capital.

Desde 1959 hasta nuestros días, los dictadores son profesionalmente entrenados para la toma del poder y para la “guerra interna”. Su habilidad política y militar tiene poco que ver con el caudillo tradicional latinoamericano, o con su cultura espontánea e indígena. Aun cuando todavía mantienen rasgos culturales locales, sus organizaciones, filosofía, armas y hasta sus más importantes iniciativas son en general suministradas o administradas por un sistema transnacional que tiene una ideología política afin, una teoría de la guerra y de la paz común, y un conocimiento técnico estandar acerca del “terrorismo de estado” y de la “guerra contra-revolucionaria”.

Todo ello animado por la necesidad de “contener” el ejemplo de la revolución cubana y de prevenir futuros movimientos revolucionarios, empleando al efecto desde la famosa “Alianza para el Progreso”, hasta las más modernas variantes de la teoría de la contrainsurgencia.

Entre los años 1959 y 1969, el gobierno de Estados Unidos entrenó un promedio de 8,475 militares latinoamericanos al año.

Una alta proporción de los oficiales que ahora controlan los ejércitos latinoamericanos y que forman los gobiernos de los dictadores, estudió en las escuelas militares de los Estados Unidos, desde las del Canal de Panamá hasta la del Colegio de Defensa Interamericano en Washington, D.C., donde se les instruyó en campos tales como “seguridad nacional”, “operativos de la jungla”, “contrainsurgencia urbana”, “acción cívica”, “interrogatorio de inteligencia militar”. En total unas 142 escuelas, administradas por el ejército, la armada y la fuerza aérea de los Estados Unidos, proporcionaron a los soldados latinoamericanos enrolados una misma ideología y un mismo entrenamiento táctico y técnico para el control de sus respectivos pueblos. Las “demandas irresponsables” de las masas y las actividades “terroristas” populares fueron el objetivo militar fundamental. La lucha contra el pueblo y sus resistencia fue primero considerada como parte de una lucha contra el “comunismo” y después contra el “castrismo”, y tuvo la intención de eliminar a gobiernos calificados de “incoherentes, demagógicos o populistas”, o de corrompidos e incompetentes, para reemplazarlos por “gobiernos autoritarios responsables” cuya misión se supone que es preservar los valores “occidentales” y “cristianos”.⁴

Durante todos estos años, la policía latinoamericana fue debidamente entrenada bajo el supuesto de que “constituye la primera línea de defensa contra la insurgencia”. De 1962 a 1973, el gobierno de los Estados Unidos gastó 56.6 millones de dólares en las fuerzas policiales latinoamericanas. La Academia Internacional de Policía, en Washington, y distintos oficiales y centros especializados de la policía, en los Estados Unidos, adiestraron a 3,800 cuadros de las policías latinoamericanas. Las bases fueron entrenadas en cada país por “consejeros de seguridad pública” de los Estados Unidos.

Tal como los señalan Klare y Arinson: “dado el hecho que muchos cuerpos policiales latinoamericanos estaban mal entrenados y equipados antes de la injerencia de los Estados Unidos, apenas sorprende que la ayuda del gobierno norteamericano tuviese un profundo impacto en la capacitación de la policía de esos países. . .”⁵ La cooperación policial continental fue complementada contra otra de carácter interno que involucró a fuerzas militares y policiales que anteriormente se resistían a cooperar entre sí. A los militares, como base de la autoridad transnacional, se sumaron los po-

⁴ Michel T. Klare y Cynthia Arinson, p. 139.

⁵ *Op. cit.* p. 153.

licías; a los cuerpos nacionales, los cuerpos auxiliares. Todo dentro de un sistema a la vez uniforme y heterogéneo, centralizado y autónomo.

Los “kingmakers” imperiales no descuidaron el control ideológico. Los instrumentos esenciales del control ideológico fueron la “inteligencia” y la *tortura*. Se combinaron con una filosofía bien estructurada de “*represión legítima*” por regímenes “autoritarios”. El anticomunismo de la Guerra Fría fue remodelado para incluir el “anticastrismo”. Además, fue complementado con una filosofía de la “seguridad nacional” que define al enemigo en términos más amplios, incluyendo, de hecho, a cualquier habitante o grupo de habitantes que puedan amenazar a la libre empresa y al Estado transnacional. Como es habitual, la definición de las fuerzas “amenazadoras” o “enemigas” quedó a cargo de los militares y de la policía. Pero las definiciones surgieron también de un nuevo tipo de autoritarismo que combina el enfoque de la “seguridad nacional” y la perspectiva “tecnocrática”, las ideas “monetaristas” y el liberalismo monopólico, el racismo “biosociológico” y el odio a los pobres, los “desviados” y los intelectuales; el “terrorismo de Estado” y las técnicas psicológicas de amedrentamiento; las tácticas militares de genocidio y los asesinatos selectivos, todo interpretado a través de las filosofías tradicionales del poder, con gestos de cinismo e hipocresía, y legitimado por medio de valores dizque “religiosos”, “liberales”, “democráticos” y “científicos”, que ayudan a ejercer el poder real de la manera más arbitraria, mientras se justifican las decisiones sobre la base de principios, tradiciones o conveniencias, hasta hacer del irracionalismo “racional” o “técnico” de los nuevos dictadores la expresión oficial y laudatoria de su poder.

El tirano transnacional

El perfil de los dictadores interamericanos de hoy es ciertamente distinto del tradicional latinoamericano. Aun cuando todavía muestran algunos rasgos de su cultura represiva vernácula, sus principales características y funciones están estrechamente vinculadas al autoritarismo y la estrategia norteamericanas. Como lo ha indicado el profesor Edwin Liewen: “La mayor parte de los líderes latinoamericanos que condujeron los nueve golpes que estallan entre 1962 y 1966 habían sido entrenados en la estrategia de Estados Unidos”. También sus sucesores.⁶

Los nuevos tiranos transnacionales, son consumidores de las “data sharing operations” y de los dogmas neoconservadores. Usan la información del imperio y defienden sus prejuicios e ideologías. Con el apoyo de un personal debidamente entrenado, emplean “sistemas de computación sofisticados y desarrollados para almacenar datos”, y utilizan la programación de los datos locales y las técnicas de procesamiento para la “guerra interna”. Aunque ellos mismos surgen de “modelos de simulación”, también ellos producen “modelos de simulación”, generalmente patrocinados y ayudados por “expertos” metropolitanos. Robert S. Macnamara dijo en 1962, cuando era secretario de Defensa: “No necesito insistir en la necesidad de tener en puestos de liderazgo a hombres que tengan un conocimiento de primera mano de cómo los norteamericanos hacen las cosas y cómo piensan. Tener tales amigos en tales hombres no tiene precio”.⁷

Los nuevos dictadores transnacionales son semejantes al subconjunto de un aparato estatal que echa sus principales raíces en el capital monopólico, en el gobierno norteamericano y en las fuerzas burguesas locales oligárquicas, y neocoloniales. El enorme aparato enfrenta diferentes contradicciones internas y no funciona como un simple dispositivo mecánico. Frente a las fuerzas democráticas, populistas, y socialdemócratas, alcanza una considerable unidad: está coherentemente organizado para controlar las reacciones del pueblo, y a quienes quieran encabezarlo cada vez que éste se opon-

⁶ Edwin Liewen.

⁷ Vid. Klare y Arinson, *op. cit.* p. 149.

ga a una política que lo empobrece y lo priva de sus derechos individuales y sociales. Pero en cada país y en cada región el aparato militar transnacional actúa según las circunstancias, con un sentido pragmático y flexible.

Los nuevos dictadores han quebrantado las normas constitucionales anteriormente alcanzadas por medio de duras luchas políticas y revolucionarias. Han reducido o eliminado los beneficios legales y sociales que lograron obtener partes de las clases medias, de los habitantes urbanos, de los obreros organizados, de los estudiantes y los intelectuales. Se han comportado como los colonialistas tradicionales, o como los nazis con los judíos, no sólo en relación a los indios y los pobres, sino también a los relativamente privilegiados. Han usado políticas de terror contra cualquier sector de la población en cuanto han sentido que el gobierno imperial-oligárquico está amenazado. Ningún país, ciudad, organización o personalidad ha escapado a la máxima represión "posible" tan pronto como se le ha considerado un "enemigo", o el origen y la base social de las fuerzas "enemigas". Los bombardeos a los poblados campesinos de Guatemala y El Salvador sólo son un ejemplo ilustrativo.

Antes de ser embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas la señora Jeane Kirkpatrick publicó un artículo contra las "ideas abstractas de justicia política o de virtud política". En su artículo abogaba en favor de los "autócratas moderados, amistosos hacia los intereses norteamericanos".⁸ Con un tono reflexivo y crítico, argüía la embajadora en contra del apoyo a "los rebeldes razonables" y a los "régimenes liberalizadores". "Las demandas de ayuda de los autócratas cercados deberían ser atendidas" —decía—; las declaraciones "del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que el pueblo escoja su propio gobierno deberían ser bloqueadas". La señora Kirkpatrick interpretó cualquier concesión a los "régimenes liberalizadores" o a las "ideas abstractas" como una expresión de debilidad emocional, irresponsabilidad política y lentitud teórica, y como el origen fundamental de la derrota norteamericana en América Latina y en la lucha mundial por el poder.

La misma filosofía es sostenida hoy por muchos neoconservadores norteamericanos y latinoamericanos. Unos y otros enfrentan las demandas populares y los movimientos revolucionarios y democráticos con una nueva filosofía de la represión y la concesión, en la cual los valores generales, o las políticas sociales, son considerados en términos de contrainsurgencia, esto es, como una operación

⁸ Jeane Kirkpatrick, p. 34.

a la vez social, política y militar que se utiliza para aplacar y dividir a la población reprimida e intimidada.

Al proponer que se abandone la retórica del “interés general” que prevaleció en los gobiernos de los Estados Unidos desde los tiempos de la política del “New Deal” y la “Buena Vecindad”, el pensamiento neoconservador que domina al sistema transnacional tiende a hacer la ideología de la clase gobernante “más coherente”. De hecho esta filosofía, que en los Estados Unidos tiene profundas raíces hobbesianas de realismo político, combinada con el liberalismo de Locke y de los dueños de propiedades, y con el empirismo y el pragmatismo asociado al sentido común y el desarrollo tecnológico, experimental y científico anglosajón, representa a la vez una crisis de la concesión social y un nivel superior de la represión, es el intento más “sofisticado” de utilizar todas las ideologías reaccionarias para hacer más firme la represión y más implacable la política de “austeridad”.

Dentro de la crisis política y económica que afecta hoy a Estados Unidos y a los gobiernos latinoamericanos aliados o sojuzgados, las contradicciones han alcanzado tal nivel que la socialdemocracia norteamericana y los gobiernos populistas o socialdemócratas latinoamericanos ya no pueden gobernar. Los consumos de las clases medias y las políticas populares de bienestar social, no sólo son frenados sino abatidos. El capital mediano y pequeño, el público y el social no sólo son integrados o privatizados: sino se les obliga a contribuir a la concentración especulativa del gran capital. Países y pueblos enteros realizan grandes transferencias de excedentes que cubren los déficits fiscales y armamentistas de las metrópolis e incrementan las tasas de acumulación de los grandes negocios. Y como la reacción popular a esta política no sólo se limita a los grupos superexplotados sino que incluye a los sectores medios y a los obreros organizados, la pérdida de los mediadores, la radicalización y agresividad crecientes, ligados a la desesperación de los habitantes marginados urbanos, de los campesinos pobres, de las minorías indígenas neocoloniales, de los estudiantes e intelectuales masivos y colectivos, constituyen una amenaza revolucionaria que los dictadores de nuevo estilo enfrentan con una preparación ideológica y militar rigurosamente programada.

Dentro de una estrategia global de crisis económica y hegemónica, que apunta hacia una mayor concentración de capital, hacia una explotación creciente de los trabajadores, y a concesiones y negociaciones sociales decrecientes, la lucha por el poder dictatorial adquiere nuevas características con formas de racionalización y

con técnicas de gobierno que frenan y contraatacan las rebeliones populares. Se impone así un Estado en el que la represión generalizada termina con las concesiones anteriores, bajo un esquema que no sólo tiende a debilitar o aniquilar a las organizaciones de los obreros y campesinos, a las de colonos y clases medias, sino a destruir las reformas sociales y los logros democráticos alcanzados en etapas anteriores. El nuevo Estado confronta a la vez cualquier intento de restablecer el sistema de concesiones del capital negociado, y los proyectos más radicales y revolucionarios por incipientes que sean. Se vuelve así un Estado a la vez antipopulista, antisocialdemócrata y contrarrevolucionario.

Los nuevos tiranos transnacionales no parecen sin embargo eliminar del todo la política de concesiones o negociaciones. Pero éstas son frecuentemente sustituidas por una política de intimidación para la rendición; y sólo operan como concesiones unilaterales o como negociaciones tácticas, que buscan suavizar los puntos más débiles en los momentos más delicados, en espera de condiciones propicias para la represión. Operan como “prebendalismo” social o individual.

Las concesiones sociales están insertas dentro de una política general en la que el capitalismo represivo predomina como tecnología e ideología. El “monetarismo”, y el liberalismo monopolístico, tienden a reducir al Estado a una función policíaca contra la población nacional para dar libertad de acción a las grandes empresas transnacionales y a sus asociados locales. La “seguridad nacional” reorganiza la vida cultural, económica y política en torno al “complejo militar-industrial” y a sus aliados, y justifica el militarismo universal en las políticas internas y externas. La “biosociología” realiza una metamorfosis de las ciencias y las técnicas sociales para el control racista de los latinos, caribeños e indígenas, cosifica a las poblaciones, que son consideradas como macroorganismos cuya conducta patológica lleva a la necesidad de su exterminio para la sobrevivencia del hombre norteamericano o blanco. La biosociología se vuelve la nueva fuente ideológica legitimadora de las políticas genocidas.

La teoría del Estado “autoritario” como preferible al Estado “totalitario” (sea éste comunista, socialista o democrático popular) es la base para la implantación tecnocrática del Estado represivo y terrorista; también es un argumento para justificar el terrorismo de Estado y las acciones encubiertas o abiertas en nombre de la “civilización occidental” y de una democracia identificada ontológicamente con la empresa privada, principal víctima de la

socialización de los medios de producción. Esa teoría fortalece al Estado autoritario como defensor de la “empresa” privada y lo legitima a través de los valores ideales y abstractos que simula.

Algo parecido ocurre en relación a la tecnología como tecnocracia. Por un lado, se usa a la tecnología y a los tecnócratas como una manera práctica y eficiente de aplicar las nuevas artes de la guerra económica, de la guerra social, de la guerra cultural, política y militar; se les usa para una nueva reestructuración monopolista de la economía, y contra las protestas populares y las fuerzas revolucionarias emergentes. Por otro lado, a nombre de la ciencia y la tecnología, se proclama el fin de la política y de las ideologías, justificando así el rechazo a los que tratan de regresar a las antiguas formas de dominación del capitalismo negociado, socialdemócrata o populista.

A las desacreditadas políticas populares o populistas, demócratas o socialdemócratas se les acusa de “debilidad humana” o de “simpatías comunistas”, de corrupción y demagogia, se les señala como culpables de los males actuales y de generar nuevas amenazas a la legitimidad de un Estado y de una sociedad “científica” y “técnicamente” manejados por los dictadores militares o civiles y sus consejeros “especializados”. La “acción cívica” y otros instrumentos de la guerra psicológica e ideológica, desempeñan por su parte importantes funciones al dividir y “ablandar” a las organizaciones populares, y al dar una legitimidad vagamente “paternalista”, o “providencialista”, y hasta “reformista”, a gobiernos que se involucran en verdaderas masacres. Los medios de masas conforman la enajenación de las masas y los líderes con una nueva retórica sin la cual es incomprensible la historia del siglo XX.

El dictador individual del pasado es sustituido por la “junta militar” que lleva a cabo funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, o las delega en órganos que lo representan de manera jerárquica. La junta misma se ocupa de establecer la maquinaria para la lucha interna por el poder, para la perpetuación y sustitución de los que están en el poder y para el proceso de legitimidad, legalidad y “democracia limitada” dentro de la dictadura. Si el dictador individual sobrevive, siempre se encuentra enmarcado en el engranaje de la junta militar. La junta organiza un régimen constitucional autoritario con normas institucionales y prácticas, tajantes en materia de elecciones, escrutinios, plebiscitos, represión y masacres.

El nuevo dictador transnacional impone un “estado de emergencia” que es un estado terrorista permanente. Establece un estado represivo que es tecnocrático. Pero al hacerlo, no pone fin a un

juego que conoce a fondo: el de simular reformas democráticas y hasta sociales. Los juegos democráticos enteramente falsos, de un lado, y las democracias desarmadas, de otro, se renuevan y levantan cada vez que es necesario entre el terror actual o heredado y bajo la amenaza de un regreso revanchista.

Los militares y la política: Argentina, Uruguay, Brasil

Los militares hacen política cuando dominan bajo un gobierno dictatorial, o cuando se ven obligados a regresar a los cuarteles y a permitir regímenes más o menos democráticos. En cualquiera de esos casos los militares son elementos esenciales del Estado; pero su política varía según la fuerza de la coalición hegemónica de que forman parte, según la fuerza de los aparatos de mediación y según su propia estrategia para tomar el poder o retirarse de él. En el Estado transnacional las variaciones se dan también en razón del peso que tienen la empresa transnacional y el capital asociado, y de la forma en que se sienten apoyados o rechazados por los aparatos políticos del Estado: gobiernos, burocracias civiles, partidos, sindicatos.

La lucha del capital transnacional por el control de la producción y el mercado “nacionales”, alterna políticas de represión y concesión con apoyos variados a los aparatos militares y civiles nativos a los que consolida y desestabiliza según le convenga, utilizando su enorme poder sobre el mercado y la producción, sus propias agencias financieras, ideológicas, diplomáticas y paramilitares, y las políticas macrosociales de reducción o acentuación de contradicciones, de consolidación o desestabilización de gobiernos. En el amplio juego, los militares tienen una autonomía relativa, que en el momento actual presenta formas concretas muy útiles para desentrañar lo nacional del Estado y de la política, y para observar las características generales que subsisten en medio de variaciones tan grandes como las que hay entre la Argentina y Haití. Explorarlas en cada nación da una idea más viva del sistema interamericano. El Estado transnacional no desaparece; incluso desde fuera está presente, incluso como amenaza; es más, sus ideas y estrategias resurgen en lo concreto nacional, y en la suma de combinaciones que lo caracterizan en un momento dado —como el actual—.

En los países del Sur el empuje de las fuerzas democráticas presenta algunas características parecidas en Argentina, Uruguay y Brasil. En ellos también muestra semejanzas la forma en que el Estado se reconstruye en medio de la democratización, así como la forma en que la relación de los militares con la política se renue-

va como una relación de Estado. En los demás la situación cambia considerablemente.

En Argentina, en medio de un desprestigio general las fuerzas armadas dejan el paso a un gobierno civil. La guerra de las Malvinas revela su corrupción e ineficiencia ya no sólo en el terreno de la economía y la administración sino en el de la guerra. El movimiento de "las madres de la Plaza de Mayo" en defensa de los desaparecidos ("Con vida se los llevaron con vida los queremos"; "Déle una mano a los desaparecidos") se combina con grandes movimientos de masas que exigen la vuelta a un régimen de partidos y de políticos que sustituya a los responsables de la "guerra sucia".

La movilización civil aisla y anula a un gobierno militar cuyas tres armas están divididas. En franca bancarrota, los militares se ven obligados a dejar el gobierno. Sus sucesores civiles no modifican, sin embargo, las estructuras del Estado, la relación entre el viejo ejército y las fuerzas civiles. Ni siquiera el paso a retiro de casi el 100 por ciento de los generales cambia esas estructuras. El trascendental juicio original a los militares tampoco modifica esta situación. Las relaciones ejército-gobierno civil se reconstruyen con nuevos cuadros que con la misma ideología esperan el momento adecuado para actuar en la "guerra interna necesaria". Más o menos seguros de su participación "tutelar" sueñan con dar un golpe. Ese momento se acerca conforme el gobierno se debilita, conforme las fuerzas democráticas se desunen, conforme los militares recuperan la unidad y se hacen de bases sociales entre la derecha liberal que se vuelve autoritaria y los sectores medios que se vuelven fascistas.

Los militares se sienten acusados sin remedio por los 30,000 desaparecidos. En el asedio, sus jefes recurren a la retirada táctica. Como estrategias observan el enfrentamiento entre el gobierno radical y su proyecto democrático de un lado, y los obreros y su proyecto peronista del otro. Si el gobierno lograra cooptar, corporativizar, mediatizar a los obreros, los militares se quedarían quietos; pero, con la crisis que se acentúa y con la altísima proporción de sectores medios, obreros y empleados, el éxito de una nueva política de cooptación, de un nuevo corporativismo, no está asegurado. Esperan.⁹ Para ello cuentan con el activo apoyo del alto clero, uno de los más conservadores de América Latina.

Como el acoso popular no se detiene, y como continúan las acu-

⁹ Druetta; Fontana; Varas.

saciones y los juicios, dos unidades del ejército, con apoyo amplísimo de las fuerzas armadas, deciden poner fin a la ofensiva. Saben que ni pueden salvar —ahora— a sus altos jefes encarcelados, ni pueden dar —ahora— un golpe de Estado. Pero saben que pueden forzar al gobierno civil si se declaran en rebeldía contra el alto mando militar para que se ponga fin a los juicios. El ejército se rebela contra el ejército con la complacencia del ejército. El poder civil decide ceder a pesar de una inmensa movilización popular. Los rebeldes no son destituidos y apenas son sancionados. El Ejecutivo y los diputados del gobierno votan una ley llamada de “Pacificación Nacional” o de la “obediencia debida”, que exculpa a la inmensa mayoría de los militares acusados de violar los derechos humanos, con el argumento de que en la “guerra sucia” actuaron bajo la “coerción irresistible de órdenes impartidas por superiores”. Al principio la exculpación alcanza hasta los militares con jerarquía de coronel.

La aprobación de la ley es bien recibida en los círculos castrenses y “distiende momentáneamente las relaciones entre el poder militar y el poder civil”.¹⁰ Pero los militares preparan una escalada que va desde la ampliación de la “obediencia debida” y la “exención de toda culpa” a los generales de brigada (con lo cual el número de procesados nunca iría más allá de una veintena), pasando por la suspensión de los juicios por violaciones de derechos humanos y una amnistía general, hasta una nueva “reivindicación pública de la lucha antsubversiva” con exigencias ideológicas de la más pura cepa fascista.

La “democracia con las manos arriba” de que habló algún diputado justicialista se convierte en un hecho que supone que todas las órdenes de tortura, violación, secuestro, desaparición, asesinato, realizadas por los militares durante la “guerra sucia” fueron por orden de los jefes superiores, y sin posibilidad u obligación alguna de resistir esas órdenes. En los hechos, coroneles y otros mandos y filas quedan sin responsabilidad jurídica o moral y con fueros jurídicos, morales y militares que los distinguen del resto de la ciudadanía como en los mejores tiempos de la época post-colonial en los gobiernos conservadores del siglo XIX. La constitución real del Estado consagra nuevamente el fuero militar.

Las grandes protestas que se levantan no logran pasar los límites de una lucha de opinión, ideológica, moral y jurídica. Quienes plantean el problema del poder y su lógica —del presidente para abajo—

¹⁰ *Unomásuno*, 6/6/87, y *La Jornada*, 6 y 7/6/87.

exigen conformarse, reconocer la situación y aceptarla. En un caso, lo jurídico y moral no plantea la necesidad del poder; en el otro, "lo político" no plantea la necesidad de la igualdad ante la ley ni la inconstitucionalidad del fuero militar consagrado. Se piensa en los mismos términos que el general Héctor Ríos Ereñú cuando dijo: "quizás la solución global sea una solución política".¹¹ Los militares han cerrado el cerco a la democracia argentina. El desprestigio del gobierno y su debilitamiento los ayuda a cercarlos todavía más. Ni legal, ni estructuralmente se han sentado las condiciones para que dejen de vigilar a la democracia esos mismos militares que dirigieron y ejecutaron la guerra sucia.

En Uruguay, "la permanencia de un partido político en el gobierno durante 93 años —dice Real de Azúa— sometió a las fuerzas armadas a una condición muy particular, la de constituirse en el "brazo armado" del Partido Colorado. . . Las aspiraciones de la oficialidad —añade— estuvieron sometidas a un enérgico proceso de compatibilización con las propias de los grupos gobernantes".¹²

Más que una "sujeción al poder civil" se trató —como en México— de una dependencia respecto al Presidente de la República quien con el Partido manejó el sistema político, las fuerzas armadas y el Estado, comenta María del Huerto Amarillo, y dice algo que parecería ser nuevamente válido: "nuestros dirigentes políticos han actuado siempre como si las fuerzas armadas no existieran".

Después de todos estos años de dictadura militar, cuando las fuerzas armadas se ven obligadas a regresar a los cuarteles, cuando un gran movimiento de "concertación democrática", que incluye a las antiguas agrupaciones del Frente Amplio, dirige en alta proporción el proceso, ni la conciencia de las masas sobre la existencia de los militares, ni la capacidad de acción político-militar de los líderes, permite alterar las relaciones de Estado de las fuerzas armadas y el gobierno civil.

Si no es el sistema político, sino el Estado el que impone los límites formales y reales de participación de los militares, y el que les da una posición subordinada al poder civil, uno se pregunta ¿qué cambio ha habido en el Estado uruguayo como hegemonía, o si sólo ha habido un cambio de alternancia entre el sistema represivo y el sistema político de gobernar? Además existe el agravante de que el ejército —profundamente transnacionalizado— "sigue sin conexión funcional ni social con la comunidad

¹¹ Brecha, 10 de octubre de 1986.

¹² Carlos Real de Azúa. Cit. por del Huerto Amarillo.

en que opera, sin correspondencia con los valores políticos que rigen esa sociedad, encastado, con una estructura impenetrable y jerárquica".¹³

El problema se acentúa porque el conjunto de las fuerzas democráticas más amplias, (las que han llevado a cabo una concertación o alianza que permitió la vuelta a la democracia) se "ve limitado a ciertos objetivos, uno de los cuales es el sistema político" pero no busca, ni como punto de partida ni como meta, cambiar las estructuras del Estado en lo que éstas tienen de dominio de clase o de coalición de poder. A lo anterior se añade, a diferencia de Argentina y Brasil, que la "transición a la democracia" se da por medio de un pacto cívico-militar, razón que deja a los militares en una situación privilegiada y con una gran capacidad de veto.

En condiciones políticas más avanzadas que las de Argentina, sin los enfrentamientos que allí se dan entre las fuerzas radicales o socialdemócratas y las peronistas, en el Uruguay se advierte también un proyecto de democracia sin cambios en el Estado y menos aún en las estructuras o el sistema social.

Los cambios que proponen las fuerzas progresistas encabezadas por el Frente Amplio se encuentran a nivel de demandas generales que están muy lejos de ser aplicadas. Mientras tanto la crisis continúa. La economía y la agitación social incluso parecen "reproducir las condiciones de exclusión que erosionaron las expectativas democráticas desde los años sesenta". La posibilidad financiera de crear nuevas formas de corporativismo, cooptación y mediación es poco alentadora. Y en el propio Frente Amplio no se da la voluntad política de un nuevo Estado con una nueva hegemonía, con nuevas estructuras de participación y fuerza. El conjunto de las organizaciones de masas y sus líderes plantea insuficientemente una alternativa que vaya más allá de impedir la amnistía a los criminales de la "guerra interna". El democratismo predominante no es superado como acción y conciencia de las masas. Los militares—menos debilitados que en la Argentina— también están a la expectativa, y en la resistencia.¹⁴ Alrededor de una docena de servicios conforman el sistema de inteligencia del ejército. Espían a las organizaciones y partidos considerados legalmente como "subversivos" en tiempos de la dictadura. Con sus distintos equipos de inteligencia vigilan a los partidos. El Batallón de Blindados No. 13

¹³ Del Huerto Amarillo.

¹⁴ Cf. Stolowicz, Beatriz, *et al.*

vigila a los sindicatos, el Batallón de Paracaidistas No. 14 vigila a los empleados, el 15 a los "docentes". El Batallón de Comunicaciones No. 1 rastrea las radioemisoras. Otros servicios espían a expresos políticos. Y hay desde luego quienes espían al propio ejército.¹⁵

Sin cambios sustanciales en el poder del Estado, con acuerdos de origen entre los políticos y los militares, con una fuerza represiva que mantiene incólumes sus altos mandos, a fin de cuentas la democracia uruguaya es obligada a legalizar su vulnerabilidad. La ofensiva empieza con un desacato de los militares y policías citados por los jueces. Se niegan a comparecer. Plantean así el problema de la fuerza. Ante los hechos surgen en principio dos actitudes: la de quienes exigen una solución legal con determinación de responsabilidades públicas y penales para los omisos, y la de quienes proponen la legalización del derecho a no ser juzgado. Esta proposición es la del gobierno, y la que triunfa con una llamada "ley de la impunidad" para los crímenes ocurridos durante la dictadura. Aprobada con gran prisa durante las fiestas navideñas de 1986, por el Senado primero y los diputados después, la ley exime a los militares de "la obligación de todo ciudadano a comparecer ante la justicia" y declara impunes los crímenes de la dictadura.

La reacción sigue siendo predominantemente jurídica, aunque con movilización de la opinión pública para convocar a un plebiscito que la derogue. Entre las formas del razonar jurídico se argumenta que en los acuerdos de los partidos y el ejército para regresar a la democracia "lo lógico y natural era suponer por todos que lo que iba a ocurrir cuando la democracia llegara era que todos se iban a encontrar igualmente sometidos a un orden jurídico", en palabras de un senador del Frente Amplio.¹⁶ Ese tipo de argumentación, como en la Argentina, plantea lo jurídico al margen del poder y se ocultan varios problemas que las fuerzas más avanzadas tratan de destacar, cuando en la "ley de la impunidad" ponen al descubierto las complicidades del gobierno, el Estado y las clases dominantes, y señalan la necesidad de un nuevo bloque de poder, y la de desarmar a los militares golpistas antes de enjuiciarlos legalmente para condenarlos o perdonarlos. Pero desarmar a los golpistas es otra historia de luchas que se inicia sin una idea clara de cómo se va a desatar y menos aún de cómo va a concluir. Hoy, con las estructuras del poder militar intactas, la argumenta-

¹⁵ Brecha, 4 de Julio de 1986.

¹⁶ Brecha. 26 de Diciembre de 1986.

ción en su contra es muy débil. Profundizar en ella es sobre toda tarea del Frente Amplio, una tarea con muchas zonas por investigar y cambiar en la teoría y la práctica.

En Brasil "los militares ocuparon el Estado" y hoy las fuerzas civiles están muy lejos de ocuparlo.¹⁷ Con la teoría de la "seguridad nacional" —ideada por su más importante ideólogo, el general Golbery do Couto e Silva— los militares reformularon el sistema de seguridad militar y policial y mejoraron la "seguridad política". Así, los límites de la "desmilitarización política", económica y social del Brasil postmilitar se determinan con el criterio de la seguridad política de los militares. La apertura política "se lleva a cabo dentro de una estrategia de poder militar global, lenta y segura".¹⁸ El proceso va de 1974 hasta las elecciones indirectas de un gobierno civil en 1985. Durante ese periodo se adopta la llamada "estrategia de control directo", esto es una estrategia de creación de mediaciones y de vínculos con políticos, burócratas, líderes. Es una "nueva forma de integración cívico-militar que altera las bases estructurales del sistema político brasileño".¹⁹ El sistema autocrático se autorreforma. Primero genera un régimen liberal de democracia controlada; después realiza sucesivamente la "apertura política", la "amnistía política", e incluso acepta que la oposición luche por posiciones de poder, un poder regulado, como participar en la elección de los gobernadores y el presidente: es la "transición democrática". A continuación empieza a reconocer a los movimientos sociales como instituciones. Además reorienta algunos recursos estatales hacia las "favelas" y barrios marginados. Inicia la construcción de mediaciones entre marginados y trabajadores.

Se diría que el Estado neoliberal busca una nueva corporatización. Lejos de permitir siquiera el esbozo de un poder popular trata de incorporar y cooptar al máximo movimientos y líderes. Al mismo tiempo el ejército sigue siendo y declarándose la "última garantía" de la política y de la legalidad. Los movimientos insospechables de las masas abren más de lo previsto el sistema político, pero no alteran en nada al Estado. Es una transición "militarmente controlada" y sólo en segundo término negociada. "Los partidos no tienen aún claridad de lo que hay que hacer con las fuerzas armadas. Corren el riesgo de reproducir una antigua tendencia. . . en vez de preferir organizar los intereses sociales —ganar

¹⁷ Brigagao, Clovis.

¹⁸ Brigagao, Clovis.

¹⁹ Walder de Goes. Cit. por Brigagao.

a los militares—”.²⁰ El problema es más grave: no tienen claridad de lo que deben hacer con el Estado. Si algunos elementos sociales se incorporan a la política “los partidos tienden a mantener una peligrosa disociación entre el mundo de las relaciones capital/trabajo y el plano político”.²¹ Como no reorganizan los intereses sociales, ni siquiera se asoman al problema del Estado. Es cierto que un gran movimiento, casi universal, recorre al inmenso país. El movimiento “por las elecciones directas” reúne a todos los demás movimientos. Pugna por una reivindicación global de la ciudadanía. Lo que pueda venir detrás de él es un proceso histórico en que la lucha de clases, hasta ahora, sólo aparece como conciencia de unos cuantos y en que un nuevo poder del Estado no corresponde a una estrategia global reformista-revolucionaria.

En la democratización actual de Brasil la conciencia político-estratégica de los militares alcanza su máxima expresión. Corresponde a un vínculo intelectual y de poder de los altos mandos, el capital transnacional y el gran capital local. Si éstos empezaron a tener un proyecto democrático para Brasil, y es evidente que la gran burguesía brasileña luchó cada vez más activamente por el actual proyecto democrático, los militares buscaron asesorarse a tiempo sobre la mejor manera de realizarlo. En gran medida lo lograron. Como observa Zaverucha: “Una característica de Golbery é procurar se antecipar as mudanças que considera inevitáveis”.²² El proyecto empezó cuando el ministro Leitao de Abreu “se confabuló con el profesor Huntington para preparar la democracia en Brasil”. Aunque el académico norteamericano no es especialista en Brasil hizo sus recomendaciones. Criticó por un lado al populismo y por otro a la tecnocracia. Al populismo lo censuró por enfatizar el bienestar social que lleva al estancamiento económico, que provoca la disputa por los recursos, el conflicto social y la intervención militar. A la tecnocracia la criticó porque “estimula el crecimiento en detrimento de la igualdad social, el orden en vez de la libertad”. Advirtió que su efecto es la insatisfacción popular que lleva a la represión, en un círculo vicioso “que es necesario romper para que no conduzca a una situación revolucionaria”.

El profesor de Harvard propuso al ministro brasileño tres medidas: “la primera, institucionalizar procedimientos para que rotaran los cargos electivos, incluido el de Presidente de la República. La

²⁰ Eliezer Rizzo de Oliveira.

²¹ Cf. Rizzo de Oliveira.

²² Zaverucha, Jorge.

segunda, que se ampliara la participación política efectiva de los elementos clave de la sociedad civil en el proceso, inclusive en la selección del presidente. La tercera (la más importante para el profesor en el periodo de "la descompresión") consistía en liberalizar y en reducir gradualmente las restricciones del AI-5* de control sobre la imprenta, esto es, la censura, el freno al debate público y a la expresión de la opinión".²³

Más tarde, el famoso geopolítico brasileño general Golbery do Couto e Silva llevó a cabo las recomendaciones del famoso profesor norteamericano.²⁴ Si hay un modelo pensado y aplicado por el estado transnacional, ese es el brasileño. En Brasil se da la democratización como transnacionalización a un grado sin precedente de coordinación entre las burguesías locales y metropolitanas, con sus respectivas "esferas de influencia" mucho más respetadas que cualquier "soberanía popular".

A nivel político, la transnacionalización ocurre como "democracia controlada", conservadora y liberal con elementos de neo-corporativismo y cooptación de dirigentes. "El conservadurismo socioeconómico —ha escrito el mismo Zaverucha— es el precio que se paga por la democratización, pues es el medio más seguro de garantizar los intereses comunes de las fuerzas del régimen autoritario". Aplicarlo es fundamental para sostener los costos de la democracia entre los habitantes de las ciudades que son ciudadanos. Democracia con desnutridos. 60 millones de electores permiten olvidarse de 86 millones de desnutridos. Brasil es una "democracia pobre", pero "es una democracia". Lo demás es natural y hasta impertinente recordarlo.

La lucha por el respeto de las "esferas de influencia" de las clases dominantes no puede descuidarse. Ocurre entre movimientos de masas, entre explosiones de descontento por la crisis económica y el empobrecimiento de la población, y otras que presionan por una mayor participación en el sistema político.

Los militares brasileños están preocupados por la creciente presencia norteamericana en Bolivia y Ecuador. Están en contra del proyecto "parlamentarista" con que la burguesía transnacional y asociada quiere quitarle poder a la institución presidencial, hasta ahora controlada por ellos. También les preocupa la ofensiva neoliberal que pretende privatizar a las empresas estatales, base de su

* AI-5, Acta Institucional No. 5, dictada por los militares.

²³ Entrevista concedida al *Jornal do Brasil*, 16/1/85, cit. por Zaverucha.

²⁴ Cf. Zaverucha, *op. cit.*

cuota de poder. Estas dificultades se parecen en parte a las que en México tiene la "clase política" frente a la creciente presión norteamericana en Centroamérica, frente al proyecto neoconservador contra el presidencialismo y frente al neoliberal contra la "rectoría del Estado".

La alianza de los grandes empresarios, los militares y la "clase política", no obsta para que el capital transnacional quiera todavía más, y para que los bloques de poder locales, acosados tiendan a defender sus territorios o zonas de influencia y sus instrumentos institucionales de negociación, por penetrados que estén o débiles que sean. En todo caso, la dialéctica de la transnacionalización, entre las propias burguesías asociadas, sólo da lugar a enfrentamientos que hasta ahora tienden a reestructurar la hegemonía del bloque dominante, mientras muchas de las fuerzas políticas que buscan una alternativa, no logran hacer su propio juego político y de poder.

En Brasil, a las presiones de la gran burguesía transnacional se añaden las de la ciudadanía y las masas, con gritos de "¡directas, ya!" y demandas hambrientas. Los militares, preocupados, se enrocan en sus visiones tutelares y ancestrales. El 8 de mayo de 1987, a raíz de una ola de huelgas y acciones multitudinarias, el Estado Mayor, encabezado por los ministros de las tres armas, reafirmó públicamente "la disposición del ejército para reemplazar la fuerza de los argumentos por el argumento de la fuerza". Dos días después, el ministro del ejército, general Leónidas Pires, criticó virulentamente "la ola de huelgas" y asumió el papel del gran árbitro, haciendo un llamado para suprimir el desequilibrio entre "las exigencias de la Nación y las posibilidades del Estado".²⁵ Mientras tanto continúa el deterioro del gobierno civil ante la opinión pública.

²⁵ *La Jornada*, 13 de mayo de 1987.

Los militares y la política: Paraguay, Chile, Bolivia

En Paraguay el Estado, los militares, la clase gobernante, la política y el dictador forman un todo cuyas partes a veces no se distinguen. Es dictadura avanzadísima de un país muy pobre. En Paraguay se combina el terror y el consenso de un Estado que no sólo es aparato represivo sino agente económico y social. Se trata de uno de los Estados más sofisticados y de los más primitivos. Plasma una especie de neocapitalismo “rezagado” con neocolonialismo vigoroso, sin clase obrera. La historia de los últimos treinta y tres años corresponde a una expansión estatal y a una reducción de la sociedad civil con atomización social. La estrategia del Estado militar-dictatorial descansa sobre todo en mediadores burocráticos combinados con los mediadores sociales e incluso con los políticos. Sólo que los actores sociales no son políticos y los políticos no son actores sociales. De lo contrario se les elimina. El actor político es actor estatal y el Estado actor militar, político y social.

La organización del Estado implica la ruptura de las organizaciones de la sociedad para una reorganización de núcleos funcionales comunitarios, familiares, sindicales, campesinos. . . El proceso se realiza a tres niveles: el de la sociedad, el del Estado y el de la política. A nivel social hay una “neutralización de las contradicciones” en que los elementos de la lucha son neutralizados *ab ovo*. Para eso se combina la represión con la política de emigración más agresiva (800,000 paraguayos emigran a la Argentina) y con una distribución de tierras que no afecta la estructura latifundista, antes la complementa. A nivel del Estado, aunque todas las decisiones fundamentales pasan por el dictador, éste tiene como base una argamasa social nacional de la que participa hasta la oposición, y cuando la oposición no participa es eliminada a sangre y fuego. (Textual). Además, existe un movimiento organizado de consenso estatal y de desorganización de la sociedad civil. El “Partido Colorado” es el partido del Estado que encabeza el dictador. A la represión sucede la legitimación del Estado, del sistema y del gobierno por la oposición desarmada.

La sociedad, el Estado, los partidos pasan de la lógica de la conspiración a la lógica de la razón de Estado. El régimen se reproduce

por el partido del Estado y por los partidos de oposición legalizados y parlamentarios. Primero se desarma a los partidos. Después se deja a los partidos entrar y se saca a los ciudadanos de los partidos. Se politiza a los líderes y se despolitiza a las masas; los propios líderes despolitizan a las masas. En el terreno político las elecciones implican una preocupación de legitimación, y la mira de organizar la oposición desde el sistema. En 1983 Stroessner se reeligió por quinta vez. Obtuvo el 90 por ciento de los votos en una elección que fue de todos modos fraudulenta, y en medio de una gran abstención. Con un ejército sin fisuras unido bajo su mando, y una excelente salud, el dictador se prepara para vivir cien años y para ser candidato a una sexta reelección. De todos modos su muerte previsible, y la crisis económica y política levantan la lucha por la democracia.

En el sufrido país se busca “un espacio de lucha”. Unos van al “stroessnismo sin Stroessner”, otros en busca de nuevas mediaciones. La alternativa que se propone es “democracia sin comunismo” frente a “democracia representativa”. En el propio partido del Estado surgen tendencias. La Iglesia se politiza, una parte se radicaliza. Los obreros y trabajadores agrícolas intentan alcanzar una “democracia con sindicatos autónomos”. Los campesinos invaden algunas tierras en la región del Alto Paraná. Se apropian de ellas más como paraguayos que como trabajadores, más como nación despojada que como clase en rebelión. Como el Estado ya no tiene tierras que darles, mientras preserva el latifundio nacional o transnacional, ellos invaden las tierras. Para hacerlo se basan en la retórica oficial de “tierras a los campesinos” y en la retórica nacionalista conservadora.

En el desigual país subsisten los movimientos arcaicos, prepolíticos, que siguen marchando hacia utopías milenarias, y existe con la política de los militares y la de los revolucionarios la de una gran burguesía que contempla las posibilidades de terror y la mediación. El ejército del Paraguay es un ejército de familia, cerrado, inmóvil. Es como un ejército privado sin normas institucionales corporativas. Sigue sólo las del contrabando y las concesiones de una corrupción que según el propio dictador es “el precio de la paz”. Y aunque los militares no han sufrido ningún desgaste, y los bloques populares que los tienen en la mira son un peligro inorgánico, parte de la gran burguesía se adelanta con su proyecto de “democracia representativa”. La burguesía no sólo busca ampliar su espacio político. Quiere decidir la política económica de la crisis ahora que han cesado los efectos benéficos de la represa del Itaipú. Con la

“democracia representativa” busca el recambio de gobierno, el pluralismo; pero busca sobre todo “nuclear” movimientos y fuerzas sociales, creando nuevas mediaciones.

Los militares y los políticos del Estado que hablan de la democracia quieren una recomposición política, e intentan salir de la principal respuesta del Estado, que es la represiva, en que la política se vacía, hacia otras formas que reconstruyan las mediaciones. Es cierto que el Estado continúa legalizando algunas ocupaciones de tierras, negociando con algunos obreros, mientras los atomiza y mientras coopta a sus líderes o los elimina; pero la oposición no descansa. Encauza movimientos políticos que tienen como referencia el interés de clase y busca articularlos en torno a ese interés hasta ahora migrante, disuelto. También en Paraguay la lucha por la preservación y transformación de las mediaciones, o por la creación de otras nuevas parece la lucha principal. En ella los militares se dividen en alianzas que conducirían a un stroessnismo con el hijo de Stroessner, y en las que llevarían a nuevas formas de “democracia transnacional”. Washington parece inclinarse por ésta; pero aún no ha decidido.

Lo que sí ha decidido es apoyar abiertamente la “democratización” de Paraguay. Envejecida la mediación, Stroessner busca otra nueva. Empresarios, clero, profesionistas, estudiantes se movilizan contra el dictador y gozan del derecho de audiencia con el embajador de los Estados Unidos. Ante las protestas del extrañado ministro del interior, el embajador declara que sólo actúa por instrucciones de su gobierno. En efecto, el presidente Reagan ha declarado en dos ocasiones “que está haciendo esfuerzos para llegar a una democratización del Paraguay”. Y ha autorizado a su embajador a hacer pública la lucha por sus ideales.

En Chile el diálogo con el magnicida es imposible; él lo sabe. También sus colaboradores, sobre todo los que lo acompañan desde 1973. El gobierno militar centraliza el poder en Pinochet, que es presidente, y comandante en jefe. No hay gobierno de Junta. Pinochet tiene órganos consultivos sin poder. Ha integrado en un solo mando a los carabineros y al servicio de inteligencia, y ha multiplicado los gastos militares y policiales acordando privilegios corporativos a sus miembros, fueros, prestigios, todo dentro de una jerarquía rigurosa. Las pugnas de las tres ramas militares quedan bajo el control del ejército y éste bajo el de Pinochet. Ni expresan luchas externas, ni van más allá de reclamar una autonomía interna muy relativa para la solución de problemas menores, de problemas de trámite.

La experiencia de la Argentina cohesiona a los militares en torno a su jefe. El gobierno ha destruido y no ha podido o no ha querido reconstruir sus propias mediaciones de masas. Nacionalistas y fascistas no han sido alentados o autorizados a formar un "movimiento civil" permanente de apoyo al régimen. La crisis del modelo friedmaniano en 1982 afectó muy poco al autoritarismo gubernamental: se limitó a "una explosión de reivindicaciones particularistas". Apenas a principios de marzo de 1987 se fundó un débil partido de apoyo al dictador. El autoritarismo sin mediaciones siguió funcionando con el apoyo de sus fuerzas represivas, y con el que en última instancia le presta el gobierno norteamericano. La constitución de Pinochet es un proyecto de institucionalización del régimen existente. Aunque en 1989 pondría fin a la fusión del comandante en jefe y el presidente, todo seguiría controlado por el ejército.

Mientras tanto una parte significativa de la nueva generación piensa en el sacrificio como exigencia vital. Admira a Allende. En su seno apenas empiezan a coincidir los sentimientos y la eficacia. Todavía hay rebeldes declarativos, manifestantes heroicos. Son jóvenes que salen al sacrificio más que a la victoria, en una etapa en que el sacrificio parece fatal, inevitable para echar a andar otros movimientos más eficaces, masivos. Por lo menos así piensan y se arrojan estos jóvenes. Y repudian a los sindicalistas "reivindicativos", a los políticos de mentalidad negociadora, o "corporatista". Es difícil saber lo que pasa. La cruel dictadura ha logrado dividir y ocultar al país real. Pero éste también "se oculta". Hay tópicos y actores "desaparecidos" que "se desaparecen". Temas y hombres reprimidos que "se reprimen". "No quieren que protestemos; no se trata de protestar". "No nos dan; no se trata de pedir". En ese antiguo país de partidos políticos falta un espacio institucional de partidos políticos. Éstos no crean el espacio institucional formal, crean un espacio de poder.

Se dan los elementos de una explosión. Si los actores clasistas pasan a un segundo plano no desaparecen, sino que actúan con las nuevas fuerzas emergentes, de marginales, a menudo en uniones de base, unos defendiendo el empleo o defendiéndose de las condiciones de empleo, otros de la marginación creciente y desde ella. Más que huelgas en las fábricas hay protestas en las calles. Muchas luchas no logran constituir estrategias. Se estructuran y desestructuran. Son movilizaciones, ni siquiera movimientos. Muchas luchas no son abiertamente anticapitalistas ni socialistas. Son antiautoritarias con una conciencia de clase desconfiada de "los de afuera".

Pero se ha superado aquella etapa en que unos pensaban: "Todo va a ser igual a como es ahora", mientras otros pensaban: "Todo va a ser igual a como era antes". El "reflujo ideológico" de los sectores medios hace que éstos se propongan como árbitros de los extremos, hecho que ocurre al mismo tiempo que los fenómenos de radicalización espontánea, y mientras, surgen grupos revolucionarios que acometen acciones armadas, algunos ligando la vieja cultura revolucionaria y la nueva, del Partido Comunista, del MIR.

El "instinto de clase" de la burguesía chilena se agudiza. Un sector importante de la burguesía aumenta su distancia frente al gobierno para dirigir y controlar el proceso de "recuperación democrática", sin que los militares le tengan miedo y sin que lo tenga el resto de la burguesía. Pero esa alternativa al régimen tampoco puede forjar una política de confusión de clases, de mediación y mediatización. Como Pinochet, esa burguesía quiere hacer una política estrictamente "burguesa", sólo que de democracia transnacional. En la "Alianza Democrática" rechaza incluir en sus filas a los partidos de izquierda, y rechaza también el uso de la violencia para derrocar al régimen al tiempo que desconoce la legitimidad del mismo. Desde ahora excluye a la izquierda para configurar el marco de quienes tendrán derecho a hacer política. No parece segura de una política exitosa de mediaciones, cooptaciones, neocorporativismo. Así, el "Movimiento Democrático Popular" de la izquierda nace por la negativa de la "Alianza Democrática" de incluir a la izquierda. Entre sus tácticas de lucha no descarta la violencia. La inviabilidad actual de un gobierno de centro dificulta la unidad de las fuerzas opositoras. En Chile parece hoy imposible pensar en un gobierno de centro más o menos estable. Todas las mediaciones muestran haber entrado en crisis y no se considera fácil reconstruirlas. Volver a la "democracia electoral" o a una "democracia electoral limitada" sin reformas de estructura, sin políticas sociales, nacionales, populares, obreras y de minorías étnicas es sólo "abrir la caja de Pandora". Parece en Chile imposible regresar a un pasado anterior al del último gobierno de Eduardo Frei y al de la Unidad Popular.

Vista por los militares y por la gran burguesía la dialéctica de la democratización, indica que en caso de aumentar la fuerza de la izquierda revolucionaria (armada o civil), militares y gran burguesía intentarán poner como relevo a la alianza pseudo-opositora. En su proyecto. Por su parte, las fuerzas más lúcidas de la izquierda piensan en un levantamiento masivo contra el dictador al que buscan sumar parte de las fuerzas armadas. En todo caso, tanto el proyec-

to de democratización transnacional como el de democratización popular cuentan con una acción en el interior del ejército. Esa acción pondría fuera de juego a todas las fuerzas que controla Pinochet, empezando tal vez por Pinochet. Mientras tanto continúa el terrorismo de estado pinochetista. No es un problema de dictadura personal, sino el de una sociedad a la que toda la represión no ha hecho olvidar su experiencia de clases y masas, que ha complementado con una nueva cultura que va más allá de lo meramente político y de lo meramente conspirativo. Por eso la burguesía ve el peligro de cualquier concesión, de cualquier conciliación, y los militares también: para ellos el gobierno que suceda a Pinochet debe ser tan burgués como el de Pinochet.²⁶ Con la mayor seriedad piensan en un pinochetismo sin Pinochet. Otra vez la solución norteamericana con Cuadra, Merino o Valdés.

El fallido atentado contra Pinochet agudiza el instinto de una política de clase. El centro-derecha aumenta su capacidad hegemónica. El gobierno estatiza el 60 por ciento de la banca; aumenta las tarifas de importación para promover la industria nacional; recupera el control del comercio exterior y el control de cambios; alienta a sus bases sociales de apoyo. El problema es que para el pueblo la democracia es un camino. No sólo quiere democracia, sino también socialismo. Mediatizar sus demandas es más difícil que mediatizar las del imperio por una democracia aceptable.

A mediados de 1985 —poco antes de que regrese como dictador Paz Estensoro— en Bolivia hay un Estado mínimo, un Estado impotente, incapaz de dirigir la economía, de aplicar la ley, de representar a la nación, mermado en sus recursos financieros, con enfrentamientos de civiles y militares, con huelgas de servicios públicos, con desobediencia mercantil y civil, con ocultamientos y especulaciones que se tratan de contrarrestar mediante huelgas y manifestaciones mientras la economía se dolariza con el comercio de la cocaína, y mientras el presupuesto público se vacía. Inflación del último año: 8,000 por ciento. Exportación de coca: 1,600 millones de dólares, la cuarta parte del PNB, el doble de las exportaciones legales. Ingreso del gobierno: 15 por ciento de los ingresos fiscales. Al mismo tiempo artículos de lujo, artículos suntuarios y una miseria universal. Un fantasma de gobierno, un vacío de poder de los órganos del Estado, y en la sociedad civil crisis ideológica, moral, montones de palabras que no dicen nada. Se ofreció la democracia como alternativa al desarrollo. Se estableció

²⁶ C. Felipe Agüero.

una democracia libertaria en que la fuerza de la masa se expresó intermitentemente como agitación social, como manifestación, como paro, como huelga. Todos quieren democracia. A mayor profundidad de la crisis mayor demanda de "democracia", con dos líneas en el pueblo trabajador: una de cogestión, otra corporativa. La central de mineros pide que la democracia sea la base de un cambio social. En general el movimiento obrero pide cogestión laboral y empresa pública; entre sus filas, los más modestos o realistas esbozan demandas sólo corporativas. Son muchos. Los campesinos también piden actuar en la administración de la política agropecuaria a todos los niveles. Los movimientos de barriadas y las juntas vecinales se han organizado en forma nacional y actúan en todos los poderes. Los movimientos regionales también quieren participación, exigen descentralización. Los empleados públicos se organizan para tener un espacio político con proyectos de participación. La mayoría de las demandas (hay quienes calculan un 80 por ciento) procede de los sectores medios.

En agosto de 1983 se busca formalmente acuerdo de cogobierno. Fracasa. Crece entonces la desconfianza tradicional de los obreros frente al Estado y los políticos. Pero no se da una radicalización; viene una regresión. Las organizaciones populares pasan de reclamar "democracia-cogobierno" a pedir un "Plan de Emergencia". Se recluyen en una política inmediatista, corporatista, de aumento de salarios. Reaparecen las prácticas populistas. Las organizaciones hacen énfasis en una ideología economicista. En el desamparo renace la imagen del Estado-patrón-padre. Y siguen las propuestas de reforma al Estado que replantean la reconstrucción del Estado desde la nación. La democracia libertaria se devora a sí misma. El futuro de las masas es particularmente incierto, autodestructivo, difícilmente revolucionario.

El Estado transnacional maneja el problema. En el manejo, la cooperación de los militares es fundamental. El ejército boliviano ha ido del populismo de la revolución de 1952, al interamericanismo, pasando por la lucha antiguerrillera de los años setenta y por el fracaso de un proyecto militar nacional revolucionario que encabezara Juan José Torres y que se enfrentara hasta la autodestrucción mutua en la "Asamblea Popular". La integración de las fuerzas armadas y el partido MNR, como organizadores del bloque en el poder que viene de la revolución del 52, ha pasado por muchas claudicaciones y por un abuchamiento dependiente, de pobres, en que los militares-gerentes del sector público y el militarismo empresarial derivaron en el "banzerismo" como proyecto de enri-

quecimiento ilícito, de autoritarismo desmedido, de prebendas y fueros con política clientelística, y culminaron en el “garcíamezismo” que a decir de Selser “genera el primer narco gobierno de la historia mundial”,²⁷ todo ello en medio de una inestabilidad gubernamental que da dos gobernantes por año de 1978 a 1982. Los militares demostraron que no pueden gobernar. Al final resolvieron regresar a la democracia, a las elecciones, y dejar el gobierno a los civiles, primero a un político, Hernán Siles Suazo, que no logró forjar ni un proyecto populista, ni menos un proyecto popular, y después del cuadro de horror de 1985 en que nadie gobernaba, cuando se creía que otra vez darían un golpe de Estado, tal vez apoyando a uno de los candidatos —al general Banzer— apoyaron al propio Paz Estenssoro, viejísimo líder de la revolución, que en este renovado papel de presidente iniciaría el proyecto de democracia transnacional con aplicación simultánea de la política monetarista del FMI de represión al movimiento obrero y popular, de instauración de mediaciones menesterosas, de neocorporativismo necesitado y de cooptación pedigüeña, en este caso con todas las limitaciones propias de un país como Bolivia cuya gran burguesía ni siquiera está en el país. Los militares lejos de dar un golpe, apoyaron al gobierno transnacional puesto al día. El nuevo dictador sería el padre de la Revolución del 52, sería un civil y sería presidente por “elección popular”,²⁸ resultante de una transacción post-electoral de comicios en los que Banzer estuvo a punto de triunfar.

Gobierno asociado al ejército que viene de esa revolución, con él ha decretado el “estado de sitio” en septiembre de 1985, con él, “a punta de bayoneta”, en agosto de 1986, ha obligado a los mineros a regresar a sus minas y suspender “la marcha por la vida”. Otra vez, el país bajo “estado de sitio”. Las avenidas cerradas, casi un centenar de líderes confinados a la selva amazónica de Beni y Pando. Los efectivos del ejército “fuertemente armados, inclusive con tanques” haciendo que den marcha atrás miles de mineros, mujeres, niños, sacerdotes, campesinos y dirigentes políticos y sindicales, que habían venido a pedir al gobierno que no despidiera a 14,000 trabajadores.

Entre los más perseguidos están los miembros de la “Junta de Defensa de la Soberanía Nacional”, que exige la expulsión de las tropas de Estados Unidos que se han instalado en Bolivia desde el

²⁷ Ver Gregorio Selser. *Bolivia, el cuartelazo de los cocadólares*. México, Mex-Sur Editores, 1982.

²⁸ Para un análisis anterior al acuerdo de Paz Estenssoro. cf. Roberto R. Laserna.

16 de julio de 1986 con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. El nuevo dictador, el ejército y el viejo partido de Estado que hizo la Revolución de 1952 que surgió de ella, han suscrito un llamado "Pacto de Defensa de la Democracia" por la que dicen luchar contra el peligro de insurrección terrorista y totalitario.

El presidente Paz Estenssoro ha llegado a acuerdos que permiten la presencia de fuerzas militares en su país que superan en número, según parlamentarios, a las fuerzas armadas locales.²⁹ No se trata de suplantar al ejército neocolonial con uno metropolitano, sino de "ejercitar una plana mayor conjunta y combinada en la planificación y ejecución de operaciones militares de guerra no convencional (alias contrainsurgente) con énfasis en mando y control, operaciones aéreas, comunicaciones, inteligencia y operaciones ribereñas". Uno de los objetivos previstos —según documento del Comando Sur de los Estados Unidos que se refiere a estos hechos— "incluye el despliegue de fuerzas del territorio continental de Estados Unidos y de fuerzas de Estados Unidos con sede en Panamá. . ." ³⁰ Todo parece obedecer a un "vasto plan norteamericano para el control militar de América del Sur"; a largo plazo busca "estacionar en forma permanente tropas norteamericanas en el corazón del continente". Al efecto se ha diseñado un programa de mandos dirigido y coordinado por la junta de Jefes del Estado Mayor de Estados Unidos (aprobado por los mandos bolivianos en noviembre de 1985) que pone a Bolivia en trance de convertirse en la Honduras sudamericana". ³¹

²⁹ *Brecha*, 10 de abril de 1987.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Samuel Blixen. "Bolivia: maniobras militares de Estados Unidos, Absalón y el proyecto exterminador". *Brecha*, 30 de abril de 1987.

Los militares y la política: Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia

La crisis golpea fuertemente al Perú. La tasa de crecimiento es de menos 13 por ciento en 1984. El índice de inflación es de 150 por ciento, la tasa de desempleo de 65 por ciento. Crece la delincuencia con asesinatos, secuestros, robos. Durante un momento las instituciones amenazan derrumbarse. A las manifestaciones y protestas constantes de las masas se suma un movimiento de "organización de la desesperación por el terror", el de "Sendero Luminoso". El gobierno pierde legitimidad: el de Belaunde Terry llegó con 40 por ciento de los votos y se va con el 8 por ciento. En la crisis se ahonda el vacío entre partidos políticos y sociedad civil. Hay en las ciudades un amplio movimiento democrático que no logra forjar un proyecto alternativo viable de estado y sociedad. Lo que dicen los partidos de izquierda a nivel nacional parece muy incoherente, muy lejano a una estrategia practicable.

La crisis orgánica va de 1968 a nuestros días. De 1968 a 1975, el gobierno militar y nacionalista de Juan Velasco Alvarado rompió el orden oligárquico y creó muchos espacios de libertad y de articulación corporativa. Redistribuyó el ingreso y la propiedad en forma que no tenía precedente. Revalorizó lo indígena y lo popular como ningún gobierno en la historia del país. Pero entre 1975 y 1980 se cancela la lucha antioligárquica. Un movimiento neoliberal se hace del gobierno y ataca duramente a las masas. De 1980 a 1985, crece la ofensiva. Durante un tiempo los obreros parecen abatirse; disminuye su participación en los sindicatos, muestran desconfianza a los partidos políticos que hacen de ellos mera "masa de maniobra electoral". En el campo, el arquitecto y presidente Fernando Belaunde Terry opta por enfrenar militarmente a la subversión.

Los militares van a la zona declarada de emergencia, asientan su base de acción en Ayacucho y desarrollan su estrategia en tres momentos: el primero busca limpiar la zona; el segundo, enfrenar a "Sendero" con la población civil, el tercero, consolidar el control territorial alcanzado. La estrategia militar tiene todas las características de cualquier plan contrainsurgente: no sólo ataca a la población sino la enfrenta a los rebeldes, la organiza contra los rebeldes. Durante un tiempo el intento colectivista-autoritario de Sendero lo lleva a chocar cada vez más con los campesinos, y con las guardias

que entre ellos forma el ejército. "Sendero" parece debilitarse con sus dirigentes, profesores provincianos "enfermos de una utopía autoritaria", en la que representan el papel de patrones salvadores populares, entre maoístas y mariateguistas. El ejército ataca; reedita las "reducciones de indios" del virrey Toledo. Los campesinos se encierran en sí mismos; y por momentos hasta parecen apoyar al "señor más fuerte", al agresivo ejército.

Pero el tumulto de las olas masivas vuelve: en 1984 aumenta la violencia de "Sendero" y la acción política de los partidos. Simultáneamente se organizan "frentes de defensa de los intereses del pueblo", que son como núcleos de poder desde los que se negocia con el Estado. Los ciudadanos se unen en su calidad de vecinos empobrecidos planteando y proponiendo cada vez más demandas de solución a sus bajos niveles de vida, a sus precarios derechos políticos, o participación democrática y hasta socialismo. En 1984 aumenta la acción política de las organizaciones populares, apristas y de la izquierda. A corto plazo las masas moderan sus demandas, a distancia van a la izquierda. El movimiento popular vota por el APRA (populista) en las elecciones presidenciales y a la izquierda en las elecciones municipales. Sus miembros piensan que todavía no pueden gobernar Perú y que no pueden gobernar solos; pero quieren algunos municipios. La población de Lima vota en forma mayoritaria por un gobierno populista para la nación y por un gobierno de izquierda para la ciudad.

En Perú hay una izquierda importante con el 25 por ciento de los votos. Opera dentro de un conjunto ciudadano que parecía buscar por lo pronto el debilitamiento de los polos (de derecha y de izquierda) y un movimiento conducente al centro-izquierda. Se da un fenómeno de doble significación: el de moderación-radicalización y el de moderación-acumulación. Es también una lucha. Parecería como si el fantasma de "Sendero" y de su contraparte el "golpe militar" corrieran al centro a los actores. El proceso obedece también a una creciente reflexión de las organizaciones populares y de izquierda. Todas plantean la necesidad de la unidad en la diversidad, como en los comités de vecinos.

El propósito deriva hoy en que "las fuerzas políticas de centro sean las que desarrollan una mayor fuerza hegemónica con alternativas viables frente al "clasismo de los polos". Si Alan García cuando es candidato dice: "mi compromiso es con todos los peruanos" y Barrantes el candidato de la izquierda dice: "Mi compromiso es con los pobres del Perú" gana Alan García. Para rehacer su condición hegemónica una parte de la burguesía apoya también al Centro. La

radicalización del Perú se da desde la moderación mayoritaria. La izquierda política propone un cierto camino institucional. El problema radica en que esta tendencia se monta sobre una crisis económica que amenaza con una explosión. Impedirla y “desactivar la bomba económica” para fortalecer la vida democrática es el objetivo del nuevo gobierno.

La desactivación empieza por organizar el pago de la deuda en función del desarrollo económico, al revés de lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Para eso el Presidente busca la concertación con la “Izquierda Unida”. Es más logra la suspensión de acciones militares por parte de un núcleo rebelde distinto de “Sendero”. En relación a “Sendero”, el problema subsiste: después de cinco años, el ejército no puede retirar sus contingentes militares; en la Sierra se abren nuevos frentes, y en la capital se siente el asedio. El Presidente remueve los mandos militares. Su política más probable es una ofensiva militar combinada con otra económico-social, de caminos y tierras. Una política neopopulista, esto es, aliada y respetuosa de la izquierda, enfrentada con moderación al FMI, y con firmeza a los rebeldes, con el ejército como arma y la política como negociación y concesión, tal parece ser hasta hoy el proyecto de Alan García en el mejor de los casos. De sus contradicciones están atentos los militares que conservan una alta cuota de poder legalmente establecido. De acuerdo con la legislación vigente el Presidente debe consultar en varios puntos de “seguridad” al Consejo de Defensa Nacional; la política petrolera, por ejemplo, requiere el visto bueno de las fuerzas armadas, los comandantes generales tienen bajo su mando la mayoría de las direcciones administrativas de los ministerios; en todas las empresas estatales exigen su derecho a contar con un miembro del ejército en la dirección de las mismas. El 40 por ciento del presupuesto nacional es para la defensa; de acuerdo con la legislación vigente el ejército tiene derecho a legislar sobre el ejército; en la zona de emergencia, el comando militar controla a la autoridad civil y está por encima de ella.

Es más, desde 1979 la Constitución reconoce la existencia de “estados de excepción”, de “estados de emergencia” y de “estados de sitio” con diversos grados de suspensión de garantías y derechos, en condiciones de guerra externa o civil, o de *peligro* que se produzca. Constitucionalmente en esos casos el poder civil debe entregar el gobierno a los mandos militares. Desde diciembre de 1984 el Congreso (con el voto favorable del APRA) aprobó la “Ley de zonas de emergencia” en las que el comando militar asume y ejerce el gobierno regional, incluidas las labores del prefecto y de la poli-

cía. Desde 1986 la "Ley de movilización" autoriza al Consejo de Defensa Nacional (en el que los militares tienen mayoría) a asumir todos los papeles del Estado. En Perú el golpe de Estado es legal y constitucional.

Lo más probable es que los militares esperen el fracaso del proyecto neopopulista para ver si pueden imponer otra vez el neoliberal transnacional.³² Esa posibilidad parece acentuarse con la crisis. Otra vez los polos hacen acto de presencia. Si Perú no declara la suspensión de pagos, el Fondo Monetario Internacional declara la suspensión de créditos. Si Alan García no logra contener a la derecha se le escapa cada vez más hasta la izquierda aliada. Como la política social es pobre "Sendero" crece. Un dirigente de "Sendero Luminoso" se vanagloria antes de morir: "Estamos constatando la decadencia de un Estado caduco, que está siendo destruido, y vivimos ya la constitución de un nuevo Estado a través de centenares de Comités Populares con funciones estatales". Una nueva economía, una nueva política y una nueva cultura se desarrollan allí.³³ El Presidente da la orden de aplacar los motines de los senderistas presos. El resultado es una terrible matanza. A cargo de la operación estuvo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Guardia Republicana, Guardia Civil y Policía de Investigaciones formaron causa común frente a las acusaciones y las sospechas del propio Presidente. El Presidente denunció el asesinato de más de cien presos que ya se habían rendido. Y exclama refiriéndose a los culpables de la masacre: "O se van ellos o me voy yo", pero todos los cambios y sanciones no alteran en lo fundamental el poder el Ejército. Sólo que éste se queda "traumatizado y perplejo por la forma en que se le ha atribuido la culpabilidad luego de habersele autorizado la represión". ¿En qué guerra está peleando? ¿Bajo qué mando? La solución fue militar. Las preguntas también, como las respuestas.³⁴ La lucha por el poder sigue siendo política. El Presidente propone la creación del Ministerio de la Defensa Nacional que la cúpula militar ve como una amenaza a su poder. En efecto, por una serie de decretos del "Sistema de Defensa Nacional" los militares tienen tres ministerios —el de Guerra, el de Marina, el de Aviación— y dos puestos con rango de ministros, el de secretario del Consejo de Defensa y el del presidente del Comando Conjunto. La ley de marzo de 1987 fusiona los cargos en uno solo y fusiona los

³² Ballón E., Eduardo y Marcial Rubio.

³³ Salcedo, José María. "Con Sendero en Lurigancho", *Quehacer*, 41, Junio-Julio, 1986, 22.

³⁴ *Brecha*, 11 de julio, 1986; *Quehacer*, 41, Junio-Julio, 1986.

presupuestos en uno solo. El presidente Alan García logra controlar las acciones de protesta encabezadas por la fuerza aérea y abiertamente respaldadas por 157 generales. Al efecto cuenta con el apoyo de las otras dos armas y con la opinión pública, incluida la izquierda. Pero la extrema izquierda y extrema derecha hacen difícil el neopopulismo. La extrema izquierda, con motivo de la reunión de la Internacional Socialista forjó el violento movimiento de las prisiones de Lima. La extrema derecha, la civil y la militar presionaron al presidente, todo lo que pudieron con motivo de la creación del Ministerio de la Defensa. Hoy acusan al gobierno —más que nunca— de carecer de una política antisubversiva y de mostrar una despreciable blandura. Mientras tanto el ejército domina directamente una gran parte del territorio nacional; hasta ahora su poder directo crece con el de “Sendero”. Provincias enteras como Andahuaylas, Angares, Huamanga, Huanta, La Mar, Fajardo, Cangallo han sido declaradas en “estado de emergencia”. En ellas el ejército renueva una guerra colonial y ejerce un dominio militar colonialista. Como ha escrito Alberto Flores Galindo: “La guerra interna es una guerra colonial, que en el Perú, libran colonos y colonizados de un mismo país”.³⁵ Los rebeldes muestran toda la rabia y las torpezas de los colonizados que se rebelan a medias, autoritarios y brutales con sus propios partidarios o con quienes ellos consideran que deben seguirlos y no los siguen.

Ecuador pasó del auge bananero de los cincuenta, con sus presidentes apoyados sobre todo por los conservadores y Estados Unidos, a una situación crítica tras la gran matanza de Guayaquil. Entre movimientos de masas, crisis y transnacionalización, en 1963 el presidente Carlos Julio Arosamena fue derrocado por el ejército y la CIA, a causa de una política exterior más o menos solidaria con Cuba, que en el terreno interno tenía tintes populistas. La Junta de Gobierno que lo sucedió, integrada por las tres fuerzas armadas y apoyada nuevamente por la burguesía y Estados Unidos, inauguró una etapa castrense. Pero cuando en 1966 creyó que podría tomar algunas medidas de política proteccionista se vino abajo. Esta vez fue una junta de civiles quien la sustituyó reiniciando el gobierno con los partidos tradicionales. La flamante junta de notables lanzó una dura crítica al gobierno militar con un civilismo elegante y oligárquico. Después, José María Velasco Ibarra fue elegido por quinta vez. En 1970 se declaró dictador con el respaldo de las fuerzas armadas. En 1972 las fuerzas armadas dieron un golpe contra el

³⁵ Alberto Flores Galindo. “Perú. La guerra silenciosa”, *Brecha*, Montevideo, 12 de diciembre de 1986.

dictador, y nombraron como nuevo hombre fuerte al general Guillermo Rodríguez Lara.

Fue la época del auge petrolero (1972-1978). Se practicaron entonces un intervencionismo creciente del Estado, una política oficial de "endeudamiento agresivo", una serie de reformas administrativas y sociales y la revisión de las concesiones petroleras. Las reacciones no se hicieron esperar. Vino una ofensiva neoliberal, empresarial, contra "el estatismo", contra el "comunismo solapado", contra "la destrucción de la empresa privada". Y la exigencia oligárquica e imperial de volver al régimen constitucional. En 1976 el gobierno militar reformista fue reemplazado por un "Consejo Supremo de Gobierno" cuyo sagrado objetivo era entregar el poder a los civiles. En este caso los militares llegaron a un acuerdo con la oligarquía. Exigieron aparecer como los protagonistas del "Plan de retorno". Y mantuvieron el control hasta la instauración del nuevo régimen.

El que se llamó "paso a la democracia" no significó ni una ruptura con el ejército ni menos con el pasado oligárquico del país. Se llevó a cabo de 1979 a 1980. Militares y oligarcas mantuvieron la dirección de las bases sociales del sistema político; el resultado fue "la existencia de un sistema de partidos muy débil".

Con el apoyo del ejército y la oligarquía se empezó a aplicar en forma consistente la política neoliberal y fondomonetarista. A imponerla ayudó un "Estado que lleva a cuestras una tradición antidemocrática, oligárquica y corporativista en el manejo de la política que representa". Dentro de ella ni los partidos políticos ni el partido militar han logrado imponer su hegemonía, cuando acaso lo han intentado. Por una parte los militares ven con un "clásico temor" a los partidos políticos. Los ven como amenaza permanente a la estabilidad del Estado. Por otra parte la gran burguesía oligárquica y el imperio han manejado a los militares contra los políticos. Enfrentan la inestabilidad del Estado civil con la fuerza del Estado militar y la del Estado militar con la fuerza del Estado civil. Hoy, la burguesía ecuatoriana defiende su legitimidad con "la democracia". El funcionamiento de ésta explica por qué. Cuando al fin del auge petrolero y al inicio de la crisis aumentaron las demandas corporativas de obreros y trabajadores agrícolas o de capas medias, el Estado intentó una política de respuesta general. Las grandes empresas y los grupos monopólicos impusieron una política de liberalismo económico consistente y dura. Al mismo tiempo reconstituyeron al ciudadano, restituyeron los procesos electorales, y reorientaron las demandas frente a la crisis hacia *peticiones individuales* a un Estado que se ve empobrecido.

Para fortuna del Estado y de las clases gobernantes, el conjunto de la sociedad está más identificado con la democracia que con el socialismo; los obreros con las demandas corporatistas más que con la democracia, y con la democracia como ciudadanos más que como obreros; los partidos casi no tienen ciudadanos. Por un lado no se ve a una política de clase: hay diversos tipos de obreros y distintos grados de proletarización de los movimientos sociales. Por otro, en lo político no hay una fuerza de alternativa política, hegemónica. Los militares aceptan estar en la cúpula de la democracia con los civiles de la oligarquía y con las grandes empresas transnacionales. Los disidentes que surgen de sus filas son sometidos o perseguidos con el apoyo de las fuerzas oligárquico-militares. Es lo que ocurrió cuando en el mes de marzo de 1986 el general Frank Vargas Pazzos protagonizó dos levantamientos, uno en la base aérea de Mauta y otra en la de Quito, tras haber exigido la renuncia del ministro de la Defensa, del Comandante General del Ejército, y después del propio Presidente de la República. Detenido en una base militar, el general rebelde no sólo contó con una creciente simpatía en el pueblo, sino en la mayoría parlamentaria. El Congreso Nacional le concedió una amnistía que el presidente León Febres Cordero rechazó.

El 16 de enero de 1987 el presidente fue secuestrado por un comando de paracaidistas con la exigencia de que devolviera la libertad a Frank Vargas, a cambio de la suya. Liberado el presidente, y el general, la mayoría del Congreso exhortó a Febres Cordero a declinar el ejercicio de su cargo; pero éste con el apoyo de la oligarquía, el imperialismo y el ejército reasumió plenamente el poder mientras Vargas pasaba a la clandestinidad. Desde ésta, el general rebelde continuó acusando de corrupción y malversación de fondos a los jefes de las fuerzas armadas y siguió representando un movimiento de militares que se quieren acercar a los políticos en vista de los comicios que tendrán lugar en enero de 1988. Con ellos denuncian a la minoría dominante, su política monetarista, antipopular y desnacionalizadora, su corrupción incontenible, la violencia y el terror crecientes, y en general una "política entreguista" en que el propio Congreso Nacional ha denunciado la presencia cada vez mayor de militares norteamericanos que por cientos hacen ejercicios de "guerra de baja intensidad" en las selvas del Ecuador. En su servilismo a Washington el gobierno de Febres Cordero ha hecho que el Ecuador sea el único país de América Latina que ha roto con Nicaragua.

Vargas representa a los militares que buscan asociarse con las

fuerzas políticas para un “proyecto nacionalista, democrático y popular” que sólo dispongan del 10 por ciento de las exportaciones para el pago de la deuda externa, que “crée canales democráticos para que el pueblo se organice y movilice”, que respete a la cultura y la supervivencia de los indígenas ecuatorianos (40 por ciento de la población), y que establezca una política internacional de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Ante el proyecto político-militar progresista, el imperialismo, la oligarquía, los políticos y militares conservadores y entreguistas han cerrado filas.³⁶

La democracia de Venezuela es modelo dentro del sistema interamericano. Desde la caída del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (1958) hay un Estado con un sistema político bipartidista, que se fortalece con un “pacto tácito” en el que están los propios militares, las clases medias o parte importante de las mismas, los obreros organizados, y hasta grupos de marginados de tipo clientelista. El Estado-productor y el petróleo respaldan la hábil política hegemónica, sus sistemas de mediación corporativa y los de cooptación. Las clases dominantes “tienen clara conciencia de que las formas democrático-representativas no les son desfavorables”.³⁷ Los militares participan de la misma opinión. Sus intentos golpistas los llevaron en 1959 y 1960 a soñar con el regreso a las formas militares del Estado. Después, en 1961, algunos jóvenes oficiales hicieron un último intento. En todos esos casos los frustrados golpistas no sólo fueron rápida y duramente reprimidos: su culpable fracaso sirvió para “limpiar” a las fuerzas armadas, y para “involucrar a la oficialidad” en el “pacto tácito”, maniobra de gran éxito a corto y mediano plazo. La modernización del equipo militar, los privilegios y estímulos materiales, el derecho que los militares tienen a actuar en la política interna en forma cívica, la incorporación de altos oficiales a la administración pública, la formación a la vez castrense y universitaria de muchos altos mandos, hacen que las fuerzas armadas respalden el proyecto de democracia central como su proyecto. Los dos grandes partidos políticos, AD y COPEI, socialdemócrata y demócrata cristiano respectivamente, están dentro del pacto. El bipartidismo dominante no afecta a los militares y los militares no afectan al bipartidismo.

Mezcla de un “compromiso nacional-popular y neoliberal”, el estado de Venezuela lleva el bipartidismo a sus últimas consecuencias. El ejército también. Estado y ejército son bipartidistas, y con

³⁶ Brecha, 21 de enero de 1987 y 27 de febrero de 1987.

³⁷ Sonntag, Heinz.

el capital monopólico y las mediaciones populares enfrentan la crisis dentro de una política cada vez más liberal. La experiencia reciente y el panorama general de Venezuela no permiten avizorar cambios por más que la crisis se agudice. Ideas y proyectos políticos de las fuerzas armadas y de los partidos tienden a seguir haciendo en Venezuela lo que se ha hecho en Venezuela, sobre todo después de las experiencias del Cono Sur, y cuando el gobierno de Estados Unidos apoya precisamente la democracia que allí existe.³⁸

En Colombia la larga lucha contra la violencia y contra la droga le da al ejército un carácter predominantemente policíaco. Desde “la época de la violencia” (1948 y ss.) el ejército depende en gran medida de la ayuda norteamericana que “lo independizó” relativamente del Estado. Esa situación perdura hasta los sesentas en que las doctrinas de la “seguridad continental” tienden a ser sustituidas por las de la seguridad nacional, mientras “los militares colombianos inician un proceso de distanciamiento relativo y de autonomización” con respecto al aparato defensivo estadounidense. Al mismo tiempo, las inclinaciones populistas que una parte de ellos tuvo durante el régimen de Rojas Pinilla, en general han sido superadas. En Colombia ha existido desde hace varias décadas (1958) una sólida división de funciones estatales entre los dirigentes militares y los civiles, entre el ejército y los partidos. El Estado —como coalición hegemónica— tiene sus partidos liberal-conservador y su ejército. El ejército defiende hoy al Estado y a sus partidos de las guerrillas, que no han podido ser militarmente eliminadas durante muchos años de lucha, y que incluso se han extendido y cobrado fuerza. Defiende y apoya al gobierno en un doble proceso, de respeto relativo al intento de solución política y negociación con las guerrillas, y de afirmación de su fuerza militar, una afirmación que hasta ahora ha podido ser controlada por el gobierno civil, incluso en momentos tensos de intentos golpistas. La masacre de la Suprema Corte de Justicia, decidida por el presidente Belisario Betancur en noviembre de 1985 con el argumento de contraatacar al M-19 que se había apoderado del edificio, renovó al gobierno constitucional y alejó los peligros de un inminente golpe de Estado. Tras la masacre, y con ella, Betancur y los militares recompusieron el Estado, cambiando sólo algunas de sus partes.

Hoy, en Colombia los militares no sólo han abandonado las tesis populistas, sino las desarrollistas y no sólo sostienen la ideología

³⁸ Sonntag, Heinz.

de la seguridad nacional sino la del neoliberalismo político y económico. Pero como el peligro guerrillero crece, y los resultados de la política conciliadora en general han fracasado se asiste a una progresiva militarización del sistema de poder local. Desde 1970 las fuerzas armadas tienden a convertirse en “aparato organizador de la disciplina social y de los aspectos políticos de la vida nacional”. El Estado tiende a organizarse en torno a la “defensa”, tal es la fuerza creciente de las guerrillas y de las zonas controladas por ellas. Sólo que de acuerdo con la tradición del Estado colombiano los militares “parecen encaminarse hacia la creación de una dirigencia civil-militar integrada” en que dominen los criterios y las decisiones de los militares. Mientras tanto civiles y militares refuerzan el “pacto de poder” que les permite compartir la responsabilidad y los beneficios.³⁹

³⁹ Bustamante, Fernando.

Los militares y la política: Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala

Panamá es uno de los países donde más fuerza ha alcanzado un movimiento populista encabezado por el ejército. El golpe militar de 1968 se dio con la crisis de las mediaciones políticas liberales y nacionalistas. La Guardia Nacional, encabezada por el general Omar Torrijos inició un proyecto de reformas de las instituciones que no sólo suponía el compromiso de un regreso a las elecciones para 1983, sino construir nuevos sistemas de participación de los obreros y los campesinos, con la aplicación de políticas corporativas, clientelistas y de cooptación social e individual. “En poco más de un año la Guardia Nacional pasó de ser una institución carente de manejo político a tener una concepción propia acerca del Estado y de su relación con la sociedad panameña”. El incremento de la sindicalización y de los derechos obreros se complementó con la organización de Ligas Campesinas y con la implantación de una reforma agraria; ambas políticas incrementaron considerablemente las bases populares del Estado.

La articulación de fuerzas fue mucho más allá sin embargo. En realidad se creó una amplia “alianza interclasista” que llegó a incluir, desde una parte significativa de la burguesía hasta la “Asamblea Nacional de Representantes” en la que el campo tenía un gran peso. La alianza se consolidó cuando el gobierno levantó las banderas nacionalistas que llevaron a los tratados del Canal de Panamá por los que el pueblo pudo alcanzar algunos triunfos simbólicos. En ese momento, Omar Torrijos anunció la creación del Partido Revolucionario Democrático (PRD) “cuya tarea sería la de reemplazar a la Guardia Nacional como interlocutor entre el bloque dominante y el resto de la sociedad panameña”.⁴⁰ El ideal de reunir a todos los panameños “bajo la bandera de un solo partido” parecía esconder la consolidación de las nuevas instancias mediadoras de participación y alineación popular. Sin embargo, a fines de los setenta y desde el inicio de los ochenta; con la crisis, se fue dando un desplazamiento a la derecha, que se acentuó a la muerte del general Torrijos en un dudoso “accidente” aéreo, ocurrido seis meses después de que Reagan ocupara la presidencia de Estados Unidos. La crítica antipopulista fue encabezada por la derecha y logró cre-

⁴⁰ Gandásegui, Marco A.

ciente influencia en las capas medias. La burguesía alentó al mismo tiempo una vuelta al sistema de partidos y a los partidos mismos. Al principio los militares intentaron mantener el proyecto populista, pero fracasaron. El líder de la renovación del proyecto vio cómo se enfrentaba a todos los intereses que antes integraban la alianza, burgueses o populares. También vio por sus propios ojos que no encontraba ningún apoyo en Washington. Entonces la Guardia Nacional cambió de proyecto: decidió proponer como candidato a la presidencia de Panamá al vicepresidente del Banco Mundial, Nicolás Ardito Barletta, el más idóneo para una política neoliberal y para que Washington lo apoyara. Así pudo mantener el control del proceso e intentó implantar la política interamericana de mediaciones neocorporativistas y de cooptación de líderes, con la de “democracia limitada”, la neoliberal y la monetarista que están al orden del día.⁴¹ El fracaso en la implantación de esa política llevó al ejército a un nuevo golpe de Estado con argumentos nacionalistas y populistas, que atenuaron poco las contradicciones sociales; pero que renovaron el ataque de las fuerzas intervencionistas de los Estados Unidos. Se trataba de un populismo militar distinto al de la década del setenta, un populismo con política del Fondo Monetario Internacional que quiso ser antimperialista sin ser popular. En septiembre de 1986 el Senado norteamericano autorizó a la CIA a investigar a los militares panameños para ver si están involucrados en el tráfico de drogas y de armas así como en presuntas violaciones a los derechos humanos. De esa manera empezó a planear una “desestabilización inducida” que estallaría a mediados de 1987. El general Roberto Díaz Herrera, que tres semanas antes era Jefe del Estado Mayor del Ejército, apoyado por la iglesia y por un paro empresarial, que con el nombre de “Cruzada Civilista” encabezó la Cámara de Comercio e Industria, así como por el Partido Demócrata Cristiano y otras organizaciones políticas, inició un ataque contra el gobierno acusando al Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa, general Manuel Antonio Noriega, de tener responsabilidad en el asesinato de Torrijos, de haber falseado las últimas elecciones, de corrupción y de participación en el tráfico de drogas.

La denuncia se combinó con el descontento popular que las medidas de una política monetarista provocan. Se complementó con ataques de la administración Reagan y del propio Congreso de Estados Unidos, que en un acuerdo abiertamente intervencionista pidió a los militares panameños que dejen de actuar en política.

En los barrios populares vino una especie de asonada sin con-

⁴¹ Gandásogui, Marco A. y Martínez H., Milton.

ducción, aunque con injerencia directa de los agentes de la CIA encargados de las "covert operations". El pueblo mostró estar profundamente descontento por la política monetarista que los gobiernos recientes, apoyados por esos mismos militares, han aplicado de acuerdo con las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, Washington mostró estar descontento con el gobierno y los militares que quieren oponerse a su política en Nicaragua, y que pretenden hacer efectivos los acuerdos sobre la recuperación del Canal. Con sus presiones y desestabilizaciones el Departamento de Estado busca demostrar que el gobierno de Panamá por sí solo no puede gobernar a Panamá, y menos ser garante de la seguridad del codiciado Canal. A más corto plazo busca aumentar el cerco contra Nicaragua.

Sin coherencia entre la política económica y la política exterior, con bases sociales cada vez más débiles, el gobierno nacionalista y monetarista se bambolea y Washington alienta su caída.

Poco antes el gobierno panameño había decidido cambiar la Guardia Nacional con las llamadas Fuerzas de Defensa; el propósito es hacer que en éstas exista una mayor participación popular. En su política nacionalista, el gobierno se ha visto reducido a sus fuerzas militares, sin que sus intentos tardíos de acercamiento y fortalecimiento con el pueblo le permitan articular sus demandas. El pueblo sin ejército, el ejército sin pueblo parecen destinados a enfrentarse más que a encontrarse. No es fácil prever el desenlace.

Costa Rica presenta características peculiares en la relación de los militares con la política. En ese pequeño país centroamericano "la institución de la ciudadanía se vuelve la mejor inversión de seguridad que hace una clase dominante cuando, de previo, ha podido alcanzar un cierto plan hegemónico en la evolución económica de una sociedad y está dispuesta a preservarlo, sin la aplicación indiscriminada o desmedida de la fuerza armada, mediante la dominación indirecta".

El por qué en Costa Rica la clase dominante alcanzó ese "plan hegemónico" es un fenómeno que nos lleva más allá del siglo XX e incluso a la época colonial. En Costa Rica la injerencia de los militares empezó a ser controlada desde fines del siglo pasado. La historia del siglo XX es la del control de las fuerzas armadas por el poder civil. Pero es mucho más que eso. En los orígenes del singular proceso se encuentra la estructuración del poder rural. Cuando Costa Rica era una pobre colonia del imperio español los propietarios campesinos alcanzaron un peso natural. Supieron aprovecharlo para defenderse primero de los latifundios, y después de las empre-

sas agrícolas capitalistas, hasta obligarlos a negociar y a llegar a acuerdos económicos y políticos. El hecho incrementó la creación de un mercado interno cuyas repercusiones en la economía, la educación y la política llegaron a pesar en las propias relaciones de trabajadores-propietarios y en las de ciudadanos-gobernantes.

La oligarquía nunca pudo “acorralar a las clases subordinadas” ni someterlas al modelo neocolonial predominante en otros países del área. A la masa de los pequeños propietarios agrícolas se sumó la de carreteros, empleados y peones. El conjunto de fuerzas que éstos representaron mostró siempre una cierta disposición a negociar en términos que no eran ni de mera cooptación y traición individual, ni de demandas radicales o globales de alcance parejo para toda la población. Así se desarrolló una cierta política corporatista-negociadora que en el siglo XX continuó y se extendió hasta convertirse en parte de la cultura política dominante, de la que llegó a participar el Partido Comunista tras la huelga bananera de 1934, cuando logró derechos y prestaciones especiales para el “obrerismo agrario” de las plantaciones, y sólo para él, en ese momento. Lo significativo consistió en que los no beneficiados no quedaron nunca totalmente “marginados”, y que si durante un tiempo los triunfos se limitaron a los trabajadores de las bananeras, en otros beneficiaron a trabajadores cañeros y algodóneros. Es cierto que el Estado y las organizaciones patronales dieron luchas constantes contra las demandas y la sindicalización obrera, pero la vinculación de las luchas obreras con las de las capas medias, las de los medianos propietarios y las de *los partidos políticos*, y su decisión simultánea de *luchar y negociar*, obligaron al Estado a transformarse y a pesar no sólo de ser un Estado patrimonial para convertirse en otro liberal sino a dar el paso a un “Estado benefactor”. A la suma de combinaciones anteriores se añadió otra no menos importante: las burguesías terratenientes, comerciales y financieras lograron articularse y unirse hasta que se convirtieron en una clase hegemónica. Esta multiplicó sus instrumentos de mediación con las bases, desde las estructuras naturales de mediación de los pequeños propietarios hasta las modernas de partidos y sindicatos. Al mismo tiempo impuso y negoció su propio poder dentro de una situación internacional de dependencia “en un proceso que fortaleció al capitalismo criollo y afianzó sus nexos con el capital extranjero”.

El sueño liberal de una poderosa clase media, en Costa Rica fue más bien el punto de partida natural de un proceso hegemónico que llevó finalmente a la creación de un “Estado benefactor” dependiente, más que a lo habitual de un “Estado gendarme” dependen-

te. Como ha mostrado José Luis Vega Carballo, primero la inversión en educación, en detrimento de la inversión militar y policial, y después las reformas de los años cuarenta, que favorecieron a las clases trabajadoras, consolidaron la hegemonía de una burguesía con cierto juego frente al imperio del que depende. "El perfil interventor del Estado no transgrede necesariamente, los principios centrales de la economía capitalista dependiente ni de la dominación social; contribuye a redistribuir ingresos, a mejorar la calidad de la mano de obra, a combatir el desempleo de los técnicos e intelectuales, así como a evitar la radicalización política y a dinamizar la demanda de bienes y servicios por la vía del aumento de los gastos en los renglones del denominado consumo social".⁴² El Estado da además un enorme empuje a la inversión pública "llevándola en dos décadas (de los cincuenta y los sesenta) a competir y hasta a integrarse en 'joint ventures' con la inversión privada, según un esquema de interpenetración de la sociedad y el Estado". Las condiciones anteriores no sólo explican que no se necesita a los militares para gobernar. Aclaran cómo en realidad los militares sólo gobiernan en aquéllos tiempos y países en que los partidos, los sindicatos, la participación y la cooptación, y en suma las mediaciones no logran funcionar para que marche la hegemonía de las clases dominantes y su modelo de acumulación. El neoliberalismo actual presiona hoy sobre toda esta estructura. La lucha contra Nicaragua (con la hospitalidad simpática o mañosa a la "contra" y respeto a sus santuarios, que vergonzosamente proliferan en la frontera), adquirió un nuevo carácter tras la agresividad servil a que se vio obligado el gobierno para resolver sus problemas financieros.

En Costa Rica hay una campaña notable por sus falsas argumentaciones contra Nicaragua. Ha puesto al país al borde de una guerra que puede cambiar profundamente la estructura militar del Estado.

Monetarismo e intervención dan a los militares un papel creciente, cuyas implicaciones políticas son impredecibles. La Guardia Civil y la Guardia Rural, o sus jefes, por momentos parecen estar dominados por los partidarios de la "contra". Las fuerzas militares han doblado de 1982 a 1986 y han establecido fuerzas paramilitares. El ejército muestra una mayor presencia en el espacio político. Como se renueva cada cuatro años, la sociedad se militariza a su vez con los que pasan a retiro. En cuanto a cuadros, es el país que tuvo más egresados en la Escuela de Fort Gulick. De todos modos

⁴² *Op cit.* 53.

Costa Rica sigue resistiendo las políticas más agresivas del imperio.

En Honduras —después del reformismo militar de López Arellano y de la grotesca “normalidad democrática liberal”— desde 1981, todo el Estado se prepara para la guerra más que para la política. Aunque no descuida la política, elecciones como las de 1981 y 1985 son parte de la guerra. Desde 1981 “las fuerzas armadas han estado sometidas a un acelerado proceso de entrenamiento que incluye la participación en maniobras complejas, así como la coordinación con los 15,000 “contras” y con los 2,000 asesores norteamericanos que se calcula operan en Honduras”.⁴³ De Estado oligárquico criollo, a Estado con zonas de poder bananeras, en que el máximo acto político son los golpes militares, y la función de las fuerzas armadas, una función eminentemente política de defensa del orden, Honduras ha pasado en estos cinco años a convertirse en un Estado-base de la intervención imperialista norteamericana contra Centroamérica. La fuerte penetración imperialista entre los militares, que empezó desde los años cuarenta por poner en manos norteamericanas la dirección de la Escuela de Oficiales y la de Cabos y Sargentos, y que dio a los norteamericanos hasta el mando de batallones del ejército hondureño, en los años ochenta ha hecho de ese ejército un valioso auxiliar de la agresión armada contra Nicaragua por los norteamericanos y los “contras”, en una situación en que la hegemonía del imperio predomina sobre la de la oligarquía local.

El ejército se somete a Estados Unidos, y somete al país a una disciplina de guerra intervencionista. Aún así no basta. La política militar norteamericana vigila hasta a los propios soldados hondureños y realiza las labores de policía que buscan proteger a sus asesores y conciudadanos.⁴⁴ El escaso papel que jugaron siempre los partidos y organizaciones civiles ha sido reducido y controlado todavía más. Desde 1981 funcionan seis partidos que no causan mayores molestias. Honduras es un caso extremo en que la política de los militares es ejercer predominantemente el papel represivo de un Estado neocolonial movilizado para una guerra de posiciones y movimientos.

Si en 1954 se preparó desde Honduras la invasión de Guatemala, hoy se prepara la de Nicaragua. Sólo que esta vez la Honduras intervencionista está cada vez más intervenida. A la tradicional existencia de territorios que escapan al control del Estado en la Costa

⁴³ Aguilera, Gabriel.

⁴⁴ Vid. Lericia Salomón.

Atlántica, se añade hoy la existencia de más de 450 kms² controlados por los “contras”, que han hecho de Choluteca y El Paraíso un auténtico estado dentro del Estado. Mientras tanto el gobierno de Honduras declara parte del territorio nacional lo que no controla, y considera un “tabú” y hasta un “crimen de lesa patria” *hablar de los dominios* de los “contras”.

Por su parte, en los territorios bajo su control, los contras gobiernan a su antojo. Hasta hacen objeto de emboscadas a los soldados hondureños. Allí ellos y su policía mandan. Ellos organizan sus juegos y prostíbulos, sus ventas de armas, sus castigos, y las sanciones contra la población que se ha quedado y se rebela. Muchos son los antiguos habitantes de la región que han abandonado sus hogares.⁴⁵

Tolerada, soportada y hasta apoyada por el propio ejército hondureño, la “contra” es parte de las fuerzas especiales del Ejército norteamericano. Con otras, más abiertamente norteamericanas y convencionales, ha dado lugar a la intervención pacífica más importante en América Latina desde que Estados Unidos se apoderó de Puerto Rico.

La “contra” no es una fuerza paralela del ejército hondureño, como puede serlo la G-2 del G c.b. Guatemalteco, o como lo fueron los “tonton macoutes” del haitiano. Es parte del ejército norteamericano y de una sección del ejército interamericano en reconstrucción, el que se ocuparía de Nicaragua en caso de triunfar, hecho que parece improbable y casi imposible, a pesar del incremento de la ayuda yanqui.

En realidad la “contra” es hoy un conjunto de “bandas somocistas” y de mercenarios recientemente reclutados, que han perdido las “bases sociales” que lograron en 1982-1984. La contra no ha podido mantenerse en un solo poblado; no ha podido desarrollar una ofensiva en gran escala; ha sufrido miles de bajas (5,600 en 1985); resulta cada vez menos atractiva como negocio para los mercenarios; se ha “desmembrado” desde que los “desalzados” se acogieron a la ley de Amnistía de diciembre de 1985; se ha desarticulado por conflictos internos de reparto del botín, y por diferencias ideológicas más o menos primarias.

Estos y otros fenómenos expresan las limitaciones estructurales de la sección del ejército que los Estados Unidos intentan reconstruir. Son tan obvias como que no se trata de “luchadores por la libertad”. Mientras tanto los tres ejércitos, el hondureño, el norte-

⁴⁵ Brecha, 7 de julio de 1986.

americano y la “contra” se disputan el territorio con un equilibrio precario, en el que tiende a aumentar el resentimiento de los militares y los políticos hondureños.

En El Salvador el ejército ha pasado a la defensiva. En 1984 el ejército combatió en cinco o seis departamentos; en 1986 combate en 12 de los 14 en que se divide el país. Ha perdido el control efectivo de un tercio del territorio. La asistencia norteamericana ha salvado al ejército de la derrota. Los asesores y la estrategia militar norteamericana han ido permeando toda la estructura cívica, política y militar del país. Para evitar el triunfo de las fuerzas democráticas y revolucionarias de El Salvador (FDR-FMLN), Estados Unidos transformó por completo el tradicional ejército de la oligarquía. El actual ejército pasó de 15,000 efectivos en 1981, año en que estalló abiertamente la guerra civil, a 50,000 en 1985. A la par del guatemalteco, el ejército salvadoreño es la maquinaria contrainsurgente más sofisticada de América Latina.⁴⁶ Estados Unidos la subsidia con 600 millones de dólares anuales. Hay un oficial yanqui por cada cuatro salvadoreños. La densidad de helicópteros por km² es superior a la que tuviera Vietnam. Las fuerzas paralelas conocidas como los “escuadrones de la muerte” han realizado en cinco años 6,000 asesinatos y desapariciones.

El gobierno de Estados Unidos y los acreedores de El Salvador exigen el control minucioso del gobierno y del país. Actualmente ni el Estado ni el ejército salvadoreño tienen autonomía en relación a la política norteamericana. La reactivación de la arena política se ha hecho “por motivos internos de la política norteamericana”. Las elecciones y la instauración de un gobierno demócrata-cristiano se han urdido en función de los debates del Congreso de los Estados Unidos —para asignaciones presupuestarias— y en función de la guerra ideológica de Ronald Reagan que busca ganar a los “taxpayers” en apoyo a la guerra que libra contra Centroamérica, en especial contra Nicaragua. El Salvador es ejemplo de una dependencia ostensible, y de una integración plena al Estado transnacional en sus componentes imperiales y locales. Las derrotas del ejército son cada vez más costosas en armas y hombres. Incluyen la pérdida de la ofensiva y de los cuarteles.

Algo distinto y semejante ocurre en Guatemala. Uno de los proyectos transnacionales más avanzados es el de Guatemala. Allí los militares no sólo toman el Estado: intentan tomar la sociedad. Orga-

⁴⁶ Raúl Benítez Manaut. *La Teoría Militar y la Guerra Civil en El Salvador*, Tesis, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1986, y *Brecha*, 9 de mayo de 1986.

nizan el espacio rural con “aldeas modelos” al estilo de Vietnam. Enrolan a la séptima parte de la población en “patrullas civiles”. La universidad militar cumple las funciones que antes se asignaban a la universidad nacional. La televisión está culturalmente militarizada. El ejército cuenta con una editorial que militariza las lecturas. Las fuerzas armadas practican el “militarismo empresarial”. Una vez dijo el presidente Carlos Arana Osorio: “El ejército no debe reducirse al papel de guardián de los intereses de los ricos; debe convertirse en su socio”. El alto mando del ejército —en ocasiones tras consultas a todo el cuerpo de oficiales—, “toma decisiones respecto a las fuerzas políticas que pueden participar en la institucionalidad del país, respecto a los resultados de los procesos electorales e incluso respecto a problemas internos de los partidos y de la lucha de candidatos”. Desde los años ochenta, el ejército “permite una mayor autonomía a la arena política en la medida en que sus actores no cuestionan la hegemonía militar”.⁴⁷ El alto mando y la junta de comandantes “comprenden que su función contrainsurgente es más de fondo y esencial que el ejercicio del poder formal del gobierno”. Es más, saben que lo importante es hacer que el régimen formal sea también contrainsurgente. A la fecha han establecido “un régimen político contrainsurgente. . . Se trata de un régimen basado en el ejército y en la permanente lucha antiguerrillera, exigencia que reclama de aquél un papel hegemónico al interior del Estado y en relación a la clase dominante tradicional; que reclama la subordinación de los intereses parciales de la burguesía al interés central de defender su sistema frente a la amenaza revolucionaria; que exige la implantación de un sistema de seguridad de envergadura nacional y plazo indefinido al cual se sujetan los mecanismos políticos”.

Uno es el ejército tradicional y otra la “fuerza antiguerrillera moderna”. Esta —vinculada a Estados Unidos— no pudo impedir que la represión sea consustancial al Estado contrainsurgente, ni puede cambiar el régimen económico sino para hacer de toda la burguesía una clase contrainsurgente, ni puede cambiar o determinar el régimen político sino como parte de la guerra interna, como una forma de guerra irregular.⁴⁸

El ejército suele mostrar falsos indicios de soberanía o de libertad frente al imperio: como cuando agrede a México, o cuando no compra armas en Estados Unidos. Pero sus ataques a México se inscriben en los programas norteamericanos de presión contra la polí-

⁴⁷ Aguilera, Gabriel. *Op. cit.*

⁴⁸ Cf. Mario Payeras.

tica internacional de México, y cuando Guatemala compra armas en mercados distintos del norteamericano va a los de Israel, Taiwan o Corea del Sur que son parte del aparato militar mundial de los Estados Unidos. Hoy de acuerdo con la moda impuesta por el gobierno de Washington el ejército habla del “retiro formal de los militares del gobierno para dar paso a un régimen civil”. De hecho no ha cambiado un ápice su política y estructura universal contra-insurgente. En la práctica, la desmilitarización que se propone sólo se da en términos del retiro de militares de algunos cargos públicos, mientras mantiene el carácter estratégico del control de la economía y de la población, y mientras apoya al nuevo poder civil elegido “democráticamente”, que le garantiza un nuevo préstamo en dólares. En Guatemala se ha cometido el más atroz genocidio de población indígena y campesina de que tenga memoria América Latina en los tiempos modernos. Se sigue cometiendo.

Los militares y la política: México

En México los civiles de la clase política tienen una cultura militar, los militares una cultura cívica. El control del conjunto del sistema por el Presidente de la República se ejerce a través de las más distintas modalidades institucionales, que se advierten desde el carácter de “secretario” del presidente que tiene el ministro de la defensa, pasando por la dualidad de fuerzas militares que dependen del presidente (con semejante capacidad de fuego) hasta la remoción constante y siempre posible e instantánea de los jefes de zonas militares, o el nombramiento o promoción de sus sustitutos con la aprobación indispensable del Presidente.

Cultura y control se combinan en una disciplina férrea en que el ejército es no deliberante y apoya en público cualquier declaración o política presidencial mientras cultiva entre sus miembros y en la opinión nacional los símbolos de lealtad a “la República, a sus instituciones y a su Jefe Supremo”. Dentro del Gobierno, el presupuesto asignado al ejército es proporcionalmente uno de los más bajos de América Latina. Los militares gozan, sin embargo, de prestaciones y servicios de carácter corporativo. Ese carácter no se destaca en la sociedad: el uso del uniforme en la vida cívica es mucho menos acostumbrado que en otros países incluso más desarrollados. La argamasa de las fuerzas armadas de México es una ideología nacionalista que no ha podido ser destruida por el sistema interamericano y sus instituciones. Incluso en la “seguridad nacional” el ejército tiene una ideología nacionalista basada en el supuesto de que la única estrategia que le permitiría enfrentarse a un enemigo externo sería la de la “guerra popular” en que las fuerzas armadas deberán desempeñar “funciones de organización y armamento de las fuerzas populares”. Frente a las medidas de desestabilización, claramente fomentadas por el gobierno de Estados Unidos y exacerbadas notoriamente desde que Reagan subió al poder en enero de 1981, el ejército ha seguido la estrategia fijada por el presidente tanto en los conflictos con Guatemala como en la política de Contadora.

Los norteamericanos han estudiado la posibilidad de un golpe de Estado militar en México. Consideran que éste sólo se daría cuando se combinen las divisiones en el grupo gobernante con acciones de

masas simultáneas en varios estados de la República y en la capital. Según Ronfeldt la simultaneidad de conflictos elites-masas y capital-provincia sería la base de un golpe. "Sin duda significaría que el liderazgo del PRI-Gobierno está perdiendo el control y que el sistema político se halla próximo al colapso, vulnerable a una revolución y a un golpe de Estado".⁴⁹ Como el golpe sería por sí solo incapaz de vencer dentro de esa simultaneidad, para lograr el triunfo los golpistas tendrían que depender del apoyo militar de Estados Unidos.

Mientras tanto, los militares apoyan al gobierno y al PRI. Con el gobierno en turno, el PRI y las organizaciones obreras oficiales, constituyen los aparatos más poderosos de un Estado que descansa en una coalición de origen popular en la que hay un peso creciente de la burguesía y una influencia cada vez mayor del Fondo Monetario Internacional y las transnacionales. El crecimiento de estas últimas debilita cada vez más al bloque de poder y afecta a la estructuración actual de los aparatos del Estado, sin que sea concebible con este ejército otro sistema político o un Estado sin partido propio, con varios "partidos de Estado", salvo ruptura institucional de gran alcance. Desde la perspectiva militar, o desde la civil de la élite oficial, toda democratización se ve como apertura o distensión dentro de un Estado con Partido del Estado. La democratización sin PRI, o con un Estado bipartidista, con alternancia de gobiernos y sin presidencialismo corporativo obrero-militar es inconcebible para la clase política del gobierno, de la que los militares son parte esencial, política y no sólo militar.

Con el PRI todos juegan o pueden jugar a equilibrar y controlar el crecimiento de otras mediaciones de la derecha distintas del propio PRI, y de otras mediaciones de la izquierda que actúen en formas autónomas al PRI o a sus pequeños partidos socialistas aliados. Los militares siguen esta línea política como si fuera una orden militar. Para que los militares cambien su cultura-disciplina, la burguesía tendría que cambiar de Estado y sustituir al actual mediante serias y sucesivas sacudidas. Es el proyecto de una parte de la gran burguesía asociada a las transnacionales, y de la administración Reagan. Es *uno* de los proyectos. El otro es que el actual Estado y el actual sistema político se transformen e impongan un régimen con menos concesiones corporativas a los obreros, con más cooptaciones a los líderes políticos que a sus huestes, incluidos más puestos parlamentarios, con más o menos el mismo margen de opinión

⁴⁹ Ronfeldt, David, 1984.

que desahoga a los intelectuales e ideólogos sin que se les haga mucho caso, con un creciente peso de las transnacionales a costa de las empresas del Estado y de la "rectoría del Estado", y con un apoyo mayor de la televisión y la iglesia al nacionalismo de un Estado que en los hechos sea crecientemente transnacional, y no necesariamente bipartidista, parlamentarista, o militarista. Es el camino más probable y en el que el ejército de un lado, y las organizaciones oficiales de masas de otro parecen coincidir bajo el mando "económico de la tecnocracia", que hoy obedece los dogmas neoliberales y de acuerdo con ellos forja la reestructuración del Estado mexicano conocido y de su sistema político.⁵⁰ Mientras tanto las presiones de la extrema derecha norteamericana contra el ejército mexicano continúan al orden del día. Con el pretexto de que sus altos mandos participan del negocio de la droga, la prensa y eminentes voceros del gobierno lanzan campañas en su contra que buscan desprestigiarlo, dividirlo y alinearlos a la política intervencionista enemiga de "Contadora".

⁵⁰ Cf. José Luis Piñero, y Pablo González Casanova.

Los militares y la política: República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Granada

En la República Dominicana el ejército que sucedió al dictador Rafael Leónidas Trujillo había sido formado por él en más de treinta años. Asesinado Trujillo en 1961 a instancias de Washington, los mandos militares convocan a elecciones en 1962. Pero derrocan al nuevo presidente, Juan Bosch, a los pocos meses de su elección. En abril de 1965 algunos militares se pronuncian en favor del retorno a la constitucionalidad y de la restitución del poder al presidente derrocado. Su línea se impone. La población los apoya en masa: clama por el regreso de Juan Bosch. Viene el enfrentamiento. A los partidarios de la constitucionalidad y de Bosch los encabeza el coronel Francisco Caamaño. Sus fuerzas luchan contra las del general Wessin y Wessin. Caamaño distribuye armas entre el pueblo y vence. El presidente Bosch va a regresar con el apoyo del pueblo y de las armas. Entonces Estados Unidos envía 34,921 hombres de la infantería de marina, de la marina, del ejército y de la fuerza aérea. En las filas constitucionalistas se organiza la resistencia con más de 1,700 comandos en los que luchan juntos militares y pueblo. Tras fuertes combates los constitucionalistas son derrotados. Por primera vez Estados Unidos recurre al TIAR* para formar el amparo de la OEA, una Fuerza Interamericana de Paz (FIP) con soldados hondureños, salvadoreños, costarricenses y brasileños. Las fuerzas de relevo le permiten a Estados Unidos retirar sus propias fuerzas invasoras.

Al triunfo de la intervención imperialista se instaura en la República Dominicana un régimen “neotrujillista” con cierto juego de los partidos políticos, y con demandas “democráticas” en sindicatos, pueblos, universidades. El país va evolucionando hacia un neoliberalismo dependiente. Las riendas del poder hegemónico quedan en manos del imperio, que juega a formalizar el neocolonialismo con una relativa autonomía de las fuerzas locales, apoyándose y apoyando a la burguesía dominicana y a los partidos y dirigentes políticos o sindicales que colaboran en la creación de mediaciones. El sistema, sin embargo, sigue descansando en forma más o menos inmediata en los militares. Y con ellos ejerce una política de cre-

* Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

ciente dependencia. Tras la derrota del movimiento popular-militar encabezado por Caamaño, el ejército dominicano sufre una transformación profunda y sistemática. De sus filas son expulsados los militares constitucionalistas; unos pasan a retiro, otros se van al extranjero, otros son cooptados con cargos diplomáticos y otros son asesinados. Al mismo tiempo los "oficiales que destacaron por su servilismo a las tropas norteamericanas en 1965-1966 pasan a ocupar los más importantes puestos de mando".⁵¹ Durante doce años fueron el apoyo más importante del presidente Balaguer, y al término del segundo mandato de éste incluso pretendieron dar un golpe de Estado para que continuara al frente de la Presidencia. Sólo una orden exacta de Washington los disuadió de su objetivo.

Durante los doce años de Balaguer, Estados Unidos aumentó considerablemente el control político e ideológico del ejército, en particular con el entrenamiento en las escuelas norteamericanas de un alto número de oficiales. Según Pablo A. Mariñez logró que el "ejército, colonizado, perdiera su propia identidad y se considerara sujeto a las decisiones de un poder extranjero".⁵²

En esa etapa se organizaron comisiones especiales para depurar a las fuerzas armadas en forma periódica dando de "baja deshonrosa" a quienes consideraban ligados a la "doctrina marxista" o tenían posiciones antiimperialistas.

Por otra parte, se diseñó una triple política de aburguesamiento de los militares, de participación en el gobierno de los militares y de creación de bases sociales para los militares.

Corrupción y acumulación sirvieron para forjar una nueva generación de empresarios militares en la agricultura, la industria, el comercio y las finanzas. La oficialidad ocupó importantes puestos públicos que antes eran asignados a los civiles. "Los cuarteles se convirtieron en una prolongación del partido del gobierno" y con la "acción cívica" se dedicaron a hacer donativos de alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, todo para disponer de apoyos en la sociedad civil.

Con los elementos anteriores y armados de la filosofía de la "seguridad nacional" quedaron listos para defender la política del Fondo Monetario Internacional. Su actuación llegó a ser violenta. En la gran movilización popular de 1984 contra la política de "ajuste" del Fondo Monetario Internacional y contra la entrega gradual de la soberanía, el ejército actuó al lado de la policía para provocar

⁵¹ Pablo A. Mariñez "Las fuerzas armadas en la República Dominicana", Mimeo, 1987.

⁵² *Op. cit.*

una brutal masacre. Con posterioridad se auxilió de un grupo paramilitar llamado "Movimiento Anticomunista Internacional".

Parece que en las fuerzas armadas se dieron algunas contradicciones. Una corriente significativa declaró que "no podía garantizar el orden público si se firmaba el convenio con el Fondo Monetario Internacional". Según esta versión la demanda tuvo peso; obligó al gobierno a suspender y aplazar las decisiones. . . Al mismo tiempo, la Secretaría de la Defensa acusó a la izquierda de preparar los desórdenes sociales y preparó un "Plan Nacional de contrainsurgencia" que intentó aplicar en enero de 1985 ante los paros parciales y el paro nacional que organizaron las fuerzas populares como protesta de la firma de un nuevo acuerdo con el FMI.

En general, el ejército dominicano ha tomado una posición abierta, política e ideológica. De hecho, los jefes militares han presionado en su mayoría por la firma de los convenios con el Fondo Monetario Internacional, mientras se preparan para una injerencia creciente en los asuntos civiles, todavía dentro de un esquema de apoyo mutuo cívico-militar entre quienes obedecen por igual a la política económica del imperio. Apenas si se advierte un incipiente movimiento de mayores para abajo que inicia una lucha contra la corrupción.

En Haití la relación ejército-política ha estado condicionada por una larga dictadura en que no hacían política arriba de unos "cincuenta mil individuos", una fracción insignificante de la población, mientras la dictadura hereditaria de los Duvalier tenía reducido al ejército a sus funciones de policía. El dictador sustentó su poder a través del terror y por medio de los "tonton macoutes", fuerzas especiales para la represión. El fracaso histórico de la política como actividad nacional, el recurso sistemático a la fuerza durante generaciones enteras, combinados con un alto nivel de analfabetismo, terror y mitos antiguos y modernos, hacen que las masas sean "groseramente" manejadas por la minoría.

En el Haití de la dictadura existió una "Constitución" con un papel formal difícil de concebir. El ejército calificó como delito todo acto que se relacionara con el ejercicio normal de la Constitución. Como con el opositor no se negocia se le elimina. Cualquier conflicto derivaba en el sometimiento total o en la oposición extrema. El apoliticismo es una experiencia, una cultura y un refugio. La ruptura de la hegemonía es un acto heroico, así se limite a que hable el pueblo sin los que dicen ser sus "portavoces", o contra ellos. Dentro de ese contexto el poder se concentró en el Presidente de la República que usó al ejército como arma universal de repre-

sión interna, al tiempo que ni el propio presidente, ni el ejército, ni la policía tenían la menor autoridad en los dominios que presentan un cierto interés para la política imperial norteamericana. "La manipulación de los órganos políticos nacionales por los agentes del Departamento de Estado y de la CIA se complementa con el control exclusivo que ejerce el Pentágono sobre las fuerzas armadas haitianas por el intermedio del *United States Southern Command* y el *Marine Corps*. . ."⁵³

Para las representaciones o simulaciones democráticas el Estado de la dictadura movilizaba todos sus aparatos, y se enfrentaba a agrupamientos políticos limitados y temporales. En la vida cotidiana operaban pequeños grupos con sus jefes y clientelas, en constantes luchas internas. La oposición tendía, dentro de esa estructura, a ser débil en su propio seno. Es más, cuando había movimientos democráticos incipientes el Departamento de Estado norteamericano aumentaba los subsidios para ayudar a limar asperezas, y cuando llegaba a haber algún leve intento de golpe militar las autoridades norteamericanas se oponían al proyecto. Así ocurrió poco antes de la muerte de Duvalier. Por recomendación del Embajador Knox, se autorizó al dictador moribundo a dejar a su hijo como heredero de la presidencia mientras se desautorizaba a quienes con un golpe de Estado querían nombrarse a sí mismos herederos. El gobierno norteamericano hizo lo que en Nicaragua desde 1956: creó una dictadura hereditaria.⁵⁴

El fin de esa dictadura en febrero de 1986 es una victoria arrebatada al pueblo. Constituye una mediación notable de las fuerzas populares por el imperio y el ejército. Uno y otro se anticipan a males mayores estableciendo un "duvalierismo sin Duvalier". La Casa Blanca anuncia en forma "premonitoria" la caída del dictador. Más tarde hace alarde de haber negociado una "solución pacífica" para su salida, eso sí, con una movilización vigilante de la flota norteamericana. La Junta Cívico-militar que sustituye al dictador queda bajo el control mayoritario de los militares (cuatro sobre seis) y todo el proceso bajo la hegemonía de Washington. Los haitianos ven con alegría algunas manifestaciones de la libertad (por mediada que esté). Las ven también con preocupación, como los militares. Ambos saben que la ola democratizadora no ha terminado.

En todo caso hay un hecho innegable: No sólo cayó el dictador. Cayeron los "tonton macoutes", una fuerza especial que en el caso de Haití llegó a ser superior en *status* al propio ejército de línea. Y

⁵³ Kern, Delince, p. 43.

⁵⁴ Vid. Kern, Delince y Pierre-Charles, Gérard.

no sólo en *status*: en número y armamento. Los “tonton macoutes” tenían 40,000 hombres, mejor armados que los 7,500 del ejército. Su destrucción fue un hecho popular. El pueblo apedreó, quemó, descuartizó a los antiguos “escuadrones de la muerte”, a los “voluntarios de la seguridad nacional”. Otro hecho importante: al caer el dictador y el ejército paralelo las fuerzas populares y democráticas aprovechan el margen de libertad y de institucionalidad para seguir presionando, aunque en formas políticas precarias, impredecibles en sus resultados tras la larga dictadura, y la nueva situación del movimiento popular.

Este pasa a la fiesta esperada que precede y justifica la masacre. Cuando el pueblo pierde el miedo que reproduce el sistema, se esperan sus desbordes, los que no llevan ni a una nueva política de negociación social ni a un nuevo bloque de poder que imponga cambios en las estructuras e incluso en el sistema.

Se esperan los desbordes del pueblo como siempre: con inconsciencia o fatalidad del propio pueblo y sus organizaciones, y con estrategia racista del imperio y sus aliados de la burguesía y el ejército haitianos (negros o “metissés”). Las presiones del pueblo son “para entusiasmar”; pero no serán nada nuevo sin una política de representación, de negociación y de poder del pueblo trabajador.

Washington ha enviado una nueva misión para entrenar al ejército. Los “tonton macoutes” han empezado a reaparecer y a actuar.

Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, colonia asociada, y como tal sus estructuras políticas y militares son las que Estados Unidos ha determinado. En Puerto Rico hay dos ejércitos: el norteamericano, con funciones militares delimitadas en la estrategia global y para la defensa del Caribe; y la Guardia Nacional, responsable de la seguridad interna.

El *status* formal de Puerto Rico, como miembro de la Unión Norteamericana, y el real, como colonia estadounidense, le dan en el terreno militar el doble carácter de ser sede de una de las bases más poderosas de Estados Unidos en El Caribe, y fuente de reclutamiento de soldados “latinos”, que a diferencia de los cipayos son utilizados directamente en las filas del ejército norteamericano e incluso en sus mandos.

Por un lado el imperio emplea a los altos oficiales puertorriqueños para influir en la política de Puerto Rico. En 1982 el oficial encargado de las fuerzas navales del Caribe era puertorriqueño. “Su presencia facilitó las negociaciones sobre la base militar de Vieques con el gobierno del Estado, mejoró las relaciones públicas de la

armada norteamericana y contribuyó a asegurar el apoyo de los partidos políticos para la escalada armamentista". Por otro lado hay una integración constante de puertorriqueños al ejército norteamericano (así como a la población y a los servicios de inteligencia) para formar un poderoso núcleo que actúe en la región.

De hecho, el carácter colonial de la isla, sus desigualdades, y la pobreza de una proporción considerable de sus habitantes se equilibran con las grandes migraciones de puertorriqueños a los Estados Unidos, con las políticas de "welfare" colonialista, y con la política de inversiones militares que es presentada y vista a modo de un paliativo a la crisis económica.⁵⁵

Según ha observado Rodríguez Beruff, Puerto Rico, El Caribe Occidental, la República Dominicana, Haití y Belice han recibido "niveles altamente significativos de asistencia en seguridad". Como es natural, "la expansión de los recursos represivos a los Estados del Caribe ha acentuado la tendencia a las medidas autoritarias de control político, ha restringido el espacio de los derechos democráticos y ha consolidado en el poder un liderazgo conservador que gobierna a casi todos los países de la región. . ." Ejemplos: la brutal represión de las protestas de la República Dominicana y de Haití contra la inflación; la más reciente de Jamaica; las presiones contra la prensa en Barbados; la aprobación de la legislación de la "seguridad nacional" en Dominicana; la total exclusión de la oposición del parlamento de Jamaica, Antigua y Anguilla, usando el mecanismo de las elecciones rápidas ("snap elections") y las restricciones en el registro de candidatos.⁵⁶

Pero el caso extremo de la militarización de la vida, y de la colonización de la política en el Caribe, el más reciente, es el de Granada. Tras la sangrienta ocupación de la isla en octubre de 1983, los Estados Unidos empezaron a organizar a la vez un nuevo sistema de elecciones y legitimación y un nuevo ejército. La farsa electoral adquirió un carácter sustantivo, y la "representación" un carácter neocolonial. El elegido por Washington, un tal Blaize, registró el 90 por ciento de los votos y de los 15 puestos del parlamento obtuvo 14; el otro candidato fue Garvey, viejo aliado del imperio. Lo primero que hizo Blaize, el elegido, fue pedirle a Reagan y a los gobernantes de los países caribeños que habían mandado tropas de ocupación, el que mantuvieran sus efectivos en Granada. En su carta a Reagan le decía: "Le quedaré extremadamente agradecido si está usted de acuerdo en mantener su personal de seguridad en Gra-

⁵⁵ Cf. Jorge Rodríguez Beruff, p. 79.

⁵⁶ Cf. Jorge Rodríguez Beruff.

nada tanto tiempo como sea necesario para que podamos tener una fuerza granadiense totalmente equipada y entrenada". Como hubiera dificultad para encontrar jóvenes que formaran un ejército granadino se ideó uno de carácter regional que reclute sus soldados en todas las islas y que realice sus funciones en todas las islas.⁵⁷

⁵⁷ Cf. Mariñez, Pablo A.

Los militares y la política: Cuba y Nicaragua

Dos países más —Cuba en El Caribe, y Nicaragua en Centroamérica— presentan un panorama muy distinto desde el punto de vista de las bases del poder de sus ejércitos. No sólo han roto el lazo con el Estado transnacional sino se han enfrentado al mismo y a todos sus recursos. En el caso de Cuba, un núcleo de poder popular ha logrado consolidar la independencia del sistema transnacional a un grado de invulnerabilidad prácticamente absoluta, y en el de Nicaragua presenta ya algunas características de un Estado invencible e irrecuperable para el sistema interamericano dominado por Washington.

En Cuba la relación fuerzas armadas-política es tan distinta a la del resto de América Latina como la relación Estado-sociedad civil, en tanto la sociedad civil se articula al Estado, y la política a las fuerzas armadas. El fenómeno no sólo ocurre desde un punto de vista cuantitativo, con las numerosas articulaciones de la sociedad y el Estado y de los ciudadanos con las milicias, sino desde un punto de vista ideológico en que la dirección política domina a la militar en la ideología y en la estructuración del gobierno, del partido y del Estado.

A partir del supuesto clásico de que “la moral de un ejército” tiene que ver con la mayor o menor incorporación de las fuerzas armadas y de que “el pueblo armado” es “el medio fundamental de la defensa” se construye un ejército profesional del más alto nivel al tiempo que se incorpora a la población civil a las estructuras militares. Actualmente 1 800,000 cubanos pueden luchar armados. La totalidad de la población de 17 a 45 años está integrada a la defensa: el resto puede cooperar, y está organizado para cooperar en la defensa. Desde 1980, con las Milicias de Tropas Territoriales, incluso la población que antes sólo cumplía tareas auxiliares y de apoyo se incorporó a la defensa. Al mismo tiempo se reformuló la teoría y la organización de la “guerra de todo el pueblo” para el caso de invasión o ataque de Estados Unidos, cuyo gobierno se ha vuelto más agresivo que nunca a la llegada de Reagan.

Como la militarización no se da en base a una separación de intereses entre la sociedad y el Estado ni del Estado sobre la sociedad (de otra manera sería inconcebible la sobrevivencia de la isla

frente al asedio incesante del imperio), la política es una extensión de la sociedad, y el ejército una extensión de la política. El Estado surge de la sociedad y la dirige a través del partido. Los militares son tanto los ciudadanos armados del pueblo como los trabajadores armados de la producción y los servicios. En la defensa, el sistema es invulnerable.⁵⁸

La situación de Nicaragua es otra, no obstante que el núcleo de poder sea el pueblo. La lucha se encuentra en una etapa de consolidación y tiene características propias. En Nicaragua el ejército sandinista está controlado por la dirección revolucionaria que encabezó al pueblo en armas. Con un proyecto de economía mixta, pluralismo político e ideológico y no alineamiento internacional, la decisión *soberana* de pueblo y gobierno es que si esos objetivos se vuelven incompatibles con la supervivencia de la revolución optarán por la revolución. Los nicaragüenses están decididos en su lucha a negociar todo “menos la hegemonía popular del proceso”. El poder popular no ha quedado sujeto a elecciones. No se puede, por una elección política, votar en contra del poder popular y por la vuelta al neocolonialismo, la dependencia y la tiranía. Sergio Ramírez ha escrito: “La revolución no ganó el poder en las elecciones. Lo ganó enfrentada a la muerte. . . El esquema de nuestra revolución es popular. Todo podría cambiar en Nicaragua menos la hegemonía popular del proceso”.⁵⁹

En el terreno de las clases, en Nicaragua, se da también una democracia distinta: la burguesía no tiene el poder y el pueblo lo tiene. Pero en el terreno político la burguesía puede elegir a representantes y dispone de periódicos para expresar sus opiniones.

Además, se ha desarrollado la democracia nueva, participativa, rousseauiana: “Los trabajadores participan en la conducción de las empresas; las localidades están gestionadas por las bases; las organizaciones populares participan en la formulación de las principales medidas gubernamentales a través de los consejos políticos; por ejemplo, la reforma agraria, de producción industrial, prácticamente en todos los organismos de los cuales se pueden desprender decisiones importantes”.⁶⁰ Por otra parte, se ha desarrollado mucho el sindicalismo pasando los agremiados de 27,000 a fines de la dictadura a más de 207,000.

En medio de la guerra cada vez más agresiva de los “contras” y los Estados Unidos, el gobierno ha organizado un ejército de amplia

⁵⁸ Benítez M., Raúl, *et. al.*

⁵⁹ Entrevista con Sergio Ramírez, cit. por Benítez M., Raúl.

⁶⁰ Wheelock, Jaime, cit. por Benítez M., Raúl.

participación popular, en defensa de la revolución y la soberanía, y ha creado un amplio espacio de lucha electoral, que en las elecciones a la presidencia del 4 de noviembre de 1984 dio un triunfo cabal al Frente Sandinista.

El Ejército Sandinista tiene la complejidad de una organización-pueblo que domina su territorio y está armado para defenderlo. Los batallones de lucha irregular, el sistema nacional de defensa territorial, las nuevas unidades especiales contra invasores, las misiones de "destino especial", las nuevas unidades de tropas guardafronteras, las milicias territoriales formadas por civiles voluntarios, el ejército regular, la Fuerza Aérea Sandinista, los servicios de inteligencia, los milicianos y los "niños milicianos", todas las organizaciones de la gran organización popular-nacional-estatal arrinconan y expulsan a la "contra". Sin divisiones internas pueblo-gobierno ni en el interior del gobierno, el ejército de Nicaragua es invencible. Es uno de los más poderosos que han existido contra cualquier imperio.⁶¹

La guerra de todo el pueblo corresponde en Nicaragua al Estado de todo el pueblo en lucha, en que se atenúan o desaparecen las diferencias entre militares y civiles, entre Estado y sociedad civil, y en que la lucha contra lo que no es la fuerza organizada del Estado-pueblo se libra en el terreno político, ideológico, diplomático y militar como la de un conjunto combinado cuyo eje es el pueblo trabajador contra los remanentes de la burguesía y el imperio, que hacen una política de guerra total destinada a la reconstitución del neocolonialismo. Para que el imperio ganara esta guerra necesitaría que se dividiera la dirección revolucionaria entre sí y del pueblo, en procesos autodestructivos como los de la pequeña Granada; es lo que busca el imperio con todas sus armas y con el auxilio de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Costa Rica. El que lo logre, o el que Nicaragua logre consolidar su revolución, depende de que ésta siga la experiencia de sus propios triunfos y de los de América Latina.

⁶¹ Vid. *Brecha*, 7 de marzo de 1986.

Los militares y la construcción de un estado democrático

El problema de la construcción del Estado democrático en América Latina no puede ignorar la necesidad vital de que éste sea en primer término un Estado antigolpe. Pero como la construcción no sólo se realiza tras el triunfo de movimientos populares armados—como en Cuba o Nicaragua— sino con grandes movimientos democráticos de masas desarmadas, como en Argentina, Uruguay y Brasil, el problema de la formación de un Estado antigolpe se plantea de una manera muy distinta en uno y otro caso. En Cuba supuso un cambio tan profundo en el sistema social, que el carácter antigolpe del nuevo Estado casi parece una consecuencia natural de la revolución social. Aunque a un nivel distinto, algo semejante ocurre en Nicaragua. En ambos países la estructuración del Estado antigolpe implica una vinculación estrecha del jefe del Estado al gobierno, del gobierno al Estado y del Estado a la sociedad civil, proceso exactamente contrario a la estructuración del Estado que favorece el golpe en donde el presidente se separa del gobierno, el gobierno del Estado, el Estado de la sociedad civil, mientras las coaliciones y representaciones populares, por significativas que sean, entran en graves contradicciones de clase.

En países como Argentina, Uruguay o Brasil, el problema de la construcción de un Estado democrático constituye uno de los grandes enigmas del futuro inmediato. El problema puede plantearse de la siguiente manera: Si los golpes de Estado en América Latina son cíclicos y no muestran una tendencia a disminuir, es de prever su repetición, por lo menos como un hecho probable o posible. Si los cuerpos del ejército interamericano están ideológica, psicológica y militarmente preparados para el golpe de Estado y la guerra interna, y se encuentran más o menos intactos, sin cambios ideológicos, psicológicos o militares significativos es de esperar que vean en la “transición democrática”, como la de Brasil o Argentina, una mera “retirada estratégica”, en que busquen la oportunidad de tomar nuevamente el poder del gobierno y la de declarar una nueva fase de la “guerra interna”—por necesidad más universalmente represiva, e incluso de exterminio de núcleos amplísimos de la población— todo de acuerdo con la teoría de la “seguridad nacional”, en la que creen como “ciencia” y destino, según la cual no sólo se trata de una guerra prolongada sino “permanente”.

En parecidos niveles de generalización, hay otras experiencias que también ayudan a plantear el problema. El Estado-pueblo de Nicaragua y el frente-pueblo de El Salvador son Estados-pueblo o frentes-pueblo armados, mientras el Estado de excepción que deja de serlo —como hoy el Uruguay— mantiene por un lado a las fuerzas armadas autoritarias y por otro al pueblo y los políticos democráticos desarmados. Ni existe esa unidad que se da en Cuba ni existe ese frente que se da como Estado-pueblo en Nicaragua, y como embrión del Estado-pueblo (como frente-pueblo) en El Salvador.

Es más no existe la estructura de ese otro Estado-pueblo que surgió en la Revolución Mexicana de 1910-1938, y que no obstante las contradicciones a que quedó sujeto con el desarrollo del capitalismo monopólico y transnacional mantiene aún hoy muchas de las vinculaciones presidente-gobierno-Estado-pueblo-nación-ciudadanos en que las contradicciones de clase no se dan sin las mediaciones de la coalición popular-estatal, y aunque ésta es cada vez más vulnerable por la crisis, parece aún resistente y activa, y en el orden militar se complementa con instituciones antigolpe de la mayor efectividad, bajo el control del jefe del Ejecutivo y de los colaboradores militares que él designa, en los que hay, además, una resistencia psicológica, ideológica, teórica a los conceptos más reaccionarios de la “teoría de la seguridad nacional” del Pentágono y sus adláteres.

En países como Brasil o Argentina ni siquiera existe ese tipo de Estado. En ellos todo hombre lúcido advierte el peligro de que termine la tregua democrática y de que un ejército unido se enfrente a un gobierno y un pueblo divididos y desarmados; muy pocos exploran la alternativa de que las presiones políticas de las masas —naturales e inducidas— logren imponer la división estructural e institucional de los mandos del ejército, la renovación democrática del mismo, y distintas medidas de apoyo a una democracia armada, esto es, en la que el pueblo y sus organismos auxiliares, sean capaces de defenderse frente al clásico golpe militar tecnificado, o frente a la “guerra interna” profesional.

Para toda América Latina y El Caribe, desde Argentina hasta México, la primera carta de las fuerzas democráticas en la construcción del Estado consiste en construir un Estado antigolpe, y las bases sociales, populares, ciudadanas, militares y administrativas de ese Estado. El problema consiste en hacerlo frente a un Estado transnacional que intenta controlar la crisis económica y hegemónica aumentando la concentración y articulación de mercados y capitales y la de su propio poder ideológico, político y militar, y que

para ello usa oficialmente todos los medios del terrorismo de Estado, de la desestabilización y la intervención.

Las luchas por la democracia con soberanía y poder en América Latina sólo se volverán viables y resistentes, ya sea tras procesos revolucionarios nacionales como el de Cuba y Nicaragua, o bien cuando las luchas democráticas y populares ocurran al mismo tiempo en varias partes del sistema transnacional y de cada subconjunto del mismo. Si el estado transnacional es incapaz de someter hoy a Cuba, y tiene serios problemas para aniquilar al Estado popular y democrático de Nicaragua hallará una incapacidad militar y política colosal en la medida en que se vea obligado a reaccionar en varios lugares al mismo tiempo. El sistema transnacional no tiene capacidad para actuar a la vez en varios frentes nacionales y en distintos puntos de cada uno de ellos.

En esa lucha —varia y simultánea— eventualmente se desprenderán hombres y facciones de los propios ejércitos interamericanos para unirse a las fuerzas del pueblo trabajador, y con éste y sus organizaciones forjarán un nuevo Estado cuyo primer objetivo no sólo será la instauración de estructuras antigolpe, sino el diseño de una estrategia de seguridad nacional e internacional latinoamericana en que las fuerzas populares y democráticas se conviertan en la vanguardia estratégica y táctica de un nuevo desarrollo económico y social de la nación y el Estado latinoamericanos. El que lo militares participen en ese proceso al lado del pueblo y de las formaciones democráticas corresponderá a una larga tradición de las propias fuerzas armadas de cuyo seno periódicamente se han desprendido importantes contingentes de la corriente servil al imperio y las oligarquías para sumarse a las luchas populares, nacionales y democráticas, como ocurrió en 1965 con el coronel Caamaño en la Dominicana o en 1973 con el general Prats en Chile.

El proceso de democratización con poder en los países donde las mediaciones sociales y políticas han cobrado una fuerza histórica, tendrá características concretamente distintas a las revoluciones y movimientos en que la relación ejército-partidos políticos, o la relación ejército-sindicatos es una relación inexistente por la ausencia real de estos últimos. En cada país de América Latina el peso de las mediaciones políticas y sociales, y la crisis de las mismas va a determinar la evolución de las fuerzas populares hacia una lucha concreta por la democracia con poder. Ese peso varía de un país a otro como la estructura misma del Estado pero al final siempre revela tras la lucha contra el tirano (militar o civil), la lucha contra el imperio y contra el gran capital transnacional y sus asociados nativos.

La relación ejército-partidos es una relación de Estado. La relación ejército-sistema político es una relación de Estado. Si esa relación no ha cambiado porque el Estado sigue siendo el mismo, uno debe preguntarse en la nueva situación, ¿cómo controlan los partidos al ejército o cómo cuentan con su lealtad al pacto constitucional, o cómo cuentan con su compromiso ideológico y emocional con el proceso?

Cuando hay un cambio en el sistema político, y el nuevo sistema político se mueve en el mismo Estado, el problema está en saber cómo han cambiado o van a cambiar los términos de las relaciones partidos-sindicatos, partidos-ejército, sindicatos-ejército, ejército-autoridades civiles, y eso en tres terrenos, el de los pactos, el de la participación y el de la organización de la política y la fuerza, esta última considerada como fuerza de masas y fuerza militar, con sus contingentes y controles. Es más, en última instancia el problema se plantea en relación a la capacidad que el Estado tiene de realizar una práctica política soberana —nacional e internacional— frente al Estado transnacional, sus asociados y sus aparatos. En la determinación del proceso, por lo que se refiere a los militares pesarán en cada nación la mayor o menor autonomía del ejército respecto de la sociedad política y respecto del pueblo-nación. No sólo pesará el control político del ejército sino su articulación o dependencia respecto de la coalición en el poder del Estado, y la de uno y otro respecto de la burguesía dominante, y respecto del imperio.

Al entrar en crisis tanto los golpes militares como el Estado transnacional, éste se ve obligado a registrar una amplia gama de estrategias que van desde el terrorismo de Estado hasta la apertura democrática limitada. Paradójicamente, a la política de los militares en materia de democracia, neocorporativismo, cooptación y terrorismo no corresponde una idea suficientemente clara de que la lucha supone siempre una relación de Estado, militares-partidos, militares-sindicatos, militares-movimientos, y una relación del Estado-nación o su símil con el Estado transnacional, y —a la vez— con la coalición o bloque dominante y con la facción de clase hegemónica y su peso o debilidad dentro del sistema transnacional.

A tan extraño fenómeno de desatención teórico-práctica increíble, cuyas bases se encuentran en un proceso de ruptura parcial, en que a la confrontación de fuerzas sucede la negociación, en que a la crisis de gobierno sucede la estructuración de otro nuevo gobierno, uno militar, otro civil corresponde una especie de pacto constitucional o preconstitucional que tiende a reconstruir la historia eterna de pactos anteriores, sin que hasta ahora parezca haberse aprove-

chado suficientemente el momento de crisis máxima del poder autoritario-militar, y de fuerza máxima de las organizaciones populares y democráticas, para imponer un pacto democrático que exija e institucionalice las "milicias ciudadanas" necesarias para defenderlo en caso de ser nuevamente traicionado.

En los procesos actuales y futuros de la democracia antigolpe, soberana y con poder del pueblo, parecen surgir en forma incipiente nuevas nociones acerca del pacto y la participación que aprovechen experiencias anteriores y tengan la fuerza de imponerlas, con una nueva realidad política, estatal y social. Pero en medio de las grandes líneas de desarrollo del Estado transnacional, y de los retos que plantea para la creación de un Estado antigolpe con bases democráticas y populares, estos problemas sólo se podrán resolver desde una perspectiva de lo nacional y lo transnacional como nacional concreto con sus mediaciones represivas, neocorporativas, de "democracias limitadas" y de "cooptación de élites".

En todo caso si los militares son fundamentales en la formación del Estado y de los sistemas políticos, es evidente que como mediadores del imperio o de los pueblos "al lado de los políticos, de los líderes sindicales, agrarios, de pobladores, de minorías étnicas" son parte de un proceso que no se puede enfrentar con nuevas coaliciones políticas, que se requiere enfrentar con coaliciones de poder surgidas de procesos revolucionarios y democráticos que se planteen a la vez el problema del sistema político y del Estado, y el de éste como coalición hegemónica y como clase hegemónica. Ese objetivo implica una lucha por el poder que de inmediato enfrenta el problema de la fuerza, e incluso el de la guerra, previsible siempre que a las metas democráticas se añaden objetivos sociales.

Los militares y la guerra

En abril de 1986 se fundó en Buenos Aires la Organización de los Militares por la Democracia, la Integración y la Liberación de América Latina y el Caribe (OMIDELAC). Sus integrantes proclaman la democracia como “el camino para asegurar la libertad, la justicia y el progreso social”. Exigen “obediencia a la voluntad democrática de nuestros pueblos”, y que las fuerzas armadas “se mantengan dentro de su profesionalismo sin involucrarse en tareas represivas que las alejen o las enfrenten a ellos”.

Como “latinoamericanos” que han optado “por la profesión militar” reafirman que lo hicieron “inspirados en los ideales de nuestros próceres de la Primera Independencia” —afirmación que supone la lucha actual por una Segunda Independencia.

Plantean “la necesidad de continuar la obra inconclusa de la liberación de toda forma de dependencia externa y de dominación interna. . .” Denuncian al sistema interamericano como “marco de dominación” que no sólo ha deformado el significado de los términos patria, soberanía, desarrollo y seguridad, sino que ha desvirtuado la auténtica misión de las fuerzas armadas latinoamericanas. . .”

Bajo el marco “interamericano”, las “oligarquías nativas” y los “mandos asociados” “han transformado a las fuerzas armadas de gran parte de nuestra América en elementos retardatarios de la definitiva independencia, en brazos armados de los sectores dominantes y en algunos casos en verdaderos ejércitos de ocupación de sus propios países. . .”

Los militares democráticos de OMIDELAC apoyan en lo internacional a “Contadora”; declaran que es imposible pagar la deuda externa y al mismo tiempo aspirar a “la independencia, el desarrollo con paz y justicia social de los países latinoamericanos y del Caribe”, y piden que se denuncie el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) que Estados Unidos no ha acatado —como se probó en las Malvinas en 1982—, y que “no tiene vigencia moral ni práctica para los países americanos”.

Así no sólo plantean una nueva política en materia de seguridad nacional y regional, sino una nueva “doctrina de seguridad y defensa integral en oposición a la vigente llamada de “seguridad nacio-

nal". La nueva, la alternativa se forjaría "de acuerdo con los intereses de nuestros pueblos", lo cual implica en la *práctica* que los "ejércitos no sean brazos armados de los sectores dominantes", sino ejércitos *de la mayoría*.

Entre los integrantes de OMIDELAC se encuentran distinguidos militares peruanos, uruguayos, chilenos, venezolanos. Su esfuerzo corresponde a un nuevo planteamiento de la democracia, la política y la guerra que se inserta en las mejores tradiciones de los militares latinoamericanos desde Ignacio Allende, Bolívar y San Martín hasta Torrijos, Caamaño, Torres, Schneider y Prats para sólo citar a unos cuantos.

En agosto de 1986, en el Centro de Estudios Estratégicos del Uruguay se organizó un coloquio en el que participaron altos oficiales, y en el que se reafirmaron "los tradicionales conceptos de defensa nacional" frente a la teoría de la "seguridad nacional" que privó en la dictadura. El coloquio hizo ver cómo la tarea militar y la tarea nacional se identificaron hasta la Segunda Guerra Mundial, y cómo hasta los años sesenta se identificaron la tarea militar y la tarea civil. Al introducirse, desde la Segunda Guerra Mundial, el concepto de "defensa continental" se colocó en un segundo plano la "defensa de fronteras nacionales", y al introducirse en los sesenta la doctrina de la "seguridad nacional" se consolidó el concepto de "guerra interna", o guerra contra la población civil que está dentro de las fronteras de cada país.

En el coloquio se habló de una forma "patológica" de ver la guerra *contra* el pueblo, *contra* la nación y *contra* la democracia como si fuera guerra *por* el bien del pueblo, *por* la nación y *por* la democracia. Se criticó duramente la moral militar que se aleja de la moral nacional, popular y democrática, y se confirmó un hecho demostrado por los psicólogos: la pérdida de conciencia de la realidad de *lo que se es y se hace*, en que no se sabe quién se es, con quién se lucha y contra quién se lucha.

"La educación militar —observaron los participantes— no debe transformar a los especialistas en un estamento aislado y ajeno a los sentimientos y a las convicciones del pueblo, a las aspiraciones de *justicia social* de la sociedad civil".

El coronel Petrides sostuvo que "la defensa nacional es un problema que interesa a todos, es paga (pagada) por todos, compromete a todos y debe ser realizada por todos". El mismo coronel Petrides adelantó algunas ideas para formular una nueva doctrina de defensa *apoyada* en el pueblo. Sugirió la reducción de los efectivos militares a no más de 5,000 hombres en un país como Uru-

guay que hoy tiene tres millones de habitantes. Al mismo tiempo pidió que los efectivos militares se integren a la ciudadanía como “maestros de armas”. Su ideal es el de un pueblo de ciudadanos entrenados por expertos militares, que vean en el pueblo al soberano, al aliado, y en el “nazifascismo” al *enemigo interno*.⁶²

Las observaciones y conclusiones del coloquio replantearon problemas de una extraordinaria importancia para desentrañar el papel de los militares en la lucha por la democracia, por la independencia y por la justicia social, ya sea que esa lucha derive en una indeseable guerra, ya para evitar que esa guerra se dé pero sin que los pueblos vean traicionados sus ideales. El coloquio planteó así el problema de los militares y la guerra, y el de los militares y la política para hacer innecesaria la guerra —siempre que se pueda siempre que sin ella los pueblos logren defender sus derechos.

Encuentros como éstos son de particular importancia por el carácter que la guerra tiene en el momento actual y por el papel que juega la democracia en esta guerra.

* * *

A diferencia del nazifascismo encabezado por Alemania, la guerra de hoy encabezada por Washington a nivel mundial, lejos de desprestigiar y atacar a la democracia pretende dar todas las batallas en su nombre, y hasta llega a establecer las mediaciones necesarias y útiles para fortalecer su retórica al tiempo que en realidad ataca todos los triunfos de los trabajadores y de los pueblos, desde los socialistas pasando por los de la liberación frente a las viejas y nuevas formas del colonialismo, hasta los populistas y socialdemócratas.

En el ataque y la construcción de un nuevo poder hegemónico la política de Washington no sólo toma en cuenta las experiencias anteriores, incluidos los fracasos, sino la distinta fuerza de enemigos y aliados, y las posibilidades concretas de destruir o debilitar a unos, y de alinear o disciplinar a otros.

En un renacimiento notable del pensamiento liberal —del más conservador e intervencionista—, Estados Unidos ha pasado a la ofensiva en una política llamada de *rollback*, que no sólo busca revertir el proceso de influencia de la Unión Soviética en todos los “teatros de competencia”, sino el de los movimientos obreros y los movimientos socialdemócratas, populistas, anticolonialistas

⁶² Brecha, Montevideo, 1o. de agosto, 1986.

y populares, a los que acusa de ser meros instrumentos de la lucha Este-Oeste que juegan en favor de Moscú.

El hecho es que la ofensiva abarca incluso a los *países amigos*, cuando éstos no muestran suficiente dureza o eficacia —según criterios sólo evaluados en Washington—, o cuando mantienen remilgos nacionalistas.

El manual sobre “Cómo desestabilizar a un país amigo”, publicado en la tercera semana de septiembre de 1978 por *Triunfo*,⁶³ un semanario madrileño que reprodujo una hoja de facsimil, da ideas muy claras al respecto.

Al referirse a los “agentes utilizados en operaciones especiales” explica cómo deben actuar los servicios secretos del ejército norteamericano cuando “los *países amigos* muestran pasividad o indecisión frente a la subversión comunista”. En esas condiciones, aclara, es necesario “lanzar operaciones especiales capaces de convencer al gobierno y a la opinión pública del *país amigo* del peligro de una insurrección”.

Por otra parte, hace ver que cuando “el nacionalismo extremo” de un *país amigo* es “incompatible con los intereses norteamericanos” definidos por el gobierno de Estados Unidos, éste exige a través de sus agentes especiales, y del impulso a la oposición de extrema derecha y de extrema izquierda, que cambie el gobierno (e incluso el Estado) para “que el país se beneficie en forma más constructiva de la ayuda norteamericana”.

El manual advierte que los “países amigos” deben observar las reglas democráticas “o al menos deben mantener una fachada democrática”, dada la preocupación legítima del gobierno de Estados Unidos por “tranquilizar a la opinión pública norteamericana”.

Al mismo tiempo insiste en que los países amigos se comprometan a guardar “una sólida actitud anticomunista”. Si no lo hacen “debe pensarse en modificar seriamente sus estructuras”, por supuesto desde el punto de vista de la derecha más recalcitrante.

El manual expresa las doctrinas del general William Westmoreland —comandante en jefe de la invasión a Vietnam de enero de 1967 a marzo de 1968, y del mayor general Kenneth G. Tickmann. Todas las ideas expuestas en él y en muchos otros textos militares estadounidenses, siguen siendo válidas, aunque hayan sido enriquecidas en varios terrenos. Un punto en el que hay cierta novedad es el que da importancia inusitada a la visión filosófica, voluntarista y mesiánica del *rollback*.

⁶³ Cit. por *Le Monde*, París, 23 de septiembre 1978.

Corresponde a la política de la administración Reagan. La novedad no es la guerra contrarrevolucionaria, ni siquiera el uso predominante de ayuda para fomentar la contrarrevolución. Es el paso del *containment* al *rollback*, la organización mental, moral, política y militar del antiLenin capaz de destruir, en su campo y con sus leyes, al enemigo y hasta a los amigos, cuando éstos sean innecesarios o inconvenientes.

El reaganismo busca que las fuerzas socialistas, socialdemócratas y los movimientos de liberación nacional pasen a una política defensiva y se queden en ella. Son estas fuerzas —que hasta los años ochenta estuvieron a la ofensiva— las que se ven obligadas a una estrategia de *containment* del imperio, mientras los líderes moderadores del mismo pierden toda credibilidad y capacidad de recuperar su liderazgo.

La política de “al borde de la guerra” obtiene, en una primera etapa, los frutos esperados, y, como ha sido habitual en la historia, sus dirigentes se obstinan en mantener los mismos métodos para *conservar la ofensiva*.

La filosofía globalizadora de la estrategia del *rollback* se advierte en la estrategia internacional contrarrevolucionaria, que abarca el asedio a las fuerzas pacifistas y a los amigos inseguros o inútiles. Dentro de esa estrategia —en el orden de la guerra— surgen los partidos de la contrarrevolución clandestinos y armados que atacan los eslabones más débiles de la revolución, de la liberación, con una regla de oro: a mayor debilidad, mayor agresividad.

Si antes de Reagan la contrarrevolución era reacción ahora es verdadera contrarrevolución a la ofensiva, avalancha en que Reagan y lo que representa dicen luchar por la “liberación” en Nicaragua, por las “reformas de estructura” en América, por “la revolución” en el mundo.

La mitología “liberadora” exige superar la etapa de las *little lies* y de la mentira como improvisación o arte de aficionados. El co-mediante sabe mentir con una seguridad perfecta: él es la Revolución. Los economistas monetaristas dan una vida emocional al liberalismo, junto con los grandes intelectuales del imperio. En las ideas van desde la defensa múltiple del liberalismo conservador hasta la simpatía por todo marxismo que no sea antimperialista con tal de que critique al populismo, a la socialdemocracia, al socialismo y a los nuevos movimientos populares de liberación nacional.

Los expertos de la ofensiva forjan a los cuadros de la contrarrevolución, unas veces con sectas que dividen a los pueblos y otras con equipos de entrenamiento militar que los desangran. De 1980

a 1984 aumentaron en 150 por ciento las “Fuerzas Especiales” dedicadas a estas tareas. Los “maestros de armas” contrarrevolucionarios aumentaron 400 por ciento en el mismo periodo.⁶⁴

Los ideólogos de la *contra* universal muestran además una gran capacidad filosófica. “Demuestran” que el sentido de la historia no es socialista, ni socialdemócrata, ni anticolonial. El sentido de la historia es contrarrevolucionario. Lo “demuestran” con razonamientos y actos. Vinculan los desplantes con la acción, las ambiciones con las acciones. Derrotar a Nicaragua es comprobar, en la práctica, la teoría de que el sentido de la historia no es la liberación de los pueblos, ni lleva al establecimiento de regímenes de economía mixta, pluralismo político, ideológico y religioso, con democracias de amplia base popular. Esa es una idea *derrotable*, de seres a los que no se debe escuchar.

Al mismo tiempo, la imagen del hombre político que triunfa es “Rambo” en el mundo de “Taxi Driver” y de “Rocky IV”. La política de Rambo, la cultura de Rambo, con audacia, agresividad, perseverancia, malicia, preparación cuidadosa de las armas, uso de un poco más de violencia que la necesaria, y decisión de luchar aun cuando se esté completamente solo y contra todos, es la cultura del caballero andante del Oeste, ahora convertido en el héroe del *rollback*.

Esa cultura se complementa con el realismo político anglosajón, tan bien expresado por la señora Kirpatrick cuando critica a los “autócratas extremistas enemigos de los Estados Unidos” y defiende a “los autócratas moderados amigos de los Estados Unidos”. Pero no es principista. Es “flexible”. Si los *autócratas amigos* dejan de ser útiles, se les expulsa antes de que los pueblos lleguen a expulsarlos, como se hizo con Ferdinand Marcos en Filipinas o Jean-Claude Duvalier, o como se intenta hacer con Stroessner y Pinochet.

La guerra no sólo se libra contra los gobiernos o fuerzas revolucionarias de liberación nacional o socialdemócratas. Se hace también contra los regímenes militares que ya no sirven como intermediarios, o contra los gobiernos monetaristas indecisos, retobones o creídos. Así, no sólo se mediatiza a los pueblos, sino se satisfacen ciertas demandas de la opinión pública norteamericana que están al otro extremo de los ultraconservadores, pero dentro de una misma política hegemónica de Estados Unidos, y que se expresan en el

⁶⁴ *United States Special Forces. Anything, anytime, anyplace?* Washington, D. C., Center for Defense Information, 1984. Cit. por Deborah Barry, *op. cit.*

Washington Post, en el *New York Times*, y en el canal de televisión CBS, a los que Jesse Helms acusa de izquierdistas.

La oposición de las fuerzas democráticas norteamericanas a la intervención militar de Estados Unidos en “otro Vietnam” o las que formulan en favor de los “derechos humanos”, obligan al gobierno a encubrir las agresiones e intervenciones militares que abiertamente sigue promoviendo. Con ello busca la complicidad de la opinión pública en la mentira oficial y en la agresión militar o paramilitar. La presión de las fuerzas democráticas de Estados Unidos lleva al gobierno a sustituir a regímenes militares que antes apoyaba: siempre que ya se hayan desprestigiado demasiado y que otros civiles puedan tranquilizar a la opinión pública norteamericana, confirmando en su conciencia “cómplice” que el gobierno de Estados Unidos lucha por la democracia, tal y como el pueblo la concibe, como una utopía realizada en Estados Unidos.

La filosofía de la “contrarrevolución reaganiana” alcanza así el más amplio radio que jamás haya conocido la historia de las manipulaciones ideológicas. Incluye desde la lucha contra *el Mal* que debe ser destruido, que es ineficaz y corrupto, y que está por perder, hasta la lucha por la *Civilización* postindustrial en que privan las libertades del hombre. Combate la fe del enemigo y sus teorías, sus creencias en una “victoria inevitable” y en una “misión histórica”, y declara al mismo tiempo que Estados Unidos es quien lucha por el bien cósmico, por la eficacia terrestre, con “luchadores de la libertad” a los que cultiva como héroes y paga como mercenarios.

La dificultad de entender de manera no mitológica con quién y contra quién se lucha proviene en parte de la simultaneidad con la que se están librando a la vez varias guerras. De una manera muy objetiva puede decirse que a nivel global hay por lo menos cinco guerras: 1º. La guerra de Estados Unidos por imponer su hegemonía mundial frente a la URSS, 2º. La guerra entre dos sistemas socioeconómicos, el capitalismo y el socialismo, 3º. La guerra colonial en sus formas antiguas y modernas, 4º. La guerra entre la sociedad civil y los regímenes autoritarios y tiránicos, y 5º. La guerra entre las oligarquías y los pueblos.

Estos tipos de guerras derivan en distintos alineamientos, que esquemáticamente se reducen a los siguientes: 1º. De fuerzas (partidos, movimientos, naciones, Estados-nación) que abierta o indirectamente aumentan el poder de una de las potencias hegemónicas. 2º. De fuerzas que juegan papeles revolucionarios y contrarrevolucionarios en relación a los sistemas socioeconómicos. 3º. De fuerzas que juegan papeles colonialistas o partidarios de la libe-

ración frente al imperio. 4º. De fuerzas que juegan papeles liberales aunque no necesariamente democráticos y populares, frente a tiranías y gobiernos autoritarios. 5º. De fuerzas que juegan papeles progresistas en el aumento y el poder de la democracia del pueblo, o regresivos con el aumento del poder de la oligarquía.

Reducir ese complejo de luchas —al que se añaden las de sindicatos, movimientos urbanos, etnias, por sólo señalar unos cuantos— a una sola lucha, la de Estados Unidos y la URSS, y después reducir ésta a la lucha entre el Bien y el Mal es uno de los engaños más burdos en la historia universal de la mentira.

El esquema bipolar logra, sin embargo, que muchos militares y civiles renuncien a cualquier otra lucha que no sea la del Este-Oeste (privilegiada por la teoría de la seguridad nacional), y que optando por ella luchan contra sus propios pueblos y no sólo por Estados Unidos sino por las transnacionales, por los tiranos (o como tiranos), o por las nuevas formas del colonialismo y la dependencia que dominan, explotan y empobrecen a nuestras naciones. Es más, la teoría de la seguridad nacional bloquea hasta la curiosidad misma de saber si hay otras luchas y otras alternativas concretas para cada uno de nuestros países. Bloquea en particular las que tienden a aumentar el poder democrático de los pueblos.

La estrategia global aprovecha todas las experiencias anteriores y diseña nuevas formas de guerra, en parte técnicas y en parte mitológicas. El reconocimiento de fracasos y experiencias adversas, junto con una actitud general práctica, flexible, engendra un mito especial que consiste en creer que las nuevas estrategias y las nuevas artes de la guerra *sí* van a permitir el triunfo que en ocasión anterior no se alcanzó.

El mito nace de una creencia dogmática y existencial: la creencia en la superioridad tecnológica, psicológica, científica de Estados Unidos y sus organizaciones. Con el dogma inalterable de esa superioridad ahistórica, esto es, que en ningún tiempo decae, se fortalecen actitudes paraexperimentales y paracientíficas que dan pie a nuevas armas y tácticas, y hasta a una filosofía de la invencibilidad, con efectos reales no porque los héroes míticos se vuelvan invencibles sino porque se vuelven objetivamente más agresivos y tienden a ser visualizados en su nueva peligrosidad.

La reacción prudente, la retirada táctica del “enemigo” fortalece el mito. La propia agresividad se interpreta como prueba de la propia invencibilidad a condición de que sea constantemente agresivo. Así se hace la crítica del pasado y se enfrenta al futuro. Siempre bajo el dogma de que Estados Unidos ha de ganar. Sus derrotas

se estudian para que gane. El escenario de la *massive retaliation* fue reconocido por Nixon como destinado al fracaso. El escenario de la *escalation* de MacNamara terminó con el vergonzoso fracaso de Vietnam. El escenario de la “guerra nuclear limitada” tuvo que ser abandonado por Reagan ante la protesta de Europa. Pero llegó al concepto de la *winnable nuclear war* que sustituyó al de la *mutually assured destruction* (MAD), y luego el concepto del *rollback* que sustituyó el concepto del *containment*, y el de la “guerra de baja intensidad” que complementó al de la “contrainsurgencia” y la “guerra interna”.

Así, hoy todo gira bajo la filosofía del *rollback*, de regresar el mundo hacia atrás, hasta llegar a aquéllos tiempos en que realmente había una superioridad tecnológica de “Occidente” y la posibilidad de hacer guerras mundiales que se ganaran, y guerras coloniales que eran verdaderas cacerías contra tribus mal armadas, divididas, con sus *primitive minds*, sin sistema de alianzas, sin solidaridad de pueblos, con inmensas posibilidades, para los colonialistas, de impune saqueo de las riquezas naturales y de convertir a los “hombres de color” en trabajadores cautivos e importables.

Si a nivel de la “guerra nuclear que se puede ganar” el mito principal —y el más caro— es la llamada “Guerra de las Estrellas”, y si a ese mito se añaden muchos otros como el del “primer golpe” (*first strike*) por el que se sostiene que se podría dejar absolutamente fuera de combate a la Unión Soviética y organizar entonces un mundo “realmente libre”, con “los valores de Occidente”, si esos mitos han sido severamente enjuiciados por los más notables expertos del mundo contemporáneo,⁶⁵ y encuentran resistencia en las propias filas de los comandos norteamericanos que se niegan a aceptar semejantes disparates, en el terreno de la nueva guerra colonial los mitos son aún mayores pues no sólo se ignora que hoy el desarrollo tecnológico y más concretamente el de los armamentos permite a las masas manejar las armas más sofisticadas, que por lo demás son de fácil acceso en comparación con el pasado, sino que en muchas partes del mundo, en particular del Tercer Mundo, masas y líderes han aprendido, de una manera también experimental de sus anteriores derrotas y victorias, y han desarrollado también (notablemente) lo que podríamos llamar las organizaciones complejas de masas, con lo cual le han dado a la guerra de liberación el carácter propio de la guerra del siglo XX que involucra a *todo* el

⁶⁵ Ver, entre otros: Robert Jay Lifton & Richard Falk. *Indefensible Weapons. The Political and Psychological Case Against Nuclearism*. New York, Basic Books, 1982.

pueblo, mientras los nuevos colonialistas quedan reducidos a grupos paramilitares, de terroristas, de mercenarios, con unidades de “acción rápida” y a lo más con ejércitos regulares de línea que lejos de tener a su lado a las organizaciones del pueblo armado, se enfrentan a ellas.

La oposición a este tipo de guerra colonial por verdaderas razones humanitarias, morales o políticas, es mucho mayor que en cualquier época anterior de la historia, y mucho mayor en el pueblo norteamericano que en el de cualquier otra sede imperial, desde Roma hasta Inglaterra; pero esa oposición —tan valiosa, tan respetable— no se complementa con un sentido crítico equivalente en el terreno de la supuesta superioridad tecnológica. Si las nuevas aventuras colonialistas en Centroamérica y el Medio Oriente se enfrentan a una conciencia creciente de caer en otro Vietnam, en el terreno de la superioridad tecnológica como mito todavía privan los análisis de las “armas inteligentes”, de la robotización de la guerra colonial, y muchas fantasías más entre las cuales sobresale aquélla que consiste en afirmar que la guerra contrarrevolucionaria la van a hacer los pueblos contra sí mismos, al estilo de las guerras coloniales antiguas, en el *rollback* de la historia más fantaseosa que quepa imaginar.

La “guerra de baja intensidad” (GBI) es una guerra colonial. Pero también es una guerra diseñada para satisfacer a la opinión pública norteamericana. Como guerra colonial es una guerra no declarada, es en que incluso se mantienen relaciones diplomáticas con los países en “guerra” atacados, intervenidos con fuerzas especiales no convencionales y, en última instancia, convencionales. Como guerra de opinión, la GBI complementa la retórica de la persuasión con una estrategia que tiende a *comprobarla*. En ese sentido se presenta como una guerra que provoca muy pocas bajas en la población norteamericana y muchas en las poblaciones nativas objeto del ataque. Su mensaje es: “La guerra de baja intensidad no presenta riesgo para los jóvenes norteamericanos”.

En la práctica procura que no haya enfrentamientos prolongados de fuerzas regulares norteamericanas; los enfrentamientos prolongados deben estar a cargo de los nativos apoyados por las fuerzas regulares nativas y sólo en mínima proporción por las fuerzas regulares de Estados Unidos. Estas sólo intervendrán y actuarán cuando sea adecuado, en forma rapidísima —con radares, aviones, naves— siempre que aquéllas hayan sentido las bases del triunfo. El ideal es una acción de masas contrarrevolucionarias encabezadas por grupos de contrarrevolucionarios profesionales, y apoyadas

por los ejércitos locales y norteamericanos tanto en las armas, los aprovisionamientos, las municiones y pertrechos, como en la logística, los servicios de inteligencia y de rastreo.

La guerra de baja intensidad busca que los contrarrevolucionarios hagan lo que le atribuyen a los revolucionarios, o lo que hacen los revolucionarios: encabezar o proteger a las masas.

En el *Conservative Digest*, en la *Policy Review*, en *Vital Speeches*, en *Foreign Policy*, en *National Review*, en *Defense* y en muchas otras publicaciones neoconservadoras, hay amplios testimonios del mito, con otro más que se parece al de la "Revolución Mundial": hacer la contrarrevolución en muchas partes. El mito es evidente desde varios puntos de vista. De un lado los contrarrevolucionarios hacen la contrarrevolución porque no pueden hacer la guerra, y porque si hacen la guerra no pueden ganarla. De otro, los pueblos no hacen la contrarrevolución como hacen la revolución: en ésta actúan para ellos, en aquélla contra ellos mismos, y su entusiasmo, su voluntad enajenados tienden a acabarla más pronto. Una contrarrevolución popular es un engaño muy vulnerable y efímero.

Pero, en medio del mito el proyecto contrarrevolucionario logra un gran éxito *en la medida* en que divide a los movimientos populares, y *en la medida* en que por lo menos una parte de ellos, una parte del tiempo, apoyan las acciones intervencionistas, destabilizadoras y golpistas.

Por eso un importantísimo elemento de la guerra de baja intensidad, como guerra de opinión, consiste en que los nativos se dividan, y sobre todo en que se dividan los nativos revolucionarios, antimperialistas, democráticos o progresistas, cristianos o marxistas; que se dividan los jefes revolucionarios entre sí, que se dividan por sus ambiciones, por sus oportunismos o sus izquierdismos; que se dividan pueblos y gobiernos que los representan o intentan representarlos.

La contrarrevolución popular es el objetivo; el incendio contrarrevolucionario de las masas, su fervor ardiente. El fracaso del proyecto empieza cuando los "luchadores de la libertad" no logran el apoyo del pueblo. Se vuelve endémico cuando los voluntarios no son voluntarios sino mercenarios, y cuando los alzados se desalzan. Pero la guerra de baja intensidad insiste en ganar voluntarios y engaña diciendo que los mercenarios y los enganchados son voluntarios. Mientras de un lado pretende que la contrarrevolución sale del pueblo y que la gran potencia norteamericana sólo apoya a los luchadores de la libertad y a sus pueblos, de otro lado argumenta que la revolución popular es teledirigida.

En este Continente, la guerra de baja intensidad en lo que a la opinión pública se refiere se desarrolla sobre todo desde Washington y va desde los ataques contra México o Panamá, contra Brasil o Argentina, hasta los más abiertos o brutales, Centroamérica, Colombia, o Bolivia. Para operar en la opinión pública de cada región emplea el cinismo y la hipocresía, con el arte de la publicidad y el de gobernar especializados. En la historia de las mentiras de la guerra colonial la GBI es un eufemismo de expertos. Las declaraciones más agresivas se combinan con las más diplomáticas, con las más idealistas, religiosas, democráticas. Los publicistas realizan la política de ocultar lo que los líderes declaran. Es la guerra colonial con nuevos capitanes y nuevos evangelizadores. Con sus técnicas profanas de conquista armada y espiritual.

La GBI busca resolver un problema real de los intervencionistas norteamericanos en su propia casa. Según diversas encuestas, “a medida que los norteamericanos están mejor informados tienden a ser más críticos”. Los círculos intervencionistas luchan por “la creciente ignorancia del pueblo norteamericano”.⁶⁶ Es más, los estrategas de la GBI tratan de conquistar “las mentes y corazones” de los pueblos latinoamericanos. El carácter ideológico de la lucha es fundamental para quienes se oponen a la nueva guerra colonial. Su activa “diplomacia pública” está destinada a alimentar la guerra de los periodistas progresistas y democráticos contra la ignorancia del pueblo imperial. La diplomacia pública va al encuentro de poderosas fuerzas democráticas y religiosas que se oponen a la política intervencionista. Refuerza los valores libertarios del pueblo norteamericano. Resquebraja las “fábricas del pensamiento”.

Pero la GBI está al tanto de todas estas respuestas. En su arte de argumentar no sólo cuenta su herencia colonialista sino la decisión de pasar a la ofensiva. La guerra de baja intensidad pasa a la ofensiva en todos los terrenos (político, económico, ideológico, militar), con algunos éxitos innegables, frente a posiciones menos agresivas, más conciliadoras, menos voluntaristas, más realistas, y deseosas de negociar dada la nueva correlación de fuerzas.

Por lo demás, “La GBI no busca la eliminación física del enemigo por medios militares, sino más bien deslegitimarlo, aislarlo y sofocarlo, a tal grado que los insurgentes y los gobiernos revolucionarios dejen de considerarse como una alternativa política posible o estable”.⁶⁷ Si es una guerra por la opinión pública de los Estados

⁶⁶ Esta sección debe mucho a las investigaciones de Deborah Barry. Ver en especial “Los conflictos de Baja Intensidad. Reto para los Estados Unidos en el Tercer Mundo. El caso de Centroamérica”. *Cuadernos del Pensamiento Propio*. Managua, CRIES, 1986.

⁶⁷ Barry, Deborah, p. 21.

Unidos, también lo es por la persuasión en los campos de batalla coloniales. En ellos también da una importancia fundamental a la guerra de las noticias, a la guerra académica, a la guerra de los poetas, a la guerra religiosa, a la guerra psicológica, cada una diseñada e implementada en forma práctica, “flexible”.

* * *

La argumentación de la guerra está relacionada con dos grandes objetivos de la historia contemporánea: el *desarrollo* y la *democracia*. Tiene como antivalores al populismo, a la socialdemocracia y sobre todo, al nacionalismo revolucionario y al comunismo.

El *desarrollo*, que en épocas anteriores se llamaba progreso, es el objetivo o valor más poderoso que se preconizó en la postguerra, y que se vio no sólo como crecimiento económico, ni sólo como modernización en la tecnología y la producción, sino como un proceso de creciente autonomía o independencia de las naciones, y de una distribución cada vez más equitativa de los ingresos, bienes y servicios, todo dentro de una economía de mercado o economía libre, en la que la empresa privada y las utilidades de sus propietarios serían el móvil natural del conjunto del proceso. Un conjunto, en el que por cierto habría también un desarrollo político, entendido éste como ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos, de las garantías individuales y del sufragio en la elección de representantes, dentro de sistemas políticos pluripartidistas al estilo de Europa Occidental y Estados Unidos.

El valor del “desarrollo” se complementaba a veces con algunas políticas parecidas a las del *Welfare State* —en materia de seguro social, exenciones, prestaciones y concesiones a los trabajadores organizados, participación del Estado en ciertos puntos estratégicos de la economía, y distintas formas de estímulo al mercado interno, vía fiscal, y de políticas de empleo y salarios. El valor de los partidos políticos se complementaba con un reconocimiento del llamado sindicalismo libre y del ejercicio de funciones parecidas a las de los sindicatos norteamericanos.

El problema consistió en que todos esos valores quedaron insertos en un proceso de desarrollo real cada vez más dependiente y desigual en el que tendieron a dominar cada vez más el capital monopolístico y sus asociados, mientras proliferaban inmensas masas de población marginadas que viven en la “pobreza” o la “indigencia”. El proceso de acumulación real, internacional e interno, hizo que cuantiosas porciones del excedente producido, se transfirieran de

manos de trabajadores que quedaron en la extrema miseria, a los grandes propietarios, otras que pasaran del campo a la ciudad, de la agricultura a la industria y la banca, de las empresas pequeñas, campesinas o comuneras a las agroindustrias, de las artesanales a los monopolios, y en general de las naciones latinoamericanas a las grandes metrópolis de Europa y en particular a Estados Unidos.

Todo un nuevo sistema de comercio colonial, esto es desigual, fue perfeccionando los métodos que le servían para extraer el excedente, como vender cada vez más caros los productos elaborados en la metrópoli y comprar cada vez más baratos los elaborados en América Latina; o como apoderarse de los mercados internos con sucursales transnacionales que no sólo gozaban de exenciones y concesiones, sino de ventajas comparativas en materia de créditos, tecnología, costos; o como romper las políticas proteccionistas de América Latina y acentuar las medidas proteccionistas contra los productos latinoamericanos que intentaban competir en el mercado norteamericano; o como realizar competencias desleales con los llamados *dumpings*, o ventas por debajo de costos hasta que quebraban los competidores nativos, y hasta que las transnacionales se apoderaban de los mercados; o como políticas monetarias que hacían pagar por un dólar mucho más de lo que se podía adquirir con su equivalente en monedas nacionales, de modo que los propietarios de dólares podían comprar en América Latina por cada unidad, más de lo que obtenían en su país, mientras para los latinoamericanos el costo de las importaciones para sus industrias resultaba artificialmente alto.

A esos y otros recursos que lograban obtener mayores utilidades en América Latina por unidad invertida de las que se habrían obtenido en la metrópoli, y remitirlas con costos inflados y dobles contabilidades mediante las que escondían formidables evasiones fiscales, a todos esos recursos se añadió uno de gran significación: la deuda externa con tasas móviles de interés (el arbitrio de los prestamistas) y masas crecientes de principal y servicios acumulados, una suma (hoy 380,000 millones de dólares) que se invirtió en “obras faraónicas”, en armas pronto obsoletas y en formidables negocios muchos de cuyos beneficiarios pusieron sus ganancias en los propios bancos metropolitanos.

Todo este fenómeno dio pie a dos grandes crisis: una a principios de los años sesentas y otra en los ochentas. Aquélla estuvo relacionada en forma significativa con la respuesta que quiso dar la “Alianza para el Progreso” a la Revolución Cubana, una respuesta que se propuso renovar —en gran escala— la política económica y la polí-

tica militar. El fracaso de las reformas de la "Alianza para el Progreso" acentuó la crisis de los regímenes políticos constitucionales, mientras la adaptación militar hecha para la "guerra interna" tomó la delantera en el conjunto de la región con muy pocos países que se salvaran de ella.

Desde el fracaso de la "Alianza para el Progreso", la guerra colonial (con nuevos nombres y técnicas), sustituyó la guerra contra la pobreza por la guerra contra los pobres, en especial contra los pobres insumisos. Desde entonces la política económica ya no sólo se entendió como complemento de la guerra sino como parte de la guerra. Unas veces sirvió como sustituto de la guerra militar. "Cuando no podemos recurrir a los medios militares o tenemos límites para nuestra política, las medidas económicas son muy efectivas. . . Su uso puede ser muy doloroso para el otro lado", ha escrito un ex funcionario del *National Security Council*.

Las restricciones al comercio, la inflación, la especulación, las devaluaciones, las negativas de crédito, de respuestas, etc., no sólo se hicieron como instrumentos de una política de acumulación y lucro, sino como complemento de la misma y como forma de reducir o anular la fuerza de los gobiernos nacionalistas y revolucionarios, o de los aliados indecisos, o de los sindicatos obreros demasiado exigentes, o de los campesinos que "podrían ayudar a los rebeldes". Más aún, en economía y recursos los Estados Unidos hicieron una política deliberada para fortalecerse, para depender cada vez menos del Tercer Mundo al que vieron desde entonces como un "enemigo" real y potencial. Así, "implementaron" proyectos para depender cada vez menos del Tercer Mundo en materia de energéticos, de minerales pesados, de metales e incluso de productos de consumo general como el azúcar, el café y hasta el cacao.

Los Estados Unidos disminuyeron su "índice de vulnerabilidad" frente al Tercer Mundo y aumentaron el "índice de vulnerabilidad" del Tercer Mundo. Aumentaron sus reservas y sustitutos de petróleo y otras fuentes de energía y materiales, y deliberadamente aumentaron la dependencia alimentaria del Tercer Mundo, en especial de los campesinos del Tercer Mundo, "el agua de los peces" según su lectura de Mao. La desestabilización económica se convirtió en parte estructural de la crisis económica como negocio y como guerra, como forma de lucrar y como forma de luchar por el poder mundial y colonial.

La lucha por el poder sobre los países dependientes adquirió características relativamente nuevas al combinar las acciones de guerra con los procedimientos de legitimación liberal, y la reestructuración

de sistemas políticos con nuevas coaliciones o alianzas más consistentemente articuladas al capital transnacional y al gran capital de las localidades.

El problema de la legitimación se volvió muy débil en el terreno económico y social por la dificultad de basarla en el “desarrollo”. Pues si bien se siguió hablando en parte de esta posibilidad, y de “reformas de estructura” o de “modernización”, resultó cada vez más evidente, con la crisis, no sólo la permanencia del “desarrollo cero”, sino “menos cero” y pronto se vio que las “reformas de estructura” ni siquiera eran como las de “La Alianza para el Progreso”, ilusoriamente redistributivas, sino deliberadamente privatizadoras y desnacionalizadoras. En cuanto a la “modernización” no tardó en mostrar que era de las grandes empresas norteamericanas y sus asociadas, tal vez con algunas excepciones del gran capital brasileño.

Al surgir el fracaso histórico del “desarrollo” con “justicia social” la guerra ocupó un primer plano. Su necesidad de ocultarse y de justificarse como guerra se hizo primero en nombre de la “seguridad nacional”. Después, con un proyecto indefinido de democracia indefinida.

Toda guerra colonial se oculta. En ésta a la labor tradicional de los colonialistas evangelizadores, que hoy realizan los publicistas liberales, se añaden diversas formas de mediación de un colonialismo con *polis* metropolitanas y periféricas: campañas de derechos humanos, otras en favor de la libertad de prensa, otra más en favor de la democracia electoral, vista como un remedio milagroso e infalible, más que como un proceso político, económico y social que se puede determinar. La dominación externa se hace en nombre de “la libertad” y “la democracia” expresadas por los publicistas y los políticos imperiales, o sus amigos de dentro de los países periféricos. Su diferencia respecto a la legitimación colonialista y liberal del siglo XIX es que en lo ideológico tiene que enfrentarse a distintas manifestaciones de la socialdemocracia, del socialismo y del pensamiento popular revolucionario.

La lucha contra el socialismo (*rollback of socialism*) se combina a la lucha contra el populismo, contra el Estado y sus funciones económicas y sociales, contra la democracia que va más allá del liberalismo, y contra la liberación nacional que descansa en un poder popular. El problema es que en esta nueva conquista ya no se ofrece como en la del siglo XVI la salvación del alma, ni como en el XIX acabar con los remanentes del colonialismo tradicional —español o portugués. Se ofrece un modelo de libertad y democracia limitada

con pérdida de victorias sociales alcanzadas en etapas anteriores, con baja en los niveles de vida de la mayoría de la población, incluidas las capas medias, y con empobrecimiento y dependencia crecientes de los pueblos y las naciones. Todo el proyecto implica un ocultamiento de los planes de guerra teóricos y prácticos, en el que se da un peso formidable a las mentiras históricas, sociológicas, económicas y a los engaños de guerra.

La guerra se oculta como si todos y cada uno de sus golpes obedecieran a una crisis provocada por leyes naturales. Para salir de la crisis se proponen (y exigen) medidas que aumentan la asfixia y dependencia económica de las naciones, que deterioran la capacidad de producción y acumulación nacional, y que sientan las bases de mejores condiciones para las empresas monopólicas transnacionales. Pueblos y estados ven así cómo se privatizan y desnacionalizan sus países, y cómo se endeudan cada vez más, cómo crece cada vez más el desempleo y la miseria en medio de inflaciones y devaluaciones espectaculares. El ocultamiento de la guerra económica y sus motivaciones impide a los economistas explicar la política económica como parte de una política de guerra. No la ven como un modelo de acumulación que deliberadamente lleva a la transnacionalización. Y carecen de la inteligencia de los peligros. No la explican como parte de una estrategia de guerra global, ni como parte de una estrategia de guerra de baja intensidad, ni como guerra económica, ni como economía política de las transnacionales y los gobiernos que las apoyan.

El desarme intelectual colabora al engaño. El engaño adquiere para unos un alto nivel de conciencia: “se usa deliberadamente como falsa representación de la realidad que permite ganar ventajas en las luchas”. (“...deception is the deliberate misrepresentation of reality done to gain a competitive advantage”). El engaño es para otros la forma normal e inconsciente de hacer conciencia económica o política sub-representativa o no representativa. Lo encubierto, lo desaparecido da a los pueblos y naciones del Tercer Mundo una imagen impráctica de la realidad económica, política, militar, y un método inexacto de los procedimientos que sirven para alcanzar metas. Permite a las grandes potencias y a los monopolios “ganar ventajas” notables en la lucha económica, política y militar.

Ante la crisis del proyecto histórico ilusorio, la guerra encubierta, económica o política ocupa un lugar importantísimo. Todo y todos (teóricos, publicistas, diplomáticos) encubren la guerra con palabras y conceptos, lemas y cortesías, ejércitos “paralelos”, fuerzas “especiales”, amenazas culpabilizadoras, todo para “ganar ven-

tajas” que implican la posibilidad de aumentar la hegemonía imperial en el campo político y militar, por ejemplo, con el pretexto de combatir a la revolución nicaragüense, o con el de combatir la droga. Se logran así intervenciones “invisibles”, como en Honduras o en Bolivia, y se imponen economías informales legales y clandestinas, de miseria y droga.

El engaño es especialmente profundo y elegante en el campo político. Empobrecer a la población, desnacionalizar las empresas y recursos, acabar con la política social, no dejan a la larga más alternativa a los gobiernos que el uso y abuso de una política represiva, civil o militar que cubra el vacío de las concesiones y negociaciones sociales, o la reducción de éstas a su mínima expresión. Ofrecer en medio de la *debacle* “la democracia” es el mito publicitario más increíble y creído.

En neoliberalismo no se detiene. Si usa “la democracia” contra el socialismo y el populismo, y “la libertad” contra la liberación, ataca a los gobiernos civiles o militares acusándolos de autoritarios y represivos cuando al hacerlo fortalece sus posiciones con actos publicitarios de coherencia en los principios y de grandeza de los ideales. La política imperial insiste de nuevo en que el autoritarismo es un fenómeno nativo, y oculta el apoyo que abiertamente le da cada vez que le conviene. Hoy, a diferencia de los años sesenta, el imperio tiende a establecer su hegemonía sobre la base de un sistema de mediaciones electorales, que revelan en su juego de guerra un talento especial y un dominio de la situación que, por un momento, parece hacer innecesario el Brumario latinoamericano. La lucha de clases ya no obliga a buscar el equilibrio en el ejército.⁶⁸ Los patrones dejan como relevo a los políticos.

Así sea en forma provisoria, el neoliberalismo no sólo ha aislado y dividido a numerosas fuerzas progresistas y de liberación, sino ha logrado que pierdan en un alto grado su identidad. Es cierto que el poder imperial y sus aliados no han podido en todos los casos convencer de sus bondades a los pueblos, y que en muchos han impuesto su nueva dominación con la intimidación, y el desánimo. Pero a menudo no sólo han logrado aislar a las fuerzas de liberación, sino convencerlas de que el liberalismo (en sus críticas al Estado fuerte, al autoritarismo de los países y movimientos populares, al dogmatismo de un cierto pensamiento socialista), constituye la verdadera y única alternativa; un proyecto civilizado, serio.

El liberalismo ha llegado a ser de tal modo la lógica del sentido común que sus dogmas se han insertado en el propio pensamiento

⁶⁸ Cf. Alfred Stepan.

de la izquierda latinoamericana, en proporciones y profundidades que no tienen parangón. Una parte muy importante de la izquierda con frecuencia ha perdido su identidad. Los partidos comunistas, socialistas o socialdemócratas con frecuencia han olvidado su proyecto histórico. En algunos países, a la pérdida de identidad de ideólogos y partidos de izquierda, se añade la pérdida de identidad de la clase obrera, el agotamiento o la extinción de su papel central dentro de los movimientos populares, y de hegemonía o de lucha por la hegemonía en los proyectos nacionales. Lo que en los individuos logra la tortura, con incontables víctimas que ya no saben quiénes son, el momento que viven, el lugar donde están, la dirección que llevan, el neoliberalismo lo ha logrado en partidos y movimientos, y en amplios sectores del pensamiento de izquierda que se han corrido a la derecha.

La llamada “revolución reaganiana” busca destruir el poder enemigo; pero también construir el propio. A la destrucción, mediante cooptación o mediatización, de los núcleos de poder popular —por incipientes que sean— no sólo ha añadido una política de mediaciones electorales con partidos recortados, funcionales, sino la construcción de verdaderos núcleos de poder transnacional. Los patrones-políticos y los políticos-empresarios de América Latina, dueños de oligopolios y oligopsonios, más o menos asociados o dependientes de las transnacionales dirigen la formación de los nuevos núcleos de poder.

La “redefinición de acuerdos económicos y políticos”, de alianzas y jerarquías, comprende a los militares y a los partidos, e incluso a los sistemas políticos. En el terreno de las clases dominantes, la “redefinición” no busca eliminar a nadie; pretende colocar a cada quien en su lugar. Busca que los más asociados a la “libre empresa” norteamericana y, en general, a los grupos más fuertes del capital transnacional y transnacionalizado constituyan el eje del nuevo poder y de un Estado reestructurado con su sistema político trilateral y con nuevos premios y castigos, alicientes y tabúes; con nuevos sistemas de seguridad individual y social, de educación privada y pública, elemental o superior, científica, tecnológica y humanística. Que hacer carrera ya no dependa de las antiguas universidades públicas ni de los gobiernos, sino de los empresarios y sus escuelas constituye una contrarrevolución de las expectativas y en el realismo, en el conformismo, en la conducta meritatoria.

La construcción y el apoyo a un nuevo tipo de partidos es uno de los hechos más notables. Se trata del fortalecimiento —con las burguesías locales asociadas— de partidos políticos que expresan

al nuevo núcleo de poder en las contiendas electorales. Los partidos del poder transnacional en ascenso habrán de ser capaces de hegemonizar al Estado en torno a la fuerza modernizada de los patrones políticos, una fuerza a la que se une o adscribe una amplia base de apoyo social, a veces empezando por la vía del partido y otras de los aparatos del Estado. El Partido Demócrata Cristiano de El Salvador y el PAN en México son dos ejemplos de este proceso, cada vez más respaldado por las burguesías locales transnacionalizadas que buscan una fuerza política más funcional que la de los militares en El Salvador, y que la del PRI en México.

El cambio se hace mediatizando demandas populares y democráticas, con golpes sucesivos de desestabilización (desestabilización de baja intensidad) que cambia la correlación de fuerzas hasta que el partido favorecido llega a constituirse en la alternativa política y de poder. "La lucha por el control del aparato burocrático-militar se explica externamente como el proceso de democratización del sistema político. . ." observa Castro Orellana a propósito de lo que ocurrió en El Salvador con el ascenso "democrático" de Duarte.⁶⁹ Algo semejante puede decirse de la ofensiva imperialista por la "democratización" de México: esconde el objetivo de controlar los aparatos de Estado incluido el ejército. Si en un caso "la democratización" neoconservadora sirve para controlar a los militares con la democracia de Duarte, en otro sirve para controlar al PRI con la democracia del PAN. Los militares necesitan a Duarte; Duarte necesita a los militares. Los Estados Unidos necesitan a ambos encabezados por Duarte. Los Estados Unidos logran que los militares dejen de ser un partido político armado que ocupa los puestos de representación, y alientan a un nuevo mediador civil a su servicio. En México, el poder monopólico que aspira al poder político necesita del PAN; el PAN necesita de ese nuevo poder. Los Estados Unidos necesitan a ambos encabezados por el PAN. En México unos y otros buscan que el PRI deje de ser el partido del Estado que ocupa la inmensa mayoría de los puestos de representación y todos los del poder político y del gobierno. Es más, quieren otro gobierno, otro Estado y otro Ejército ya sin compromisos nacionalistas o sociales. Autoritarismo y corrupción sirven como elementos racionalizados de la desestabilización de derecha que busca mediatizar las demandas progresistas en el mismo sentido.

La lucha por la "democracia" en donde sea y contra quien sea, siempre que sea la democracia de los monopolios, pone unas veces

⁶⁹ Castro Orellana, p. 68.

en el blanco a los militares y otras a los partidos socialdemócratas y populistas que por más esfuerzos que hacen para adelantarse a las nuevas demandas económicas, financieras, ideológicas y políticas de los neoconservadores, no logran dejar de ser militares, o populistas, y socialdemócratas, costosos, ineficientes, corrompidos, a veces nacionalistas y hasta "socialistas".⁷⁰

La teoría del Estado transnacional es la teoría de la seguridad nacional. Como proyecto hegemónico corresponde a la política de una gran potencia, y también a una política colonialista de nuevo tipo. *Lo nuevo* de esa política consiste en pasar a la ofensiva ideológica para destruir la identidad de la izquierda como expresión de cualquier pensamiento socialista, y para fortalecer el liberalismo y la "democracia limitada" mediante argumentos que voltean el propio pensamiento socialista o marxista contra el socialismo y el marxismo, y con otros que utilizan el pensamiento liberal, democrático y modernizador para enaltecer a la empresa privada transnacional.

La acción armada se complementa en todos los casos. No hay guerra sin moral, ni guerra sin diplomacia, ni guerra sin política, ni guerra sin elecciones, ni guerra sin prensa, radio o televisión. La agresividad múltiple se plantea incluso en el orden de las reformas, y fortalece los prejuicios con las explicaciones. No está en favor de reformas sociales que no funcionan, como la "Alianza para el Progreso". Está en favor de reformas transnacionales que aumenten la hegemonía imperial, y que perfeccionen el sistema notable de transferencias del excedente de los países pobres a los países ricos.

El término mismo de *reformas* es redefinido, y nada tienen que ver las reformas de estructura actuales con las del pensamiento estructuralista y socialdemócrata, populista y socialista. Al contrario. Las reformas de estructura de hoy son las reformas funcionales del capital transnacional y de la hegemonía imperial. Tienden por lo tanto a acentuar los fenómenos de dependencia y desigualdad a un punto que rompe todos los records anteriores, y que hace particularmente difícil la continuidad del proyecto "democrático", por limitado que sea. Sólo quienes no quieren aceptar que la política económica es *parte* de la guerra no ven el carácter extremadamente provisorio de esta "democracia".

Pero quienes dirigen la guerra sí están conscientes de la frágil estabilidad de las actuales democracias latinoamericanas apoyadas en los monopolios. A quienes se les oponen no sólo los acusan de

⁷⁰ "Socialistas" los llama Jesse Helms. News Week, 28 de julio de 1986.

terroristas (homicidas) sino de traficantes de drogas (ladrones). Aquel calificativo se usa sobre todo contra los rebeldes; éste incluso contra los militares y gobernantes que se vuelven inútiles o que ponen demasiados reparos.

De otra parte, como los neoliberales rechazan los factores sociales como causa de las revoluciones populares, sostienen que sus "enemigos" soviéticos y cubanos exportan las revoluciones. No quieren pensar que aun sin ellos habría revoluciones. Quieren decir que sin ellos no tendrían éxito las revoluciones. Quieren que al perder las revoluciones los pueblos, tengan éstos que aguantar el *status quo* sin más alternativa que la "revolución" reaganiana. Y dicen que habrá libertad, mientras toman precauciones para que deje de haberla cuando sea necesario y cuanto sea necesario. Con la bio-sociología y la "contra-insurgencia" planean el exterminio de toda la población del Tercer Mundo que sea disfuncional al sistema transnacional triunfante.

* * *

Frente a tan monstruoso y semiconsciente designio, los pueblos de América Latina luchan en condiciones concretas muy variadas. De ellas pueden hoy desentrañarse algunos rasgos comunes de lo que podríamos llamar una política de profundización por etapas. Se trata de un camino clásico y actual que con ritmos históricos cada vez más acelerados, parte de un liberalismo en que las organizaciones políticas defienden los derechos y garantías individuales, el sufragio efectivo y la representación partidaria o sindical hasta llegar a un gran movimiento que lucha por imponer la democracia del pueblo y que en sus afanes de independencia y justicia social va descubriendo tras el tirano al imperio, y tras uno y otro a las clases propietarias y empresariales que se oponen a abandonar sus excesivos privilegios.

El camino lleva también a descubrir en el interior del pueblo y sus organizaciones la necesidad de que los más distintos movimientos sociales y populares se unan en un sólo Movimiento, así como la de transformar los llamados partidos políticos, en partidos que no sólo sean electorales sino de poder, y a los sindicatos en organizaciones de trabajadores, que no sólo se ocupen de las demandas gremiales, sino de formular demandas que conciernen al conjunto del pueblo trabajador y la nación.

En el proceso, el Movimiento del pueblo descubre además cómo pasar del liderazgo personalista al colectivo, del sectario al plural y

amplio, del deliberativo al que es también ejecutivo; forja así liderazgos que superan al corporativismo y al clientelismo —en lo que éstos tienen de lucha exclusiva en favor de los miembros de propio gremio y de los allegados—, y que superan al caudillismo y al populismo en lo que tienen de dirección personal autoritaria o popular autoritaria.

En la claridad que surge y se expresa destacan dos hechos más: una amplia política de alianzas que construye el poder en torno al pueblo y a quienes en él son trabajadores, y un movimiento de solidaridad internacional con todos los pueblos y gobiernos cuyas bases y objetivos son populares, sociales, nacionales, que permiten consolidar el proceso en forma no principista o “doctrinaria” sino práctica: cultural, política y militar. Con un añadido: ser todo lo diplomático, flexible, tolerante y plural que se pueda pero no reconstruir, bajo ninguna circunstancia, ni el pacto colonial ni los pactos de opresión de la tiranía, o los de explotación del capitalismo colonizador en sus versiones modernas o antiguas.

El cambio de profundización por etapas es un universo de humanismos, desde el católico o cristiano, pasando por el “Ilustrado” de la independencia; por las luchas liberales de nuestro siglo XIX, o las que en siglo XX se han dado en busca de una democracia social y una independencia económica, hasta llegar a las revoluciones más recientes, la cubana o la nicaragüense, siempre con aportaciones propias y movimientos cada vez más plurales en la política, el lenguaje, las etnias y el poder. Así se renueva, en conformaciones variadísimas, un objetivo común que es *posible* alcanzar; un mundo alternativo no sólo más democrático sino más desarrollado y menos desigual, sin servidumbres coloniales como la deuda externa y sin peligros permanentes de incendio nuclear.

Apoyar ese proyecto frente al nuevo colonialismo, constituirá la más importante solución política para detener una guerra que el imperio, el capital transnacional y los bloques locales asociados le han declarado al Tercer Mundo y en especial a nuestra América.

Si en el pasado muchos militares latinoamericanos lucharon al lado de sus pueblos, no se puede descartar que en el futuro sean más los que estén con ellos, pero con mayor conciencia y mayor eficacia, con mayor experiencia y voluntad de triunfo nacional, democrático y popular.

En cualquier caso es ingenuo pensar que se ha salido de regímenes militares para volver a ellos con la misma facilidad que en el pasado. Si los militares sirvieron en los años sesenta para “forjar una política apolítica, como consenso, como aceptación, como go-

bierno por *fiat*", y si ahora se les ha pedido que sirvan para hacer una política civil de "competencia y compromiso", o una política de "conflictos regulados",⁷¹ es improbable que otra vez jueguen el papel anterior —que tantas críticas les ha valido—, sin que ellos mismos, y los civiles, no intenten, nuevos caminos para imponer una democracia en que el núcleo del poder se centre en el pueblo, y en que la utopía de la Edad Moderna, de desarrollo o progreso de los pueblos soberanos frente a los tiranos y frente a los imperios se convierta en la base de una nueva política y de una nueva Civilización.

La recuperación de la identidad de los militares latinoamericanos coincidirá con la de sus pueblos en lucha por la libertad, la independencia, la democracia, la justicia social y otros valores estratégicos y prácticos. Con sus pueblos, los militares descubrirán también a sus amigos y enemigos, y se plantearán cada vez más lúcidamente con quién hacen la guerra y contra quién, o con quién hacen la política para detener el holocausto. De una manera más exacta: se plantearán el problema real que no es el de sustituir los regímenes castrenses por regímenes civiles dejando al mismo núcleo de poder de las transnacionales y sus asociados nativos, sino el de sustituir esos núcleos de poder por otros, cuyo centro sea el pueblo trabajador. Para eso necesitarán superar una idea muy arraigada, de tutoría de pueblos y naciones. Y otra, de árbitros, que median entre el imperio y la nación, entre la oligarquía y el pueblo.

La construcción de los nuevos bloques de poder centrados en el pueblo trabajador elimina cualquier conciencia o voluntad que acerque a ellos como encargado o tutor, y revela que la tarea no consiste en arbitrar o mediar con la fuerza militar entre imperios y naciones, oligarquías y pueblos sino en formar parte de ellos con toda la fuerza de que se dispone, conscientes de que la alternativa no es sumisión o rebelión militar al imperio o la oligarquía, ni arbitraje o conciliación entre éstos, sino destacamento de la fuerza militar como fuerza de la mayoría.

Julio, 1987

⁷¹ Nordlinger, Erich A. "Soldiers in Mufti". *American Political Science Review*, 1970, 4, 1137.

Referencias bibliográficas

- AGÜERO, Felipe. "Autonomía de las fuerzas armadas y democracia: el caso chileno", Mimeo, 1985.
- AGUILERA, Gabriel. "Autonomización y corporativización castrense: el caso de Centroamérica", Mimeo, 1985.
- BALLON E., Eduardo. "Los movimientos sociales en la crisis: el caso peruano", Mimeo, 1985.
- BARRY, Deborah. "Los conflictos de baja intensidad. Reto para los Estados Unidos en el Tercer Mundo. (El caso de Centroamérica)", en *Centroamérica. La guerra de baja intensidad*. CRIES, Managua, 1986, pp. 9-44.
- BENITEZ MANAUT., Raúl, et al. *Estados Unidos contra Nicaragua. La guerra de baja intensidad en Centroamérica*, Editorial Revolución, Madrid, 1987.
- BENITEZ MANAUT, Raúl. "La militarización de Centroamérica. Problemas de interpretación", en *Polémica*, San José de Costa Rica, Núm. 21, octubre-diciembre 1986, pp. 60-78.
- BENITEZ MANAUT, Raúl, Lucrecia Lozano, Ricardo Córdova Macías y Antonio Cavalla. "Fuerzas armadas, sociedad y pueblo: Cuba y Nicaragua", Mimeo, 1985.
- BENITEZ MANAUT, Raúl. *La teoría militar y la guerra civil en El Salvador*, Tesis, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1986.
- BERMUDEZ, Lilia. *Guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica*, Siglo XXI Editores, México, 1987.
- BLIXEN, Samuel. "Bolivia: Maniobras militares de Estados Unidos. Absalón y el proyecto exterminador", en *Brecha*, 30 de abril de 1987.
- BRIGAGAO, Clovis. "Autonomía militar e democracia: o caso brasileiro", Mimeo, 1985.
- BUSTAMANTE, Fernando. "Tendencias recientes en el desarrollo institucional de las fuerzas armadas de Ecuador y Colombia. Una revisión comparativa", Mimeo, 1985.
- CAMPERO, Guillermo. "Luchas y movilizaciones sociales en la crisis: ¿se constituyen movimientos sociales en Chile?", Mimeo, 1985.
- CASTRO ORELLANA, José Rodolfo. "El plan de contrainsurgen-

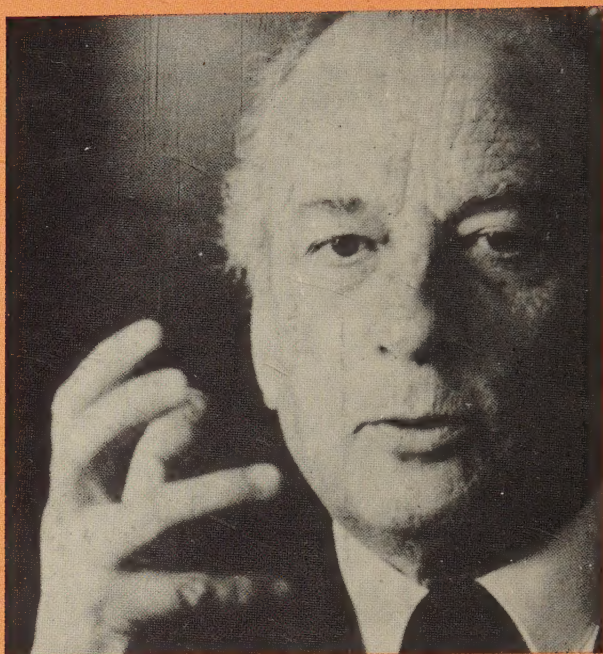
- cia norteamericano para El Salvador y los cambios en las fuerzas armadas gubernamentales”, en *Centroamérica: La guerra de baja intensidad*, CRIES, Managua, 1986, pp. 61-86.
- DEAN, Warren. “Latin American ‘Golpes’ and Economic Fluctuations, 1823-1966”, en *Social Science Quarterly*, Vol. 51, Núm. 1, junio, 1970, Austin, pp. 70-80.
- DE GOES, Walter. “A crise do regime e a sucessao de 1985. O novo regimen militar”, en de Goes Walter e Aspasia Camargo. *O Drama da Sucesao*, Novas Fronteiras, Río de Janeiro, 1984.
- DEL HUERTO AMARILLO, María. “Bases del proceso de autonomización de las fuerzas armadas en el Uruguay”, Mimeo, 1985.
- DRUETTA, Gustavo Adolfo y Ernesto Justo López. “Subordinación constitucional, control jurídico y tendencias democráticas de los militares argentinos”, Mimeo, 1985.
- EMMERICH, Gustavo Ernesto. “Ejercicio del poder y carácter del gobierno en América Latina”, Mimeo, 1987.
- “Entrevista con Sergio Ramírez”, en *Proceso*, México, 16 de mayo de 1981.
- FILGUEIRA, Carlos H. “Movimientos sociales en la restauración del orden democrático: Uruguay 1985”, Mimeo, 1985.
- FLORES GALINDO, Alberto. “Perú. La guerra silenciosa”, en *Brecha*, Montevideo, 12 de diciembre de 1986.
- FONTANA, Andrés. “De la crisis de las Malvinas a la subordinación condicionada: las fuerzas armadas en la transición a la democracia”, Mimeo, 1985.
- FOSSUM, E. “Factors Influencing the Occurrence of Military Coups d’Etats in Latin America”, en *Journal of Peace Research*, Vol. 4, Núm 3, Oslo, 1967, pp. 228-251.
- GANDASEGUI, Marco A. y Milton Martínez H. “Movimientos populares y democracia emergente en Panamá”, Mimeo, 1985.
- GOMEZ CALCAÑO, Luis. “Venezuela: Los movimientos sociales ante la crisis”, Mimeo, 1985.
- GONZALEZ CASANOVA, Pablo. *El Estado y los partidos políticos en México*, ERA, México, 1987.
- HARNECKER, Marta. *El gran desafío* (entrevista con Jaime Wheelock), Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1983.
- KERN, Delince. *Armée et politique en Haiti*, Editions L’Harmattan, París, 1979.
- KIRKPATRICK, Jeane. “Dictatorship and Double Standards”, en *Commentary*, Vol. 68, Núm. 5, New York, noviembre 1979, pp. 34-45.

- KLARE, Michel T. and Cynthia Arinson. "Exporting Repression: United States support for authoritarianism in Latin America", en Richard P. Fagen, *Capitalism and the State in United States-Latin American Relations*, Stanford University Press, California, p. 139.
- LASERNA, R., Roberto. "Bolivia: la acción social en la coyuntura democrática", Mimeo, 1985.
- LIEUWEN, Edwin. *Arms and Politics in Latin America*, Praeger, New York, 1960.
- LIFTON, Jay y Richard Falk. *Indefensible Weapons. The Political and Psychological case Against Nuclearism*, Basic Books, New York, 1982.
- MARÍÑEZ, Pablo A. "Granada: la democracia en las urnas de un país invadido", Mimeo, 1985.
- MARÍÑEZ, Pablo A. "República Dominicana: entre las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y la respuesta popular (1983-1985)", Mimeo, 1985.
- MARÍÑEZ, Pablo A. "Las fuerzas armadas en la República Dominicana: profesionalización y politización", Mimeo, 1987.
- NORDINGLIER, Erich A. "Soldiers in Mufti-impact of Military Rule upon Economic and Social Changes in Nonwestern States", en *American Political Science Review*, vol. 64, Núm. 4, Washington, D.C., 1970, pp. 1131-1148.
- PASTORE, Clara I. *United States Special Forces. Anything Anytime, Anyplace?* Center of Defense Information, Washington, D.C., 1984, citado por Deborah Barry (Vid Supra).
- PAYERAS, Mario. "La estrategia antiguerrillera del ejército guatemalteco: 1974-1984", Mimeo, 1985.
- PIERRE-CHARLES, Gérard. "Movimientos sociopolíticos en El Caribe", Mimeo, 1985.
- PIERRE-CHARLES, Gérard. *Radiographie d'une dictature Haiti et Duvalier*, Nouvelle Optique, Montreal, 1973.
- PIÑEYRO, José Luis. "Fuerzas armadas mexicanas y modernización militar", Mimeo, 1985.
- REAL DE AZUA, Carlos. *Ejército y política en el Uruguay*, Cuadernos de Marcha, Montevideo, 1969.
- RIAL, Juan. "Los militares en tanto 'partido político sustituto' frente a la redemocratización", Mimeo, 1985.
- RIVAROLA, Domingo M. "Los movimientos sociales en Paraguay", Mimeo, 1985.
- RIZZO DE OLIVEIRA, Eliezer. "Forças armadas e transição política: a política militar do governo Figueiredo", Mimeo, 1985.

- RODRIGUEZ BERUFF, Jorge. "Puerto Rico and the Militarization of the Caribbean: 1979-1984", en *Contemporary Marxism*, San Francisco, 1985, Núm 10, pp. 68-91.
- ROJAS, Fernando. "Los movimientos sociales frente a la crisis en Colombia", Mimeo, 1985.
- RONFELDT, David (ed). *The Modern Mexican Military: a Reassessment*, Center for U.S. Mexican Studies, University of California, San Diego, 1984.
- RUBIO, Marcial. "Las fuerzas armadas y su presencia en la estructura política peruana", Mimeo, 1985.
- SALCEDO, José María. "Con Sendero en Lurigancho", *Quehacer*, Núm 41, junio-julio de 1986, p. 22.
- SALOMON, Leticia. *Militarismo y reformismo en Honduras*, Guaymuras, Tegucigalpa, 1982.
- SANDOVAL RODRIGUEZ, Isaac. "Fuerzas armadas y poder político en Bolivia: 1978-1985", Mimeo, 1985.
- SELSER, Gregorio. *Bolivia, el cuartelazo de los sacadólares*, Mex-Sur Editores, México, 1982.
- SONNTAG, Heinz. "Venezuela: el desarrollo del Estado capitalista y de su concepción teórica", Mimeo, 1985.
- STEPAN, Alfred C. *Os Militares. Da Abertura a Nova Republica*, Paz e Terra, Río de Janeiro, 1986, 2a. edición.
- STOLOWICZ, Beatriz, et al. "La concertación y el rol de la izquierda uruguaya", Mimeo, 1985.
- VARAS, Augusto. "Democratización y reforma militar en Argentina", Mimeo, 1985.
- VEGA CARBALLO, José Luis. "Costa Rica: 1983. ¿Podrá sobrevivir la Suiza centroamericana?", Mimeo, 1984.
- VERDESOTO CUSTODE, Luis. "Los movimientos sociales, la crisis y la democracia en el Ecuador", Mimeo, 1985.
- ZAVERUCHA, Jorge. "As forca armadas no periodo de transicao: o governo Figueiredo", Mimeo, 1985.

Los militares y la política en América Latina, plantea en cada país y en toda la región el problema central del ciudadano y el militar, de los regímenes constitucionales y los regímenes de facto, de las democracias armadas y las democracias desarmadas. Es un libro fundamental para el estudio político de la transición a la democracia y de la superación democrática y popular de la crisis.

Diseño de portada: Alejandra Campos



PABLO GONZALEZ CASANOVA (Toluca, Estado de México, 1922), uno de los más prestigiados intelectuales mexicanos, obtuvo el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, que otorga el Gobierno de la República, en 1984. Director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas de la UNAM, de 1957 a 1965, fue rector de la máxima casa de estudios de 1970 a 1972. Profesor e investigador visitante de las universidades de Oxford, Cambridge y París, cuenta entre sus publicaciones con: *Las categorías del desarrollo económico y la investigación en ciencias sociales*, *Sociología de la explotación*, *La nueva metafísica y el socialismo*, *El Estado y los partidos políticos en México*, *La hegemonía del pueblo y la lucha centroamericana*, *La democracia en México e Imperialismo y liberación en América Latina*. Ha coordinado, asimismo, más de doce trabajos colectivos. Profesor y presidente del Consejo (de 1959 a 1965) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, miembro de la *World Commission on Environment and Development*, miembro del comité editorial de *International Social Journal* (París) y del consejo consultivo de *Nexus*, entre otros cargos y distinciones, coordina actualmente el proyecto "Las perspectivas de América Latina" bajo los auspicios de la UNAM y de la Universidad de las Naciones Unidas.

océano

09-ANF-513



09-ANF-513